

CONSEJO UNIVERSITARIO

ACTA DE LA SESIÓN n.º 6946 ORDINARIA

Celebrada el jueves 23 de octubre de 2025

Aprobada en la sesión n.º 6964 del jueves 29 de enero de 2026

TABLA DE CONTENIDO
ARTÍCULO

PÁGINA

1. APROBACIÓN DE ACTAS. Sesiones n.ºs 6915, 6916, 6918, 6919 y 6920.	3
2. INFORMES DE MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO.....	5
3. DICTAMEN CAJ-4-2025. Recursos de apelación del Sr. Manuel Rojas Salas contra las resoluciones CRA-603-2025, CRA-839-2025, CRA-996-2025 y CRA-997-2025.....	12
4. DICTAMEN CEO-8-2025. Valorar la reforma al artículo 28 del <i>Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica</i> , a fin de que los miembros del Consejo Universitario no se vean limitados para ejercer sus funciones académicas solamente en la unidad respectiva.	65
5. PROPUESTA PROYECTO DE LEY CU-142-2025. <i>Reforma del artículo 1 y adición de un capítulo V a la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres, Ley n.º 8589, del 25 de abril de 2007. Ley para el tratamiento de los crímenes de violencia de género por parte de los medios de comunicación</i> , Expediente legislativo n.º 24.563.....	74
6. DICTAMEN CDP-10-2025. Analizar la solicitud de la Escuela de Formación Docente de cambio de nombre oficial del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum por Departamento de Educación Secundaria.....	81
7. PROPUESTA DE MIEMBROS CU-20-2025 Prohibición de la venta de las botellas de plástico de un solo uso en la Universidad de Costa Rica.	90
8. DICTAMEN CCCP-7-2025. Revisar y actualizar las disposiciones de los títulos II y III del <i>Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica</i> de acuerdo con lo establecido en la <i>Ley marco de empleo público</i>	99

Acta de la **sesión n.º 6946, ordinaria**, celebrada por el Consejo Universitario a las ocho horas con treinta minutos del día jueves veintitrés de octubre de dos mil veinticinco en la sala de sesiones.

Participan los siguientes miembros: Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas, directora, Área de Artes y Letras; M. Sc. Jáírol Núñez Moya, rector *a. i.*; Dr. Keilor Rojas Jiménez, Área de Ciencias Básicas; Dra. Ilka Treminio Sánchez, Área de Ciencias Sociales; Dr. Eduardo Calderón Obaldía, Área de Ingeniería; Ph. D. Sergio Salazar Villanea, Área de Ciencias Agroalimentarias; Mag. Hugo Amores Vargas, sector administrativo; Srta. Isela Chacón Navarro y Sr. Fernán Orlich Rojas, sector estudiantil; y Lic. William Méndez Garita, representante de la Federación de Colegios Profesionales.

La sesión se inicia con la participación de los siguientes miembros: M. Sc. Jáírol Núñez Moya, Dr. Keilor Rojas Jiménez, Dra. Ilka Treminio Sánchez, Dr. Eduardo Calderón Obaldía, Ph. D. Sergio Salazar Villanea, Mag. Hugo Amores Vargas, Sr. Fernán Orlich Rojas, Lic. William Méndez Garita y Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas.

Ausentes, con excusa: Dr. Carlos Araya Leandro, M. Sc. Esperanza Tasies Castro y Dr. Jaime Alonso Caravaca Morera.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS informa que el Dr. Jaime Alonso Caravaca Morera se encuentra en la Sede Regional del Sur atendiendo asuntos del Consejo Universitario (CU) y la M. Sc. Esperanza Tasies Castro cuenta con un permiso para atender asuntos relacionados con el Tribunal Electoral Universitario (TEU).

La señora directora del Consejo Universitario, Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas, da lectura al orden del día:

1. Aprobación de las actas n.ºs 6915, ordinaria, del jueves 31 de julio de 2025; 6918, ordinaria, del martes 12 de agosto de 2025; 6919, ordinaria, del jueves 14 de agosto de 2025; 6920, extraordinaria, del lunes 18 de agosto de 2025; y 6916, ordinaria, del martes 5 de agosto de 2025.
2. Informes de miembros.
3. Informes de las personas coordinadoras de comisión.
4. **Comisión de Asuntos Jurídicos:** Recurso de apelación del Sr. Manuel Rojas Salas contra la resolución CRA603-2025 (**Dictamen CAJ-4-2025**).
5. **Comisión de Estatuto Orgánico:** Valorar la reforma al artículo 28 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*, a fin de que los miembros del Consejo Universitario no se vean limitados para ejercer sus funciones académicas solamente en la unidad respectiva. PRIMERA SESIÓN ORDINARIA (**Dictamen CEO-8-2025**).
6. **Propuesta de Dirección:** Proyecto de *Reforma del artículo 1 y adición de un capítulo V a la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres, Ley n.º 8589, del 25 de abril de 2007. Ley para el tratamiento de los crímenes de violencia de género por parte de los medios de comunicación*, Expediente legislativo n.º 24.563 (**Propuesta Proyecto de Ley CU-142-2025**).
7. **Comisión de Docencia y Posgrado:** Analizar la solicitud de la Escuela de Formación Docente de cambio de nombre oficial del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum por Departamento de Educación Secundaria (**Dictamen CDP-10-2025**).
8. **Propuesta de Miembro:** Prohibición de la venta de las botellas de plástico de un solo uso en la Universidad de Costa Rica (**Propuesta de Miembros CU-20-2025**).

9. **Comisión de Coordinadores Permanentes:** Revisar y actualizar las disposiciones de los títulos II y III del *Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica* de acuerdo con lo establecido en la *Ley Marco de Empleo Público (Dictamen CCCP-7-2025)*.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS informa que, en este momento, se incorpora la Srta. Isela Chacón Navarro.

****A las ocho horas y treinta y tres minutos, se incorpora la Srta. Isela Chacón Navarro.****

ARTÍCULO 1

La señora directora, Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas, somete a conocimiento del plenario las actas n.ºs 6915, ordinaria, del jueves 31 de julio de 2025; 6916, ordinaria, del martes 5 de agosto de 2025; 6918, ordinaria, del martes 12 de agosto de 2025; 6919, ordinaria, del jueves 14 de agosto de 2025; y 6920, extraordinaria, del lunes 18 de agosto de 2025.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS adelanta que para ninguna de las actas que a continuación someterá a votación se presentaron comentarios de forma ni de fondo. De igual manera, si alguna persona desea señalar algún comentario, solicita que, por favor, lo manifieste.

En discusión el acta de la sesión n.º 6915

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS somete a votación la aprobación del acta n.º 6915 (sin observaciones de forma), y se obtiene el siguiente resultado:

VOTAN A FAVOR: M. Sc. Jáírol Núñez Moya, Dr. Eduardo Calderón Obaldía, Dra. Ilka Treminio Sánchez, Sr. Fernán Orlich Rojas, Mag. Hugo Amores Vargas, Lic. William Méndez Garita, Srta. Isela Chacón Navarro, Ph. D. Sergio Salazar Villanea, Dr. Keilor Rojas Jiménez y Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas.

TOTAL: Diez votos.

EN CONTRA: Ninguno.

En discusión el acta de la sesión n.º 6916

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS somete a votación la aprobación del acta n.º 6916 (sin observaciones de forma), y se obtiene el siguiente resultado:

VOTAN A FAVOR: M. Sc. Jáírol Núñez Moya, Dr. Eduardo Calderón Obaldía, Dra. Ilka Treminio Sánchez, Sr. Fernán Orlich Rojas, Mag. Hugo Amores Vargas, Lic. William Méndez Garita, Srta. Isela Chacón Navarro, Ph. D. Sergio Salazar Villanea, Dr. Keilor Rojas Jiménez y Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas.

TOTAL: Diez votos.

EN CONTRA: Ninguno.

En discusión el acta de la sesión n.º 6918

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS somete a votación la aprobación del acta n.º 6918 (sin observaciones de forma), y se obtiene el siguiente resultado:

VOTAN A FAVOR: M. Sc. Jáírol Núñez Moya, Dr. Eduardo Calderón Obaldía, Dra. Ilka Treminio Sánchez, Sr. Fernán Orlich Rojas, Mag. Hugo Amores Vargas, Lic. William Méndez Garita, Srta. Isela Chacón Navarro, Ph. D. Sergio Salazar Villanea, Dr. Keilor Rojas Jiménez y Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas.

TOTAL: Diez votos.

EN CONTRA: Ninguno.

En discusión el acta de la sesión n.º 6919

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS somete a votación la aprobación del acta n.º 6919 (sin observaciones de forma), y se obtiene el siguiente resultado:

VOTAN A FAVOR: M. Sc. Jáírol Núñez Moya, Dr. Eduardo Calderón Obaldía, Dra. Ilka Treminio Sánchez, Sr. Fernán Orlich Rojas, Mag. Hugo Amores Vargas, Lic. William Méndez Garita, Srta. Isela Chacón Navarro, Ph. D. Sergio Salazar Villanea, Dr. Keilor Rojas Jiménez y Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas.

TOTAL: Diez votos.

EN CONTRA: Ninguno.

En discusión el acta de la sesión n.º 6920

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS somete a votación la aprobación del acta n.º 6920 (sin observaciones de forma), y se obtiene el siguiente resultado:

VOTAN A FAVOR: M. Sc. Jáírol Núñez Moya, Dr. Eduardo Calderón Obaldía, Dra. Ilka Treminio Sánchez, Sr. Fernán Orlich Rojas, Mag. Hugo Amores Vargas, Lic. William Méndez Garita, Srta. Isela Chacón Navarro, Ph. D. Sergio Salazar Villanea, Dr. Keilor Rojas Jiménez y Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas.

TOTAL: Diez votos.

EN CONTRA: Ninguno.

Por lo tanto, el Consejo Universitario aprueba las actas n.ºs 6915, ordinaria, del jueves 31 de julio de 2025; 6916, ordinaria, del martes 5 de agosto de 2025; 6918, ordinaria, del martes 12 de agosto de 2025; 6919, ordinaria, del jueves 14 de agosto de 2025; y 6920, extraordinaria, del lunes 18 de agosto de 2025, sin observaciones de forma.

ARTÍCULO 2

Informes de miembros del Consejo Universitario

- **Comentario en torno a oficios enviados por la Contraloría General de la República**

EL DR. KEILOR ROJAS JIMÉNEZ da los buenos días. Desea referirse a un tema particular respecto a unas cartas que ha enviado la Contraloría General de la República (CGR). Puntualmente, en el oficio DFOE-SEM-1821 del 7 de octubre de 2025, la CGR se refiere a la disposición 4.5 de un informe solicitado en el 2025 sobre (...) *la implementación de acciones para que los contratos de dedicación exclusiva suscritos a partir de la entrada en vigencia de la Ley n.º 9635 se ajustaran a la vigencia finita y los porcentajes de compensación establecidos en dicho marco normativo*. En cuanto a esta disposición, la CGR informa que se da por cumplida y finiquitada —aspecto que todos aplauden—. Recuerda que el Dr. Carlos Araya Leandro lo mencionó en una ocasión anterior. Felicita a todas las partes involucradas para que esto se logre.

Sin embargo, también quisiera referirse al oficio DFOE-SEM-1565 del 28 de agosto de 2025. Contextualiza que este oficio se refiere a la disposición 4.4 del informe de la CGR al que anteriormente se refirió, el cual tiene que ver con

(...) la emisión de una instrucción a las Direcciones competentes para la elaboración de un análisis integral de los casos en que se reconoció el pago de porcentajes superiores de dedicación exclusiva, pagos por concepto de incentivos salariales no nominalizados, aumentos a las remuneraciones totales que superaban el tope establecido y el reconocimiento simultáneo de viáticos y dietas.

Con respecto a este oficio, considera que no se ha aclarado suficiente entre la comunidad universitaria, aunque han aparecido un par de reportajes en la prensa recientemente.

Remarca que le gustaría leer, de forma textual, un par de párrafos de este oficio de la CGR (DFOE-SEM-1565), los cuales, a la letra, señalan:

En relación con la disposición 4.4 se determinó que la Rectoría, a la fecha, no ha acreditado la realización de un análisis integral y definitivo de los casos en que se reconoció el pago de porcentajes superiores de dedicación exclusiva, pagos por concepto de incentivos salariales no nominalizados, aumentos a las remuneraciones totales que superaban el tope establecido y el reconocimiento simultáneo de viáticos y dietas. Asimismo, tampoco se ha acreditado la definición de las acciones requeridas que legalmente correspondan ante posibles pagos improcedentes, de manera que se garantice no solo la eficiencia en el uso de los recursos públicos, sino también la protección de la Hacienda Pública.

Se le recuerda la importancia de gestionar de forma oportuna, respetando siempre el debido proceso, cualquier acción de cobro que corresponda a su representada. Es fundamental llevar a cabo los análisis necesarios para determinar la procedencia de estas gestiones, esto garantiza la protección del patrimonio de la Administración, ya que la omisión en el cobro o la prescripción de los mismos, podría generar responsabilidad. En este sentido, es relevante tener presente lo que establece el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que faculta a esta entidad a determinar y exigir el resarcimiento de los daños que se causen al patrimonio público por la inacción de la Administración en la recuperación de los montos adeudados.

En razón de lo expuesto, es criterio de la Contraloría General que la disposición 4.4 del informe n.º DFOE-CAP-IAD-00009-2023 ha sido incumplida por el Dr. Carlos Araya Leandro en su calidad de rector de la Universidad de Costa Rica, ya que feneció el plazo otorgado en la reiteración emitida al amparo del artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, sin que esa Administración cuente con un análisis integral solicitado, ni la definición de las acciones requeridas que legalmente correspondan ante posibles pagos improcedentes, según lo requerido en la citada disposición, ni tampoco con una orden judicial con carácter suspensivo de los efectos. Por tanto,

conforme a las competencias del Órgano Contralor, se procederá a iniciar otra acción de fiscalización sobre el particular.

Al respecto, exterioriza que leer esto le causó preocupación. Por otro lado, ha escuchado que la Rectoría y la Administración han presentado un argumento muy poderoso para defender, relacionado con el hecho de que hay un proceso contencioso administrativo en estos momentos y lo que ahí se resuelva podría definir si se debe proceder o no.

Como comentario adicional, manifiesta que es importante que la Administración realice las aclaraciones correspondientes tanto a la comunidad universitaria como a las personas que, eventualmente, podrían resultar afectadas.

En cuanto a la CGR, remarca que, posiblemente, por un sesgo, pues le ha correspondido trabajar en gobiernos, cuando la CGR dice algo, todo el mundo “corre” a cumplir. Su sugerencia es que la Administración presente escenarios, por ejemplo, que si el proceso contencioso administrativo fuera en determinada línea, tal como que la Ley n.º 9635, *Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas*, no aplica a las universidades públicas, entonces todo se detendría y “todo bien”; por el contrario, si el contencioso administrativo fuera en otra línea, entonces, que la Administración plantee cuáles son las acciones que, en una eventualidad, podría tomar la Administración (esto, a partir de un análisis detallado íntegro).

Manifestado lo anterior, resalta que deben responder. En esta respuesta se pueden presentar los escenarios y advertir que deben ser precavidos respecto a que el proceso contencioso se resuelva para proceder de acuerdo con lo que este señale, pero reitera que deben tener la precaución de responder a cada una de las disposiciones, tal como se hizo en la disposición 4.5 (la cual ya se dio por cumplida). Reitera su llamado a la Administración para que, ojalá, pueda llevar a cabo los estudios correspondientes, dar las aclaraciones a la comunidad universitaria y que pueda atender estas consultas de la CGR.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS cede la palabra al Mag. Hugo Amores Vargas.

EL MAG. HUGO AMORES VARGAS da las gracias al Dr. Keilor Rojas Jiménez por presentar el tema. Agrega a lo señalado por el Dr. Keilor Rojas Jiménez que, efectivamente, esto fue un estudio llevado a cabo por la CGR en el 2023. Desde esa fecha, se ha venido trabajando para solventar cada uno de los puntos indicados por la CGR, sin olvidar que en marzo de este año (2025) se dictó una sentencia que llegó a cambiar totalmente la visión de estas leyes, tanto la Ley n.º 9635, *Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas*, como algunos capítulos o temas aplicables de la *Ley Marco de Empleo Público*.

Remarca que la existencia de procesos judiciales, sin duda, no significa que no deba acatarse lo que indica la CGR, pero aquí hay varios puntos de inflexión relacionados con la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo y, eventualmente, con la violación de derechos laborales adquiridos.

Explica que los contratos de dedicación exclusiva anteriores a la *Ley Marco de Empleo Público* se mantienen para siempre, no se pueden modificar ni eliminar, mantienen el porcentaje original. Aclara que la situación afectaría a los nuevos contratos o los contratos que se vayan a renovar dentro de ese periodo (se modificaría el porcentaje).

Ahora bien, resalta que la Administración debe llevar a cabo un análisis detallado, pormenorizado, en el tanto cabe preguntarse si pueden hacer regresivo un derecho laboral, si lo eliminan, en un momento en que existe jurisprudencia encontrada, donde, más bien, se están volviendo a reconocer derechos de las personas docentes y administrativas de esta Universidad y cuando se está viendo que cada vez hay más resoluciones judiciales que están dando razón a las universidades públicas y a los entes u órganos de este país que interpusieron acciones judiciales en esa vía. Este punto lo señala para, eventualmente, sumar a

la discusión. No obstante, como bien fue indicado por el Dr. Keilor Rojas Jiménez, se trata de algo que, eventualmente, la Administración debe presentar. Destaca que el M. Sc. Jáiro Núñez Moya solicitó la palabra, supone que será para referirse a este tema.

Remarca un punto en el que no está de acuerdo en cuanto a la publicación de la noticia por parte de la prensa, puntualmente, el título. Contextualiza que la CGR lleva a cabo un estudio, un análisis y, al leer el fondo de la noticia que se publicó el día anterior (22 de octubre de 2025), en efecto, esto debe llevar un debido proceso, se debe cumplir con toda una investigación, pero, en ocasiones, da la impresión de que la prensa “llega, resuelve y juzga a la vez, y da la sentencia”, lo cual es algo complejo en estos entornos políticos.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS, antes de dar la palabra al M. Sc. Jáiro Núñez Moya, desea referirse a lo señalado: en este momento está enfrentada la CGR con los fallos de la Sala Constitucional. Una instancia va en contra de los derechos laborales de las personas trabajadoras, mientras que la otra, más bien, está fortaleciendo los derechos laborales de las personas trabajadoras. De modo que, más bien, están en medio de una disputa en otro nivel (todo el sector público, pues no se trata solo de la Universidad de Costa Rica [UCR]). Cede la palabra al M. Sc. Jáiro Núñez Moya.

EL M. SC. JÁIROL NÚÑEZ MOYA da la gracias. Menciona que, como bien se ha señalado, sin duda alguna, el señor rector se referirá con mayor extensión al tema (es probable que la próxima semana). Destaca que es importante recalcar que el día anterior (22 de octubre de 2025) se envió un comunicado en el cual se indica, de manera precisa, que estos son “temas heredados” de la Administración anterior, los cuales se han procedido a abordar.

Justamente, el oficio del 7 de octubre de 2025 evidencia cómo se ha dado seguimiento a estos dos elementos. Con el fin de poder remarcar lo que la Administración ha venido haciendo, se indica que en el oficio R-4857-2025, remitido el 30 de junio de 2025 a la CGR, la Universidad detalla las acciones que se han emprendido en relación con el tema. En este punto, explica que aquí se presentan dos temas: uno, el relacionado con las personas a las que se les pagó por encima del tope; y dos, se trata de la situación del porcentaje de dedicación exclusiva.

Detalla que la instrucción de la Oficina de Recursos Humanos (ORH) fue realizar, precisamente, un análisis exhaustivo de los casos individuales vinculados con los contratos (en el caso de la dedicación exclusiva), los topes salariales y los incentivos no nominalizados. Al respecto, se ha procedido con la verificación técnica de los montos involucrados y el ajuste de los casos en los que se identificaron remuneraciones que excedían los límites legales, y se ha producido una comunicación transparente y continua con la CGR, de manera que, si bien se cuenta con este informe del 28 de agosto de 2025 respecto a algunos de los pendientes, el informe del 7 de octubre de 2025 evidencia, de forma clara, cómo ha habido un cumplimiento y un interés por poder ir resolviendo esta situación que fue —reitera— heredada.

Señala que la ORH ya ha ido haciendo el análisis y ha estado contactando a las personas. Este proceso se ha demorado un poco. Como es de conocimiento, se tuvo que llevar a cabo una migración tecnológica en relación con el Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH), lo cual ha afectado el seguimiento. Contextualiza que este ha sido un proceso de ocho meses, ya que, en lo respecta a este tema, al momento de asumir la presente Administración, no se había realizado ninguna acción destinada a poder realizar un estudio asociado a cuál era la condición de las personas, cuáles eran las personas, la procedencia (sobre todo para quienes recibían el 25 % y 30 %), y, en el caso de los topados, también se encontraron que ya muchas de estas personas se han acogido a su jubilación, esto implica dar un seguimiento para determinar cómo se procede con el cobro de lo correspondiente. Reitera que este proceso ha sido bastante complejo en relación con la cantidad de personas que están inmersas en las diferentes condiciones, reitera que incluso muchas de estas personas ya están pensionadas.

El punto de los topados ya está en ejecución, se han contactado, poco a poco, para definir el caso de la ruta a seguir para la devolución. En esa línea, hay personas que, además, han interpuesto recursos ante la Oficina Jurídica, lo cual también ha complejizado la situación, deben esperar pues estos recursos tienen que resolverse. De igual manera, reflexiona que hay que entender que para la ORH los análisis específicos (incluso los del fallo constitucional) han sido extensos. Desde la Rectoría se les ha apoyado con plazas temporales, con el fin de poder atender esto, que se trata de un trabajo adicional al trabajo regular de la ORH, a fin de que se procure “sacar todo”.

Repite que la migración del sistema SIRH ha sido prioridad, en este caso, a fin de poder contar con los datos suficientes y generar también un cobro que corresponda con la veracidad de los hechos acontecidos. También, recuerda que el informe de la CGR es del 2023; entre 2023 y 2024 no se procedió, es en este 2025 que están dando atención y abordando con responsabilidad el caso para todas las partes (tanto respecto a lo solicitado por la CGR como en procura de atender lo que establece la normativa nacional e institucional y, principalmente, los derechos de las personas trabajadoras). Reitera que el señor rector se referirá de manera extensiva en la sesión del próximo martes.

*****A las ocho horas y cincuenta y dos minutos, se retira el Mag. Hugo Amores Vargas.*****

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS cede la palabra a la Dra. Ilka Treminio Sánchez.

LADRA. ILKA TREMINIO SÁNCHEZ remarca que su informe de miembro también versa sobre este tema. Expresa a la comunidad nacional y universitaria que, de su parte, considera que toda institución debe continuar los procesos heredados de las administraciones anteriores, se trata de un principio de continuidad, no existe manera de desacatar lo que está en proceso de seguimiento. El hecho de que se haya originado esta situación en un momento previo no puede ser excusa legal ni ética para no asumir acciones de seguimiento y acatamiento de órdenes y petitorias de la CGR.

Desea subrayar que, además, las órdenes y las petitorias de la CGR son de acatamiento obligatorio, de manera tal que la notificación de que tenemos en ciernes un informe de fiscalización por parte de la CGR no solo es una mala noticia, sino un riesgo mal gestionado, una reacción a una acción desobediente y arbitraria de parte de la Administración.

No puede haber una respuesta omisa a la CGR. Todo proceso paralelo debió ser informado y empleado para motivar una respuesta que permitiera explicar a qué se debían los retrasos o la espera en dichos procedimientos, máxime que fue, precisamente, en el 2025, cuando, durante esta Administración, se solicitó la prórroga a junio de 2025.

*****A las ocho horas y cincuenta y cuatro minutos, se incorpora el Mag. Hugo Amores Vargas.*****

Manifiesta que nunca en la historia de la Universidad de Costa Rica se ha recibido un oficio de incumplimiento, y esto acarrea serios costos de reputación para la UCR. Considera fundamental que establezcan una acción que les permita disminuir el riesgo reputacional de la Universidad, una Universidad que, en la mayoría de las encuestas, ha estado con porcentajes de aprobación por encima del 70 %, del 80 %, lo cual se debe mantener, así como la confianza y, sobre todo, la imagen de que se respeta y se cumple con las solicitudes de información de órganos como la CGR.

Además, señala que, dado a que el oficio recae sobre la persona que ocupa la Rectoría, es importante solicitarle que brinde un informe completo en conjunto con las personas que llevan este proceso para poder conocer a fondo el estado de la situación.

Asimismo, manifiesta la importancia de comunicar a la CGR sobre los procesos judiciales abiertos, y expresa que esto no los exime (a la UCR) de brindar una respuesta.

Para finalizar, refiere que apoya las palabras y la propuesta planteada por el Dr. Keilor Rojas Jiménez sobre presentar los posibles escenarios de la recuperación de costos y también el escenario abierto por el proceso judicial que se lleva en paralelo a la CGR desde el punto de vista que no se puede no responder, aunque sea de manera extemporánea, se debe hacer llegar un informe a la CGR.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS cede la palabra al M. Sc. Járol Núñez Moya para que se refiera a este punto.

EL M. SC. JÁIROL NÚÑEZ MOYA agradece a la Dra. Ilka Treminio Sánchez por haber iniciado su intervención con la precisión de que se trata de continuar con lo “heredado” de la Administración anterior. En efecto, remarca que esto es lo que están acatando. No considera que sea una mala noticia ni desobediencia, cuando el asunto se está abordando responsablemente. Aclara que no se trata de que haya “respuesta omisa”, sino que hay una respuesta motivada y proactiva que implica estar trabajando en un tema y en la revisión de lo no actuado, pues, también, nunca en la historia de la UCR una Administración había dejado de actuar y heredado así incumplimientos, como los ha tenido que abordar la presente Administración.

Respetar a la CGR, justamente, implica hacer una revisión responsable y tratar de sacar adelante lo no gestionado —que no es poco— y, por lo mismo es que se están tomando acciones. Considera que, sin duda, el informe completo que se emitirá y que será de conocimiento de todos y todas en relación con este tema, va a aclarar cómo, en este proceso en el cual han estado asumiendo algunas de las situaciones heredadas, se ha actuado con responsabilidad y se le ha dado la cara también a las personas en un respeto de los derechos de los trabajadores y en un proceso que tiene que ser consensuado, sin que implique un maltrato para las personas que, de alguna manera, se vieron afectadas por esta inacción.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS, al no haber más solicitudes para el uso de la palabra, en relación con este tema, cede la palabra al Mag. Hugo Amores Vargas.

- **Actividad de integración para el personal de nuevo ingreso en la Universidad**

EL MAG. HUGO AMORES VARGAS informa que el día anterior (22 de octubre de 2025) participó en dos actividades que describe como “muy bonitas”. La primera correspondió a un encuentro de integración para dar la bienvenida al personal administrativo de nuevo ingreso a la UCR. Esta actividad se llevó a cabo en el auditorio de la Unidad de Conocimiento Agroalimentario. Se contó con la participación de, aproximadamente, 30 personas, junto con el personal de la ORH, de otras oficinas y dependencias.

Resalta que estas actividades son muy importantes porque, además de recibir de manera afectuosa a las nuevas personas funcionarias que van a trabajar en diferentes instancias alrededor del país (en la Universidad), se les puede brindar un mensaje de apropiación, de identidad, y de cómo en la UCR las personas “se ponen la camiseta”, y de los retos que estas personas asumirán al integrarse a una de las mejores universidades de América Latina y la mejor del Caribe, así como la responsabilidad que tienen de llevar el nombre UCR.

De modo que esta fue una actividad que lo llenó de mucha satisfacción, se sintió muy complacido de haber tenido la oportunidad de unirse durante la mañana. Remarca que compartió con las personas funcionarias que asumen nuevos retos dentro de la UCR y que van a ser partícipes de las actividades sustantivas que se lleven a cabo.

- **Participación en graduación**

EL MAG. HUGO AMORES VARGAS comparte que participó en el acto de graduación de la Sede Regional del Atlántico. Aproximadamente, se graduaron 60 nuevos profesionales. Junto con el M. Sc. Jáirol Núñez Moya, tuvo el gusto de participar en esta linda actividad. Resalta que tuvieron la oportunidad de presenciar la graduación de Adrián, un joven de origen cabécar, resalta la participación de su familia (su papá, su pareja y un tío), se trató de una bonita experiencia. Además, compartió con una asociación de estudiantes indígenas, quienes les ofrecieron un café y un acto cultural dirigido por un joven que tocó la guitarra y entonó canciones en lengua cabécar. Describe que fue algo “espectacular” compartir esta graduación, resalta que fue muy bonito entregarle el título al joven Adrián. Es claro que también escucharon las demandas y las necesidades que tienen —propone que el M. Sc. Jáirol Núñez Moya se refiera con mayor detalle— en cuanto a cursos, carreras y así llenar espacios y necesidades que presentan estas comunidades indígenas en el país.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS manifiesta que, en ocasiones, se olvida que las poblaciones autóctonas se ubican a lo largo del país y, en general, no se asocia Turrialba con estas poblaciones, pero remarca, para la comunidad que los escucha, que se cuenta con un grupo importante de personas de origen cabécar y bribri que están asociadas con la Sede Regional del Atlántico (en Turrialba), así como muchos proyectos de acción social y de investigación están asociados con esta población. Por ejemplo, en Grano de Oro, entre otras localidades.

- **Acciones realizadas desde el estudiantado de la Facultad de Derecho en relación con la situación de inundaciones**

LA SRTA. ISELA CHACÓN NAVARRO adelanta que hablará, brevemente, sobre dos temáticas. La primera está relacionada con una reunión que sostuvo con la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho con respecto a la situación de las inundaciones. El día anterior (22 de octubre de 2025) tuvieron la oportunidad de explicarle algunos de los movimientos que han llevado a cabo desde el estudiantado para lidiar con la problemática de las inundaciones en el edificio. Le comentaron que han realizado una extensiva revisión legal con respecto al asunto de la quebrada Los Negritos, han encontrado puntos sumamente interesantes.

Como pudieron observar, algunas personas estudiantes llevaron a cabo una manifestación en la que también se han conectado con vecinos cercanos, movimientos sociales que buscan brindar ayuda. Agrega que la asociación le planteó (a la Srta. Isela Chacón Navarro) un llamado, por cuanto les gustaría tener un mayor involucramiento con los esfuerzos institucionales para arreglar la situación, por lo menos desde adentro.

Conocen y tienen muy claro que las municipalidades y el Gobierno son quienes deben lidiar con esta situación, tienen muy claro qué fue lo que ocurrió y qué es lo que deben arreglar. Sin embargo, la asociación desea entender mejor los comunicados para así tener la posibilidad de hablar al estudiantado respecto a las medidas que se van a tomar. Las personas de la Asociación de Estudiantes manifestaron no sentir que exista esta conexión, por lo menos con la Decanatura. Les gustaría ser invitados a una mesa de trabajo con la Administración, de tal manera que así puedan estar más de cerca con las decisiones que se están tomando para lidiar con esta situación que afecta directamente su derecho a la educación. Lo anterior, aunado al hecho de que otras asociaciones estudiantiles se están empezando a ver afectadas, tal como ocurrió con la Facultad de Ciencias Económicas. De hecho, le gustaría recalcar el gran esfuerzo que han estado propiciando desde esas asociaciones, en específico, la de Administración Pública, la cual ha estado recolectando donaciones para las personas que habitan en Barrio Dent y Barrio Escalante (lugares afectados por las inundaciones).

También, conoce que el sábado anterior (18 de octubre de 2025) la Asociación de la Facultad de Derecho llevó a cabo un voluntariado para ayudar a arreglar las casas, ya que quedaron completamente destruidas.

En virtud de la situación expuesta, solicita al M. Sc. Jáirol Núñez Moya si es posible ayudar a la conexión con las asociaciones estudiantiles, las cuales guardan un gran interés por colaborar. También, sugiere si es posible comunicar al estudiantado, de manera más efectiva, las acciones que está llevando a cabo la Institución, así como aportar su propia perspectiva sobre lo que se podría solventar.

- **Recordatorio a la comunidad estudiantil en relación con las elecciones estudiantiles**

LA SRTA. ISELA CHACÓN NAVARRO, como segundo tema, recuerda a la comunidad estudiantil en específico que ya empiezan las elecciones federativas. Como ha señalado anteriormente, no piensa involucrarse mucho, pero destaca que, desde el Consejo Universitario, hicieron un llamado importante sobre las acciones que se deben tomar desde los diferentes espacios electorales con respecto a la violencia política contra la mujer.

Puntualmente, le gustaría hacer un llamado a la comunidad estudiantil para que reflexionen sobre el espacio que se ha procurado crear desde el CU y desde el movimiento estudiantil, a fin de que sea un espacio libre de hostigamiento y acoso sexual. Considera que es importante que reflexionen sobre quiénes van a ocupar las representaciones estudiantiles y que los principios se cumplan. Remarca que este también es un llamado al Tribunal Electoral Estudiantil Universitario y a las personas que forman la democracia para que piensen bastante bien por quién se está votando, que los principios se mantengan y se respeten y que, ojalá, los espacios del movimiento estudiantil feministas se mantengan dentro de estos principios.

- **Comentario de visitas realizadas en relación con el uso de la tecnología para el tratamiento de residuos**

EL DR. EDUARDO CALDERÓN OBALDÍA da los buenos días. Comenta sobre los alcances de las visitas que realizó hace algunos días. Destaca que, definitivamente, la tecnología para el tratamiento de los residuos o de la basura en general es una realidad. Solo para mencionar un ejemplo, ilustra que ha visto ríos en grandes ciudades que antes eran una cloaca y ahora tienen peces y las familias pueden acercarse a disfrutar del agua limpia. Este es solo un ejemplo de lo que conlleva generar un manejo adecuado de los recursos con las tecnologías correspondientes.

Adelanta que, en los próximos días, estará compartiendo al pleno una propuesta de miembros para, justamente, incentivar a la Administración a incorporar este tipo de tecnologías en nuestra Institución a la luz de los convenios que tiene la Universidad en la línea de financiamiento para proyectos de medio ambiente e impacto social.

- **Recordatorio de votaciones para la elección de miembros del Consejo Universitario**

EL PH. D. SERGIO SALAZAR VILLANEA remarca que su intervención será muy breve. Le gustaría utilizar el espacio para recordar a la comunidad universitaria que mañana (24 de octubre de 2025) se llevarán a cabo las votaciones para la elección de las personas representantes ante el CU por las áreas de Artes y Letras, Salud, Ingeniería y Sedes Regionales.

Hace un llamado de participación a la comunidad universitaria, personas docentes y estudiantes que tienen participación en la Asamblea Plebiscitaria y a las personas administrativas y de colegios profesionales. Recalca que este es un llamado al voto, como corresponde.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS da las gracias al Ph. D. Sergio Salazar Villanea. Destaca que, precisamente, ella tenía la intención de referirse a dicho llamado, una vez que todas las personas miembros expusieran sus informes. Recuerda a las personas a las que no les agrada votar por medios digitales que, en ciertas bibliotecas, se dispondrá de recintos especiales, a fin de que puedan emitir el voto de manera directa.

Por su parte, estará abriendo el recinto ubicado en la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, donde depositará su voto. En resumen, para esta votación se cuenta con dos modalidades: el voto por medios virtuales y el voto físico en los lugares establecidos. En el sitio web del TEU se puede revisar en cuáles lugares hay posibilidades de presentarse a emitir el voto físicamente. Invita a la comunidad a participar. Reflexiona que es importante definir a quiénes van a apoyar para que lleguen al Órgano Colegiado. Espera que no se presente ningún problema con la tecnología, de modo que puedan emitir el voto responsablemente.

Finalizado este punto, se continúa con la atención de los informes de las personas coordinadoras de comisión. Al no haber solicitudes para el uso de la palabra en torno a este punto, el pleno procederá a tomar un receso de cinco minutos.

*****A las nueve horas y diez minutos, el Consejo Universitario hace un receso.*

*A las nueve horas y quince minutos, se reanuda la sesión, con la presencia de los siguientes miembros: M. Sc. Jáírol Núñez Moya, Dr. Eduardo Calderón Obaldía, Dra. Ilka Treminio Sánchez, Mag. Hugo Amores Vargas, Lic. William Méndez Garita, Srta. Isela Chacón Navarro, Ph. D. Sergio Salazar Villanea, Dr. Keilor Rojas Jiménez y Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas.*****

ARTÍCULO 3

La Comisión de Asuntos Jurídicos presenta el Dictamen CAJ-4-2025 sobre los recursos de apelación del Sr. Manuel Rojas Salas contra las resoluciones CRA-603-2025, CRA-839-2025, CRA-996-2025 y CRA-997-2025.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS comunica que, a continuación, debido a la sensibilidad de los datos que serán discutidos, se suspenderá por unos minutos la transmisión. La información se consignará en actas, posteriormente. Cede la palabra al Mag. Hugo Amores Vargas.

*****Se suspende la transmisión de la sesión.*****

EL MAG. HUGO AMORES VARGAS contextualiza que en la sesión del martes (21 de octubre de 2025) analizaron un recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra las resoluciones de la Comisión de Régimen Académico (CRA). El caso anterior era un poco más sencillo porque se acogieron todas las recomendaciones. Para este otro caso, recuerda que esta temática contra calificaciones otorgadas por la CRA a las publicaciones que son sometidas a evaluación, por tratarse de apelaciones presentadas de forma directa (en este caso no hubo recurso de revocatoria), le corresponde al CU conocer y resolver dichos recursos de apelación. Estos recursos se trasladan a la Comisión de Asuntos Jurídicos (CAJ).

Para este caso, al corresponder a una misma persona, había entonces concurrencia de persona, sujeto y causa. Se tomó la decisión de subsumir los recursos que presentó esta persona en un único caso, que es el que se está comentando. El dictamen consta de 51 páginas, no leerá todas las páginas, pero sí se referirá de forma clara, pues se supone que todas las personas miembros del Órgano Colegiado leyeron el dictamen y tienen claridad sobre lo que se resolvió en la comisión.

****A las nueve horas y diecisiete minutos, se incorpora el Sr. Fernán Orlich Rojas.****

Detalla que los recursos fueron presentados por el Dr. Manuel Rojas Salas, docente de la Facultad de Derecho, en contra de las calificaciones otorgadas a cuatro artículos (los cuales subsumieron en una sola resolución, por tal motivo es que la resolución es tan extensa) que fueron sometidos a la CRA. En consecuencia, en el recurso, el Dr. Manuel Rojas Salas solicita modificar los puntajes que, originalmente, fueron otorgados. A partir del análisis de la lectura que se hizo en cada uno de los casos de las personas especialistas que fueron consultadas, se logró determinar lo siguiente:

ANTECEDENTES

1. Mediante el Pase CU-51-2025, del 3 de junio de 2025, se le solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos (CAJ) dictaminar acerca del siguiente caso: Recurso de apelación presentado por el Dr. Manuel Rojas Salas en contra de la resolución de calificación CRA 603-2025 (sic).
2. Mediante el Pase CU-52-2025, del 3 de junio de 2025, se le solicitó a la (CAJ) dictaminar acerca del siguiente caso: Recurso de apelación presentado por el Dr. Manuel Rojas Salas en contra de la resolución de calificación CRA 839-2025 (sic).
3. Mediante el Pase CU-53-2025, del 3 de junio de 2025, se le solicitó a la (CAJ) dictaminar acerca del siguiente caso: Recurso de apelación presentado por el Dr. Manuel Rojas Salas en contra de la resolución de calificación CRA 996-2025 (sic).
4. Mediante el Pase CU-54-2025, del 3 de junio de 2025, se le solicitó a la (CAJ) dictaminar acerca del siguiente caso: Recurso de apelación presentado por el Dr. Manuel Rojas Salas en contra de la resolución de calificación CRA 997-2025 (sic).

ANÁLISIS DEL CASO

En razón de que los recursos de apelación interpuestos por el docente de la Facultad de Derecho, el Dr. Manuel Rojas Salas, versan sobre una misma temática, es decir, contra calificaciones otorgadas por la Comisión de Régimen Académico (CRA) a publicaciones sometidas a evaluación, por tratarse de apelaciones presentadas en forma directa (no hubo presentación del recurso de revocatoria), le corresponde al Consejo Universitario conocer y resolver dichos recursos de apelación. Las apelaciones fueron trasladadas al Consejo Universitario por la CRA en cuatro oficios distintos, todos del 22 de mayo de 2025, y se trasladaron a la Comisión de Asuntos Jurídicos (CAJ) en pases con numeración consecutiva y con una misma fecha (3 de junio de 2025). La CAJ tomó la decisión de subsumir los cuatro recursos y presentar al plenario la resolución de cada uno en un único dictamen.

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en el análisis de cada uno de los recursos de apelación que fueron presentados por el docente de la Facultad de Derecho, el Dr. Manuel Rojas Salas, en contra de las calificaciones otorgadas a cuatro artículos sometidos a evaluación ante la Comisión de Régimen Académico (CRA), estimó pertinente acoger los referidos recursos y en consecuencia modificar los puntajes que originalmente fueron otorgados. Esto en razón de que, a partir del análisis y lectura de la prosa desarrollada por las personas especialistas que fueron consultadas, se logró determinar que sus criterios se encuentran por encima o son muy superiores a los que en su momento externó la CRA en su valoración inicial.

I. Recurso de apelación presentado por el Dr. Manuel Rojas Salas en contra de la resolución de calificación CRA 603-2025 (sic), Pase CU-51-2025, del 3 de junio de 2025. Artículo: “El fraude de simulación: un tipo penal incomprometido”.

1. El 28 de abril de 2023, el docente de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel Rojas Salas, con el propósito de actualizar el puntaje en Régimen Académico, presentó a evaluación el artículo “El fraude de simulación: un tipo penal incomprometido” (solicitud n.º 15302, del 28 de abril de 2023).
2. En la resolución de calificación n.º 2963-33-2023, del 1.º de noviembre de 2023, la Comisión de Régimen Académico (CRA) le otorgó 0,75 de puntaje al considerar que posee moderada originalidad, moderada relevancia, moderada trascendencia y poca complejidad.

3. No conforme con el resultado de la evaluación, el 25 de septiembre de 2024, el docente Rojas Salas presentó de manera directa un recurso de apelación en contra de la resolución de calificación n.º 2963-33-2023, del 1.º de noviembre de 2023. La integralidad del recurso se adjunta al expediente del caso.
4. La Circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, de la Vicerrectoría de Docencia, y su posterior adición del 2 de marzo de 2021, explicita el deber del personal docente de colaborar de forma consultiva con la CRA; así como la responsabilidad que tienen las personas que ocupan puestos de autoridad superior jerárquica en las unidades académicas, de cuidar que la persona docente designada para colaborar cumpla en tiempo y forma, con la solicitud requerida por ese Órgano.
5. El 20 de febrero de 2024, la CRA, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 TER del *Reglamento de Régimen Académico y de Servicio Docente*, y de acuerdo con lo indicado en la circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, y su posterior adición del 2 de marzo de 2021, previo a elevar en alza el recurso interpuesto, solicitó al Decanato de la Facultad de Derecho la designación de dos personas especialistas para evaluar con criterio experto la obra perteneciente a este caso. Las personas especialistas ofrecieron sus criterios el 18 y 22 de marzo de 2024, respectivamente, los cuales fueron remitidos a la entidad solicitante en el oficio FD-837-2024, del 4 de abril de 2024, por la Facultad de Derecho.
6. En el oficio CRA-603-2025, del 22 de mayo de 2025, la CRA elevó al Consejo Universitario el recurso de apelación interpuesto por el docente de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel Rojas Salas.

REFLEXIONES DE LA COMISIÓN

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en el análisis de cada uno de los recursos de apelación que fueron presentados por el docente de la Facultad de Derecho, el Dr. Manuel Rojas Salas, en contra de las calificaciones otorgadas a cuatro artículos sometidos a evaluación ante la Comisión de Régimen Académico (CRA), estimó pertinente acoger los referidos recursos y en consecuencia modificar los puntajes que originalmente fueron otorgados. Esto en razón de que, a partir del análisis y lectura de la prosa desarrollada por las personas especialistas que fueron consultadas, se logró determinar que sus criterios se encuentran por encima o son muy superiores a los que en su momento externó la CRA en su valoración inicial.

PROPUESTA DE ACUERDO

La Comisión de Asuntos Jurídicos presenta al plenario la siguiente propuesta de acuerdo:

CONSIDERANDO QUE:

1. El 28 de abril de 2023, el docente de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel Rojas Salas, con el propósito de actualizar el puntaje en Régimen Académico, presentó a evaluación el artículo “El fraude de simulación: un tipo penal incomprendido” (solicitud n.º 15302, del 28 de abril de 2023).
2. En la resolución de calificación n.º 2963-33-2023, del 1.º de noviembre de 2023, la Comisión de Régimen Académico le otorgó 0,75 de puntaje al considerar que posee moderada originalidad, moderada relevancia, moderada trascendencia y poca complejidad.
3. No conforme con el resultado de la evaluación, el 25 de septiembre de 2024, el docente Rojas Salas presentó de manera directa un recurso de apelación en contra de la resolución de calificación n.º 2963-33-2023, del 1.º de noviembre de 2023.
4. En la literalidad del recurso el docente Rojas Salas expuso:

*(...) interpongo formal **RECURSO DE APELACION** en contra de la citada resolución, en el tanto me otorga la exigua calificación de 0,75 Centésimas de punto respecto de la publicación **El fraude de simulación: un tipo penal incomprendido**, que fuera publicada en la obra colectiva “Un Derecho Penal fundado en la dignidad humana”, libro homenaje al Dr. Alvaro Burgos Mata. El hecho de formar parte de quienes podíamos brindar un aporte académico en este libro homenaje dejaba evidente que no se trataba de una convocatoria abierta, sino que el compilador optó por seleccionar algunas personas para ello, grupo en el que honrosamente me correspondió estar, de manera tal que no se trata de una publicación de poco más o menos, como pareciera desprenderse de la calificación, sino que se trata de un homenaje a una persona catedrática, prematuramente fallecida y no se*

trataba de hacer una publicación por el mero capricho de hacerla, sino que me correspondió realizar una puntual y concienzuda selección del tema.

Las razones de mi inconformidad, las paso a desarrollar:

A. Originalidad: A diferencia de la calificación otorgada en dicho rubro, que se indica que es “Moderada”, la publicación de mi autoría abordo un tema del que no hay mayores estudios, como lo es la figura del tipo penal de fraude por simulación, que si bien es de actualidad, en razón de la existencia de fraudes registrales, de manera extraña y también sorprendente, no existe ni a nivel del a (sic) producción nacional (con una sola publicación que es una tesis de licenciatura que tampoco realiza un abordaje completo del tipo en cuestión), ni tampoco a nivel de la jurisprudencia patria, un estudio completo y detallado de los elementos del tipo penal, de manera tal que no existe un abordaje y comprensión adecuada de los términos en los que el legislador costarricense decidió establecer la punición de la conducta del numeral 218 del código represivo. Para efectos de la publicación se debió realizar un análisis profundo del tipo penal e igualmente una comparación con otros tipos penales con los que usualmente y desde la práctica, se les suele confundir.

Al hablarse de “originalidad” evidentemente y de conformidad con los términos del Diccionario de la Real Academia Española, implica o conlleva novedad e innovación, lo que puede observarse del mismo contenido del artículo (sic) cuya calificación me encuentro impugnando. A diferencia de la calificación, la originalidad es alta, porque precisamente y como se indica en las conclusiones, el tratamiento que se ha brindado al tipo penal, ha sido ligero y absolutamente deficiente, por lo que se pretende dar una especie de criterio orientador a quienes fungen como operadores del sistema.

Incluso, la guía que tiene el centro de evaluación académica y que es a lo que el docente es evaluado, trata de ajustarse, indica como este rubro, lo siguiente: “El trabajo demuestra la utilización de fuentes novedosas, de nuevos indicadores o nuevos productos, el uso de nuevas metodologías o técnicas, mediciones originales o aporta grandes novedades científicas o tecnológicas”.

De modo tal que la calificación es no solo desacertada, sino que además revela una lectura muy a la ligera y con escasa o nula atención a aspectos relevantes.

b) Relevancia: A diferencia de lo que indicó la persona que ejecutó la calificación de la publicación aludida tiene una alta relevancia, en razón de que aunque se trata de un tipo penal de antigua existencia, propiamente incluido en nuestra legislación represiva desde el año 1970, de una búsqueda bibliográfica se hecha de menos no solamente un análisis desde la academia, en relación con los distintos elementos del tipo penal. ya que es una figura que no encuentra similares en otras regiones, de manera tal que el material existente para la creación del artículo publicado, era bastante escaso. La relevancia, que para el calificador es Moderada, no es tal puesto que el artículo (sic) brinda un panorama de la figura del Fraude de Simulación partiendo desde el bien jurídico tutelado y las modalidades de comisión, y aclara además la diferencia entre el elemento subjetivo distinto del tipo y la expresión “en perjuicio”, que es fundamental para entender si determinados comportamientos pueden completar el juicio de tipicidad objetiva. Detallo esto porque en definitiva si la expresión mencionada es vista de conformidad con los términos con los que se encuentra en una figura del Derecho Español, devendría en una figura de peligro, lo que en definitiva no concuerda con los principios legitimadores del Derecho Penal, máxime si se trata de un tipo penal que brinda protección al patrimonio, que si bien es cierto se trata de un aspecto de importancia en relación con la vivencia de una persona, tampoco puede considerársele de tal importancia como para considerar un adelantamiento de la protección por parte de las fronteras represivas.

Desde el título mismo del artículo, se aprecia que la simulación fraudulenta no ha sido un tipo penal de análisis pacífico, aspecto que se desarrolla, al mencionarse con detalle las tres modalidades y optar por la dinámica comisiva que más frecuentemente llega a estrados judiciales.

C. Trascendencia: A diferencia de la opinión de quien realizara la calificación del artículo, la trascendencia de la publicación es muy alta, ya que brinda insumos importantes que permiten a cualquier estudio del Derecho Penal y de las Ciencias Jurídicas tener un punto de apoyo en lo tocante al análisis de casos que tengan lugar en la realidad, respecto de su posible encuadramiento en el tipo penal del numeral 218.

En definitiva, el artículo (sic) puede servir-y tal fue la premisa que motivo (sic) su producción como un punto de apoyo para que pueda determinarse, al menos prima facie por parte de personas litigantes e incluso representantes del ministerio público, respecto de la figura típica. Si se estudia con detalle, podrá superar erróneos conceptos respecto de la figura del Fraude de Simulación y entender el contenido típico.

En realidad, el desconocimiento sobre los alcances de la protección penal es más que palpable y evidente en una buena parte de la comunidad jurídica en relación con el tipo penal de Fraude de simulación. Es por eso que es frecuente que se “asuma” que un contrato realizado, por ejemplo, ante un notario público, es tal y es perfectamente válido, siempre que no exista un juicio sobre el bien, situación absolutamente equivocada e

inexacta, por las razones que expongo con amplitud en el artículo. En este sentido, en la publicación se hace una diferencia entre las distintas modalidades de la simulación, precisamente para combatir erróneas como que la figura solamente puede tener lugar mediante la realización de “ventas” o “compraventas” y no mediante otras figuras que se encuentran contempladas en la legislación.

Hablar de un poco trascendencia es hablar (sic) es menospreciar y descalificar de manera abierta, el esfuerzo realizado en la consulta de distintas fuentes (que según he expresado, no son en lo absoluto, abundantes) para tratar de deslindar una figura que hasta ahora ha presentado dificultades en su análisis y aplicación, por parte de quienes fungen como operadores del sistema. El artículo de mi autoría pretende a partir de un estudio serio en relación con los elementos de tipo, determinar el alcance de la cobertura típica y favorecer una mayor comprensión de la figura.

D-Complejidad: A diferencia de lo que señala la calificación que fuera otorgada, la complejidad del tema tratado en el artículo es alta. La complejidad tiene que ver con el grado de dificultad de un artículo como tema de investigación.

Conforme se ha dicho, no hay muchas fuentes bibliográficas y las jurisprudencias resultan escasas, por lo que fue necesario ahondar de modo exhaustivo en el poco material existente para así procurar establecer afirmaciones serias y coherentes respecto de un tipo penal, que conforme se dice, no resulta de fácil comprensión, en parte por la redacción y en parte por el análisis ligero y superficial que se ha hecho, y que lamentablemente parece repetirse, en vista de la calificación que se impugna.

En el trabajo se señala que aunque es un tema de fraude, no corresponde realizar su asimilación con la estafa, tal y como muchas veces se escuchan voces al respecto y se brindan razones para establecer que no se trata de una modalidad de Estafa y que debe descartarse como una modalidad agravada, sino que se afirma con fundamento que se trata de un tipo penal independiente.

Incluso se realiza una comparación entre distintos supuestos, para deslindar el alcance del Fraude de Simulación, respecto de una de las modalidades de la administración fraudulenta. Y de la misma manera, se hace una comparación del contenido del Fraude de simulación, respecto de la falsedad ideológica, tipo con el que frecuentemente se le confunde, justamente en razón de la falla de estudios serios sobre el tipo penal del del 218 del código represivo. Hay que señalar que esta comparación no siempre resulta sencilla, evidentemente siempre que se realice de una manera seria, con miras a establecer claridad en la aplicación de las normas represivas.

También se ha indagado en las legislaciones de otros países como, España, Uruguay y el Salvador; para tratar de señalar paralelismos entre el fraude de simulación y otras figuras análogas. Esto conlleva (sic) que se tuviera que constatar la efectiva existencia de las figuras, señalándose que a diferencia de lo que ha sucedido en Costa Rica, la protección se circunscribe a la protección de derecho del acreedor crediticio, lo que en definitiva y desde la opinión que dejo (sic) plasmada, deja en descubierto una serie de supuestos importantes que o bien afectan o tienen la facultad de afectar el patrimonio.

Discrepo de la calificación en razón de que primeramente se trata de un tema que no ha sido abordado por la dogmática, ni tampoco tratado por la jurisprudencia nacional.

Me permito agregar a esto, que, de una manera absolutamente inexplicable, a pesar de que el país no hay mayor número de sitios en donde se puedan realizar publicaciones jurídicas, que además siguen un proceso de análisis y discusión respecto de su eventual publicación, es incomprensible e inaudito, que la sección de régimen académico menosprecie la labor académica seria mediante criterios que incluso no fundamenta de manera adecuada, sino que la forma de calificar queda al buen tino de quien califica, o lo que es lo mismo, resulta ser escandalosamente arbitraria, en una comunidad universitaria que se dice apreciar la labor docente y apostar por la excelencia.

Solicito se conozca en alzada por la vía de la apelación que se está interponiendo, y se me otorgue un mínimo de dos puntos para la publicación supra indicada.

5. La Circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, de la Vicerrectoría de Docencia, y su posterior adición del 2 de marzo de 2021, explicita el deber del personal docente de colaborar de forma consultiva con la CRA; así como la responsabilidad que tienen las personas que ocupan puestos de autoridad superior jerárquica en las unidades académicas, de cuidar que la persona docente designada para colaborar cumpla en tiempo y forma, con la solicitud requerida por ese Órgano.
6. El 20 de febrero de 2024, la Comisión de Régimen Académico (CRA) de conformidad con lo establecido en el artículo 42 TER del *Reglamento de Régimen Académico y de Servicio Docente*, y de acuerdo con lo indicado en la circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020 y su posterior adición del 2 de marzo de 2021, previo a elevar en alzada el recurso interpuesto, solicitó al Decanato de la Facultad de Derecho la designación de dos

personas especialistas para evaluar con criterio experto la obra perteneciente a este caso. Las personas especialistas ofrecieron sus criterios el 18 y 22 de marzo de 2024, respectivamente, los cuales fueron remitidos a la entidad solicitante por la Facultad de Derecho en el oficio FD-837-2024.

7. La Comisión de Régimen Académico, en el oficio CRA-603-2025, del 22 de mayo de 2025, trasladó al Consejo Universitario el recurso de apelación interpuesto por el docente de la Facultad de Derecho en contra de la resolución de calificación n.º 2963-33-2023, del 1.º de noviembre de 2023 y en el Pase CU-51-2025, del 3 de junio de 2025, se le solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminar acerca del citado recurso.
8. En la reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el 23 de julio de 2025, se analizó el recurso de apelación, así como los criterios ofrecidos por las personas especialistas y se concluyó que estos se encuentran por encima o son superiores a los consignados por la Comisión de Régimen Académico de conformidad con las rúbricas general y específicas por áreas académicas para la evaluación de publicaciones y obras, en cuanto a los rubros de originalidad, relevancia, trascendencia y complejidad.
9. En la siguiente tabla se consigna lo que establecen las rúbricas general y específicas por áreas académicas para la evaluación de publicaciones y obras, los rubros de moderada originalidad, moderada relevancia, moderada trascendencia y poca complejidad, tal y como fue calificado el artículo por la Comisión de Régimen Académico, además, cómo se pronunciaron las personas especialistas n.º 1 y n.º 2 sobre esos rubros.

Comisión de Régimen Académico	Especialista n.º 1	Especialista n.º 2
<p>Artículo: “El fraude de simulación: un tipo penal incomprensido”.</p> <p>Originalidad (moderada): La obra aporta, sistematiza o produce de manera incipiente, conocimiento o técnicas novedosas para el área disciplinar; la obra incorpora referencias teóricas limitadas en cantidad, pero relevantes para el campo disciplinar; la obra presenta un nivel incipiente de vinculación transdisciplinar cuando aplique; la obra presenta un atisbo de abordaje alternativo a la dominante dentro del campo disciplinar.</p>	<p><i>Es original, no son abundantes las obras que traten este tema. Se trata de un tipo penal poco examinado en la doctrina nacional.</i></p>	<p><i>La obra posee originalidad ya que el tema no ha sido abordado, salvo un texto muy antiguo en el cual se trató el tema.</i></p> <p><i>En el artículo se utilizan fuentes extranjeras novedosas que aportan al estudio de la temática tratada.</i></p>
<p>Relevancia (moderada): La obra versa sobre un tema o problema conocido a nivel nacional o internacional, de interés disciplinar, social o institucional, según corresponda y la obra presenta aportes preliminares al campo de estudio o ejercicio profesional.</p>	<p><i>Es relevante, examina puntualmente el tipo penal y sus relaciones con otros tipos penales, por ejemplo, la falsedad ideológica.</i></p>	<p><i>Se trata de una obra relevante, tanto para los abogados como para los estudiantes de derecho, al plantear una serie de temas relevantes sobre un tipo penal en concreto, cuya aplicación en la práctica forense ha generado discusiones y dudas al respecto.</i></p>

Trascendencia (moderada): Cuando los aportes, problematizaciones o resultados contenidos en la obra expresan de forma incipiente viabilidad para generar innovaciones o mejoras que van más allá del entorno disciplinar; muestra alguna utilidad o beneficio para el campo de estudio o para poblaciones vinculadas a su producción; se consigna en un medio de divulgación de limitado alcance; se desarrolla en un idioma que no corresponde con el de mayor difusión y alcance para el ámbito disciplinar en particular.	<i>Es trascendente en la medida en que permite visualizar los contornos de un tipo penal que se aplica frecuentemente.</i>	<i>Como se indicó en el apartado anterior, representa una gran utilidad para los estudiantes y abogados costarricenses, al abordar una temática poco tratada y de arduo análisis. Podrá ser de interés de diferentes sectores.</i>
Complejidad (poca): La obra no resulta compleja, en tanto incorpora metodologías, estrategias de análisis de resultados y herramientas de producción desactualizadas; la obra en su diseño no aplica herramientas, acciones o mecanismos para asegurar el cumplimiento de criterios académicos mínimos, según disciplina; la obra no refleja coherencia entre su referencia teórica, metodología o herramientas de producción aplicadas; asimismo, la obra no demuestra superar el grado de complejidad de publicaciones similares en el ámbito disciplinar y transdisciplinar.	<i>La complejidad es media, Hace un análisis de lo que sucede en el caso de escrituras públicas (si son falsedad ideológica o fraude de simulación). Se trata de un tema interesante y complejo, sin embargo, solo ese es el tratado en el artículo.</i>	<i>Se trata de un aporte complejo que, toma en cuenta la literatura extranjera y lleva a cabo también, un análisis de la jurisprudencia nacional, analizando críticamente los temas tratados.</i>

10. De conformidad con lo indicado por las personas especialistas en los rubros de originalidad, relevancia, trascendencia y complejidad, se concluye que al efectuar la sumatoria de estos rubros, la persona especialista n.º 1 le otorga 1,75 puntos, debido a que el artículo posee alta originalidad (0,50 puntos), alta relevancia (0,50 puntos), alta trascendencia (0,50 puntos) y moderada complejidad (0,25 puntos); y la persona especialista n.º 2 le otorga 2,00 puntos en consideración de que el artículo evaluado posee alta originalidad (0,50 puntos), alta relevancia (0,50 puntos), alta trascendencia (0,50 puntos) y alta complejidad (0,50 puntos). Puntajes a los que se les debe adicionar o sumar el puntaje originalmente asignado (0,75 puntos).

Puntaje otorgado por la Comisión de Régimen Académico: 0,75 puntos

Puntaje de la persona especialista n.º 1 de acuerdo a sus criterios: 1,75 puntos

Puntaje de la persona especialista n.º 2 de acuerdo a sus criterios: 2,00 puntos

Total: 4,50 puntos

4,50 puntos divididos entre 3 (puntaje otorgado por la CRA y las dos personas especialistas)= 1,05 puntos.

11. En virtud de lo anterior, el puntaje originalmente otorgado al artículo denominado “El fraude de simulación: un tipo penal incomprendido” debe modificarse y consecuentemente pasar de 0,75 puntos a 1,05 puntos.

II. Recurso de apelación presentado por el Dr. Manuel Rojas Salas en contra de la resolución de calificación CRA 839-2025 (sic), Pase CU-52-2025, del 3 de junio de 2025. Artículo: “El child grooming como conducta típica en el Código Penal: su regulación legislativa en Costa Rica”.

1. El 3 de octubre de 2023, el Dr. Manuel Rojas Salas, docente de la Facultad de Derecho sometió ante la Comisión de Régimen Académico (CRA) para su evaluación el artículo “El child grooming como conducta típica en el Código Penal: su regulación legislativa en Costa Rica” (solicitud de calificación n.º 15927, del 4 de octubre de 2023).
2. En la resolución de calificación n.º 2972-60-2024, del 20 de marzo de 2024, la CRA le otorgó 1,25 de puntaje al considerar que posee moderada originalidad, moderada relevancia, moderada trascendencia y alta complejidad.
3. No conforme con el resultado de la evaluación, el 22 de abril de 2024, el docente Rojas Salas presentó de manera directa un recurso de apelación en contra de la resolución de calificación n.º 2972-60-2024, del 20 de abril de 2024. La integralidad del citado recurso se adjunta al expediente del caso.
4. La Circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, de la Vicerrectoría de Docencia, y su posterior adición del 2 de marzo de 2021, explicita el deber del personal docente de colaborar de forma consultiva con la CRA; así como la responsabilidad que tienen las personas que ocupan puestos de autoridad superior jerárquica en las unidades académicas, de cuidar que la persona docente designada para colaborar cumpla en tiempo y forma, con la solicitud requerida por ese Órgano.
5. El 24 de junio de 2024, la CRA de conformidad con lo establecido en el artículo 42 TER del *Reglamento de Régimen Académico y de Servicio Docente*, y de acuerdo con lo indicado en la circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, y su posterior adición del 2 de marzo de 2021, previo a elevar en alzada el recurso interpuesto, solicitó al Decanato de la Facultad de Derecho la designación de dos personas especialistas para evaluar con criterio experto la obra perteneciente a este caso. Las personas especialistas ofrecieron sus criterios el 16 de julio de 2024 y el 8 de octubre de 2024, respectivamente, los cuales fueron remitidos por la Facultad de Derecho en los oficios FD-1511-2024 y FD-2310-2024, del 18 de julio de 2024 y 6 de noviembre de 2024, respectivamente, a la entidad solicitante.
6. En el oficio CRA-839-2025, del 22 de mayo de 2025, la CRA elevó al Consejo Universitario el recurso de apelación interpuesto por el docente de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel Rojas Salas.

CONSIDERANDO QUE:

1. El 3 de octubre de 2023, el Dr. Manuel Rojas Salas, docente de la Facultad de Derecho sometió ante la Comisión de Régimen Académico para su evaluación el artículo “El child grooming como conducta típica en el Código Penal: su regulación legislativa en Costa Rica” (solicitud de calificación n.º 15927, del 4 de octubre de 2023).
2. En la resolución de calificación n.º 2972-60-2024, del 20 de marzo de 2024, la Comisión de Régimen Académico le otorgó 1,25 de puntaje al considerar que posee moderada originalidad, moderada relevancia, moderada trascendencia y alta complejidad.
3. No conforme con el resultado de la evaluación, el 22 de abril de 2024, el docente Rojas Salas presentó de manera directa un recurso de apelación en contra de la resolución de calificación n.º 2972-60-2024, del 20 de abril de 2024.
4. La integralidad del recurso de apelación es la que de seguido se expone:

Las razones de mi inconformidad, las paso a desarrollar, señalando nuevamente y de antemano que sorprende sobremedida que para la Comisión de Régimen Académico, pareciera que no hay trabajos de investigación que sean susceptibles de alcanzar calificaciones destacadas, a pesar del esfuerzo de la persona investigadora y del hecho público y notorio, de que en el Área del Derecho y particularmente del Derecho Penal, las oportunidades para publicar y los medios son extremadamente escasos. Destaco este aspecto en vista de que cualquier artículo publicado en la Revista Digital de Ciencias Penales, o de la Maestría en Ciencias Penales, ha sido seleccionado cuidadosamente, por lo que no se trata de trabajos que bajo ningún concepto pueden ser considerados repetitivos ni trillados, como parece que son considerados por la Comisión:

A. Originalidad: A diferencia de la calificación otorgada en dicho rubro, que se indica que es “Moderada”, la publicación de mi autoría aborda un tema del que si bien es cierto es una figura que ha surgido al amparo del desarrollo de las denominadas tecnologías información y comunicación, no se ha hecho un estudio relativo a la forma en que el legislador costarricense ha abordado el fenómeno del Child Grooming o ciber acoso por parte de personas mayores a personas menores de edad a través de medios tecnológicos.

En ese sentido, el legislador costarricense se ha limitado a criminalizar el comportamiento, sin tomar en cuenta la existencia de posibles múltiples protecciones a través de distintas tipificaciones, lo que origina una acentuada confusión respecto del sentido mismo de la protección.

Al hablarse de “originalidad” evidentemente y de conformidad con los términos del Diccionario de la Real Academia Española, implica o conlleva novedad e innovación, lo que puede observarse del mismo contenido del artículo (sic) cuya calificación me encuentro impugnando. A diferencia de la calificación, la originalidad es alta, porque precisamente se analiza primeramente el fenómeno a nivel de la Dogmática, siempre teniéndose como parámetro o límite los principios legitimadores del Derecho Penal, que lamentablemente suelen irrespetarse y pasarse por alto cuando se trata de realizar la criminalización de comportamientos, acentuándose una deficiente técnica legislativa, respecto de la que generalmente, no se formula mayor crítica, y en donde la academia debe tener un papel fundamental y de vanguardia.

Incluso, la guía que tiene el Centro de Evaluación Académica y que es a lo que el docente que es evaluado, trata de ajustarse, indica como este rubro, lo siguiente:

“El trabajo demuestra la utilización de fuentes novedosas, de nuevos indicadores o nuevos productos, el uso de nuevas metodologías o técnicas tecnológicas, mediciones originales o aporta grandes novedades científicas o tecnológicas.

De modo tal que la calificación es no solo desacertada, sino que además revela una lectura muy a la ligera y con escasa o nula atención a aspectos relevantes,

b) relevancia: A diferencia de lo que se indicó en la calificación, la publicación aludida, tiene una alta relevancia, en razón de que a lo largo del contenido del artículo, se pone de manifiesto que la actuación legislativa en el terreno del Child Grooming ha sido absolutamente inadecuada, sin perderse de vista que ha existido un incremento desafortunado y obviamente exagerado respecto de los tipos penales que brindan protección a las personas menores de edad respecto de comportamientos que se estiman lesivos, ejecutados por personas mayores de edad.

Primeramente se hace un abordaje del bien jurídico tutelado, aspecto que viene a resultar esencial cuando se habla de la tipificación de nuevos comportamientos. En ese proceso inflacionario del Derecho Penal, no ha existido la más mínima sistematicidad por parte del poder legislativo en las reformas que se han promulgado a lo largo de los años y esto es un punto que claramente se pone de manifiesto.

Se realiza un análisis del tipo penal que curiosamente fue colocado “en el medio” de dos figuras típicas preexistentes bajo el formato “bis”, cuando la realidad es que el comportamiento del child grooming prima facie, no tiene mayor relación con los tipos penales de Corrupción de Menores, que fue el lugar que el legislador costarricense definió para ubicar la figura.

De la misma forma se critica la redacción utilizada, en donde el legislador optó, en claro cumplimiento de su función, por abrir el tipo penal, generándose con ello inseguridad desde el punto de vista jurídico, habida cuenta de que existen comportamientos repetidos, justamente en razón de esa falta de sistematización que se pone en evidencia, ya que lo único que viene a determinarse de alguna manera, es que la protección, que evidentemente resultaba necesaria en el momento actual, no se formuló de una manera que conllevara una redacción atinada ni coherente en relación con otras figuras típicas preexistentes.

La relevancia en consecuencia es alta, a diferencia de lo que se indica en la calificación que me encuentro impugnando en el presente recurso.

c) Trascendencia: A diferencia de lo que se indica en la calificación que me encuentro impugnando, la trascendencia de la publicación es muy alta, ya que desde la perspectiva de quien suscribe la impugnación, se pone de manifiesto que la técnica legislativa empleada para efectos de la tipificación del child grooming, fue absolutamente desafortunada, puesto que en realidad se tipificaron comportamientos distintos entre sí.

En el artículo de mi autoría se hace referencia a que el legislador, dejando de lado los principios legitimadores del Derecho Penal como ultima ratio, intervención mínima y el carácter fragmentario, al extremo que se criminaliza el procurar establecer una conversación, sin que ella se haya producido, originando un tipo penal de muy dudosa y cuestionable constitucionalidad. Incluso se destaca en la segunda modalidad comisiva, se tipifica “el peligro de un peligro” lo que conlleva un inadecuado adelantamiento de la protección penal, hasta límites no permitidos.

Se destaca igualmente que se pretende sancionar la simple finalidad o tendencia ulterior, sin que se vea materializada en actos concretos, lo que hace que el Derecho Penal sea utilizado para incursionar en terrenos absolutamente ajenos y reservados a la autonomía de la voluntad.

Hablar de una trascendencia moderada es menospreciar y descalificar de manera abierta, el esfuerzo realizado en la consulta de distintas fuentes para demostrar la falta de visión de quienes han fungido como representantes legislativos. Se pretende entonces reflexionar respecto de un tema, cuya inclusión expresa en la normativa, vendría a brindar una mayor armonía en el campo normativo, situación absolutamente saludable. Por otra parte, resulta absolutamente incomprensible que se hable de una trascendencia moderada y de una complejidad ALTA, tal y conforme se ha indicado en la calificación, puesto que se trata de calificativos van uno a la par del otro.

Solicito se conozca en alzada por la vía de la apelación que se está interponiendo, y se me otorgue un mínimo de dos puntos para la publicación supra indicada.

5. La circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, y su posterior adición del 2 de marzo de 2021, explicita el deber del personal docente de colaborar de forma consultiva con la CRA; así como la responsabilidad que tienen las personas que ocupan puestos de autoridad superior jerárquica en las unidades académicas, de cuidar que la persona docente designada para colaborar cumpla en tiempo y forma con la solicitud requerida por ese Órgano.
6. El 24 de junio de 2024, la Comisión de Régimen Académico (CRA) de conformidad con lo establecido en el artículo 42 TER del *Reglamento de Régimen Académico y de Servicio Docente*, y de acuerdo con lo indicado en la circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, y su posterior adición del 2 de marzo de 2021, previo a elevar en alzada el recurso interpuesto, solicitó al Decanato de la Facultad de Derecho la designación de dos personas especialistas para evaluar con criterio experto la obra perteneciente a este caso. Las personas especialistas ofrecieron sus criterios el 16 de julio de 2024 y el 8 de octubre de 2024, respectivamente, los cuales fueron remitidos a la entidad solicitante en los oficios FD-1511-2024 y FD-2310-2024, del 18 de julio de 2024 y 6 de noviembre de 2024, por la Facultad de Derecho.
7. La Comisión de Régimen Académico, en el oficio CRA-839-2025, del 22 de mayo de 2025, trasladó al Consejo Universitario el recurso de apelación interpuesto por el docente de la Facultad de Derecho en contra de la resolución de calificación n.º 2972-60-2024, del 20 de marzo de 2024 y en el Pase CU-52-2025, del 3 de junio de 2025, se le solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminar acerca del citado recurso.
8. En la reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el 23 de julio de 2025, se analizó el recurso de apelación, así como los criterios ofrecidos por las personas especialistas y se concluyó que estos últimos se encuentran por encima o son muy superiores a los empleados por la Comisión de Régimen Académico en la evaluación del artículo, esto de conformidad con las rúbricas general y específicas por áreas académicas para la evaluación de publicaciones y obras, en cuanto a los rubros de originalidad, relevancia, trascendencia y complejidad.
9. En la siguiente tabla se consigna lo que establecen las rúbricas general y específicas por áreas académicas para la evaluación de publicaciones y obras, en los rubros de moderada originalidad, moderada relevancia, moderada trascendencia y poca complejidad, tal y como fue calificado el artículo por la Comisión de Régimen Académico, además, cómo se pronunciaron las personas especialistas n.º 1 y n.º 2 sobre esos rubros:

Comisión de Régimen Académico	Especialista n.º 1	Especialista n.º 2
<p>Artículo: “El child grooming como conducta típica en el Código Penal: su regulación legislativa en Costa Rica”.</p> <p>Originalidad (moderada): La obra aporta, sistematiza o produce de manera incipiente, conocimiento o técnicas novedosas para el área disciplinar; la obra incorpora referencias teóricas limitadas en cantidad, pero relevantes para el campo disciplinar; la obra presenta un nivel incipiente de vinculación transdisciplinar cuando aplique; la obra presenta un atisbo de abordaje alternativo a la dominante dentro del campo disciplinar.</p>	<p><i>Es original. No son abundantes las obras que traten este tipo penal (aunque las hay).</i></p>	<p><i>El trabajo valorado es sumamente original, debido a que la temática abordada desafía las convencionales en el área del Derecho Penal. El autor ofrece no solo una combinación de metodológicas y análisis de datos variados, sino que lo impregna con un alto grado de conocimiento de la materia que genera una mayor valoración. El adentrarse de igual forma a conocer las conductas que están sucediendo debido a las novedades tecnológicas del avance del tiempo y los cambios de interacciones sociales, enriquece el trabajo en cuanto a su originalidad. Se trata de una contribución valiosa y refrescante.</i></p>
<p>Relevancia (moderada): La obra versa sobre un tema o problema conocido a nivel nacional o internacional, de interés disciplinar, social o institucional, según corresponda y la obra presenta aportes preliminares al campo de estudio o ejercicio profesional.</p>	<p><i>Es relevante. Hace un análisis puntual de los elementos típicos contenidos en la norma y su distinción con el delito de corrupción de menores de edad.</i></p>	<p><i>El artículo es de relevancia para el avance del conocimiento en el área. El abordaje de la relación entre el Derecho Penal, la protección de menores, la interacción mediante redes sociales, es un tema crítico y con un desarrollo exponencial. Al ofrecer una perspectiva clara y fundamentada, bajo el análisis de un experto, este trabajo no solo facilita la comprensión de un fenómeno creciente en la sociedad, sino que también establece un marco de referencia que puede ser utilizado en futuras investigaciones y publicaciones sobre la materia. Su enfoque y relevancia social lo posicionan como un recurso indispensable para futuras investigaciones en relación a protección de menores y Derecho Penal.</i></p>
<p>Trascendencia (moderada): Cuando los aportes, problematizaciones o resultados contenidos en la obra expresan de forma incipiente viabilidad para generar innovaciones o mejoras que van más allá del entorno disciplinar; muestra alguna utilidad o beneficio para el campo de estudio o para poblaciones vinculadas a su producción; se consigna en un medio de</p>	<p><i>Es trascendente. Es útil para estudiosos y operadores jurídicos que apliquen el tipo penal.</i></p>	<p><i>El artículo es trascendente más allá de un análisis académico y jurídico, pues ofrece a la comunidad. El grooming es un tema que afecta cotidianamente a los menores de edad, y que está presente y pasa mayormente desapercibido por la forma de operar y la facilitación que permite las redes sociales y plataformas tecnológicas. Por lo tanto, contribuye a la sensibilización sobre la protección de los menores frente a conductas delictivas. A nivel académico, ofrece insumos valiosos para la formación</i></p>

divulgación de limitado alcance; se desarrolla en un idioma que no corresponde con el de mayor difusión y alcance para el ámbito disciplinar en particular.		<i>de profesionales en Derecho, y su relevancia se extiende a instituciones gubernamentales y organizaciones dedicadas a la protección infantil, facilitando la toma de decisiones informadas. Además, este trabajo puede servir como referencia en discusiones internacionales sobre la regulación de la conducta de grooming, aportando a un entendimiento global y a la creación de políticas efectivas en la materia. En definitiva, su utilización por diferentes sectores potencia el ejercicio profesional, fortaleciendo la protección de la infancia tanto a nivel local como nacional e internacional.</i>
Complejidad (alta): La obra presenta un nivel de complejidad moderado, en tanto incorpora metodologías complejas (por ejemplo: diversa, experimental, enfoque crítico o interdisciplinaria) estrategias de análisis de resultados o refleja herramientas complejas de producción, la obra en su diseño y desarrollo aplica herramientas, acciones o mecanismos para asegurar el cumplimiento de criterios académicos, según disciplina, la obra presenta coherencia intermedia entre su referencia teórica y la metodología aplicada y la obra alcanza un grado de complejidad superior de otras publicaciones del ámbito disciplinar o transdisciplinar.	<i>La complejidad es media. El análisis es puntual.</i>	<i>El artículo parte de la utilización de una gran variedad de fuentes tanto legislativas como doctrinarias, que enriquecen el análisis y permiten una comprensión integral del fenómeno del grooming. Además, el autor utiliza metodologías diversas, integrando enfoques cualitativos que demuestra (sic) un compromiso con la rigurosidad académica. El tema requiere conocimientos en derecho, psicología y sociología para abordar adecuadamente la problemática.</i> <i>Asimismo, se implementan estrategias de validación de datos y control de calidad que garantizan la fiabilidad de los resultados presentados, lo que eleva aún más el estándar de la obra y su contribución al campo del Derecho Penal y la protección de la infancia.</i>

10. De conformidad con lo indicado por las personas especialistas en los rubros de originalidad, relevancia, trascendencia y complejidad, se concluye que al efectuar la sumatoria de estos rubros, la persona especialista n.º 1 le otorga 1,75 puntos, ya que el artículo posee alta originalidad (0,50 puntos), alta relevancia (0,50 puntos), alta trascendencia (0,50 puntos) y moderada complejidad (0,25 puntos) y la persona especialista n.º 2 le otorga 2,25 puntos en consideración de que el artículo evaluado posee muy alta originalidad (0,75 puntos), alta relevancia (0,50 puntos), alta trascendencia (0,50 puntos) y alta complejidad (0,50 puntos). Puntajes a los que se les debe adicionar o sumar el puntaje originalmente asignado (1,25 puntos).

Puntaje otorgado por la Comisión de Régimen Académico: 1,25 puntos

Puntaje de la persona especialista n.º 1 de acuerdo a sus criterios: 1,75 puntos

Puntaje de la persona especialista n.º 2 de acuerdo a sus criterios: 2,25 puntos

Total: 5,25 puntos

5,25 puntos divididos entre 3 (puntaje otorgado por la CRA y las dos personas especialistas)= 1,75 puntos

11. En virtud de lo anterior, el puntaje originalmente otorgado al artículo denominado “*El child grooming* como conducta típica en el Código Penal: su regulación legislativa en Costa Rica” debe modificarse y consecuentemente pasar de 1,25 puntos a 1,75 puntos.

III. Recurso de apelación presentado por el Dr. Manuel Rojas Salas en contra de la resolución de calificación CRA 996-2025 (sic), Pase CU-53-2025, del 3 de junio de 2025. Artículo: “La denominada edad del consentimiento: un terreno legislativo por cultivar”.

1. El 16 de octubre de 2023, el Dr. Manuel Rojas Salas, docente de la Facultad de Derecho, sometió ante la Comisión de Régimen Académico (CRA) para su evaluación el artículo “La denominada edad del consentimiento: un terreno legislativo por cultivar” (solicitud n.º 15929, del 17 de octubre de 2023).
2. En la resolución de calificación n.º 2972-61-2024, del 20 de marzo de 2024, la CRA le otorgó 1,00 puntos al considerar que posee moderada originalidad, moderada relevancia, moderada trascendencia y moderada complejidad.
3. No conforme con el resultado de la evaluación, el 24 de abril de 2024, el docente Rojas Salas presentó de manera directa un recurso de apelación en contra de la resolución de calificación n.º 2972-61-2024, del 20 de abril de 2024. La integralidad del citado recurso se adjunta al expediente del caso.
4. La Circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, de la Vicerrectoría de Docencia, y su posterior adición del 2 de marzo de 2021, explicita el deber del personal docente de colaborar de forma consultiva con la CRA; así como la responsabilidad que tienen las personas que ocupan puestos de autoridad superior jerárquica en las unidades académicas, de cuidar que la persona docente designada para colaborar cumpla en tiempo y forma, con la solicitud requerida por ese Órgano.
5. El 24 de junio de 2024, La CRA, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 TER del *Reglamento de Régimen Académico y de Servicio Docente*, y de acuerdo con lo indicado en la circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, y su posterior adición del 2 de marzo de 2021, previo a elevar en alzada el recurso interpuesto, solicitó al Decanato de la Facultad de Derecho la designación de dos personas especialistas para evaluar con criterio experto la obra perteneciente a este caso. Las personas especialistas ofrecieron sus criterios el 16 de julio de 2024 y el 8 de octubre de 2024, respectivamente, los cuales fueron remitidos por la Facultad de Derecho en los oficios FD-1511-2024 y FD-2310-2024, del 18 de julio de 2024 y 6 de noviembre de 2024, respectivamente, a la entidad solicitante.
6. En el oficio CRA-996-2025, del 22 de mayo de 2025, la CRA elevó al Consejo Universitario el recurso de apelación interpuesto por el docente de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel Rojas Salas.

CONSIDERANDO QUE:

1. El 16 de octubre de 2023, el Dr. Manuel Rojas Salas, docente de la Facultad de Derecho, sometió ante la Comisión de Régimen Académico para su evaluación el artículo “La denominada edad del consentimiento: un terreno legislativo por cultivar” (solicitud n.º 15929, del 17 de octubre de 2023).
2. En la resolución de calificación n.º 2972-61-2024, del 20 de marzo de 2024, la Comisión de Régimen Académico le otorgó 1,00 puntos al considerar que posee moderada originalidad, moderada relevancia, moderada trascendencia y moderada complejidad.
3. No conforme con el resultado de la evaluación, el 24 de abril de 2024, el docente Rojas Salas presentó de manera directa un recurso de apelación en contra de la resolución de calificación n.º 2972-61-2024, del 20 de abril de 2024. La integralidad del citado recurso al expediente del caso.
4. La literalidad del recurso de apelación es la que a continuación se expone:

Las razones de mi inconformidad, las paso a desarrollar, señalando de antemano que sorprende sobremanera que para la Comisión de Régimen Académico, pareciera que no hay trabajos de investigación que sean susceptibles de alcanzar calificaciones destacadas, a pesar del esfuerzo de la persona investigadora y del hecho público y notorio, de que en el Área del Derecho y particularmente del Derecho Penal, las oportunidades para publicar y

los medios son extremadamente escasos. Destaco este aspecto en vista de que cualquier artículo publicado en la Revista Digital de Ciencias Penales, o de la Maestría en Ciencias Penales, ha sido seleccionado cuidadosamente, por lo que no se trata de trabajos que bajo ningún concepto pueden ser considerados repetitivos ni trillados, como parece que son considerados por la Comisión:

A. Originalidad: A diferencia de la calificación otorgada en dicho rubro, que se indica que es “moderada”, la publicación de mi autoría abordó un tema del que no hay mayores estudios, como lo es el tema de la edad del consentimiento en personas menores de edad. Contrariamente a lo que desde una perspectiva de sensatez y respeto a los principios básicos del ordenamiento jurídico podría esperarse, los Estados y particularmente el Costarricense, se han decantado por realizar modificaciones a los distintos tipos penales que incluyen hechos de contenido sexual que incluyen hechos de tipo sexual que afectan a personas menores de edad. La modificaciones se han realizado a partir de una tendencia de excesiva sobreprotección en donde prácticamente se objetiviza a la persona menor de edad, dejándose de lado lo que se conoce con el reconocimiento progresivo de los Derechos, en cuanto al relativo (sic) al ejercicio de su sexualidad. Más bien, el tema de los derechos sexuales y su ejercicio por parte de las personas menores de edad es un tema que se ha visto absolutamente invisibilizado.

Al hablarse de “originalidad” evidentemente y de conformidad con los términos del Diccionario de la Real Academia Española, implica o conlleva novedad e innovación, lo que puede observarse del mismo contenido del artículo (sic) cuya calificación me encuentro impugnando. A diferencia de la calificación, la originalidad es alta, porque precisamente a ningún representante legislativo se le ha ocurrido la idea de establecer, como tiene lugar en legislaciones más avanzadas y para romper con el inflacionismo penal, el establecer una edad del consentimiento como límite para el cese de la protección penal.

Incluso, la guía que tiene el Centro de Evaluación Académica y que es a lo que el docente que es evaluado trata de ajustarse, indica como este rubro, lo siguiente: “El trabajo demuestra la utilización de fuentes novedosas, de nuevos indicadores o nuevos productos, el uso de nuevas de nuevas metodologías o técnicas, mediciones originales o aporta grandes novedades científicas o tecnológicas”

De modo tal que la calificación es no solo desacertada, sino que además revela una lectura muy a la ligera y con escasa o nula atención a aspectos relevantes.

b) Relevancia: A diferencia de lo que se indicó en la calificación, la publicación aludida, tiene una alta relevancia, en razón de que se pone de manifiesto que ha existido un incremento desafortunado y obviamente exagerado respecto de los tipos penales que tutelan la autodeterminación sexual y la indemnidad sexuales (sic). En ese proceso inflacionario del Derecho penal, no ha existido la más mínima sistematicidad por parte del Poder Legislativo en las reformas que se han promulgado a lo largo de los años. De ahí que conforme se muestra en el artículo, existen graves inconsistencias en las conductas tipificadas y en el establecimiento de rangos etarios. La relevancia, que para el calificador es moderada, no es tal puesto que el artículo (sic) brinda un panorama de la necesidad imperiosa de regular, en atención a compromisos asumidos por el Estado Costarricense en Convenciones, de establecer un límite a la acción proteccionista estatal desde el ámbito del Ius Puniendi.

Con el artículo de mi autoría, se pretende visibilizar un tema en el que la sociedad y el Poder Legislativo, han optado por mirar hacia otro lado, precisamente porque se pone de manifiesto que aún se considera a las personas menores de edad como seres asexuados, o bien como personas que no pueden adoptar ningún tipo de decisión en materia de su sexualidad, cuando se trata de un aspecto estrechamente vinculado con el concepto de dignidad humana, necesario para el desarrollo de cualquier persona en el contexto de una sociedad.

c) Trascendencia: A diferencia de lo que se indica en la calificación que me encuentro impugnando, la trascendencia de la publicación es muy alta, ya que brinda insumos importantes que permiten a cualquier estudioso del Derecho Penal y de las Ciencias Jurídicas tener un panorama más amplio del exceso de protección existente e igualmente establecer un punto de reflexión respecto de la importancia de establecer desde un punto de vista normativo, una edad del consentimiento, al menos a lo tocante en determinados tipos penales, con la finalidad de acabar con el desorden y caos existente, al que nos ha llevado la multiplicidad de reformas legislativas, que persisten en mantener groseros yerros de redacción y contenido, y solamente se preocupan por incrementar las sanciones existentes, haciéndose eco de discursos estrictamente de carácter populista, en donde, con una visión retorcida, se presenta al Derecho Penal como la forma de evitar los males presentes en la sociedad costarricense.

Precisamente el artículo (sic) indicado al abordar un tema que debió ser tratado y plasmado en la legislación penal de manera prioritaria, viene a resultar con alta trascendencia, porque a diferencia de lo que suele suceder en otras ramas del Derecho, en el campo del Derecho Penal, la persona investigadora, debe mantener una actitud crítica, máxime en casos en donde se señala la existencia de responsabilidad penal en personas menores de edad (a quienes puede aplicárseles la Ley Penal Juvenil desde el momento en que cumplen 12 años), pero de una manera absolutamente contradictoria y que no es más que una actitud en donde se cosifica a los y las menores de edad, no se les permite la más mínima decisión en el terreno de la sexualidad.

De ahí que el poner en evidencia esa actitud abiertamente mojigata y conservadora que pretender desconocer una realidad que es más que palpable a partir de un vistazo incluso en temas de redes sociales, hace que el tema de la edad del consentimiento y su establecimiento expreso, sea un aspecto de alta trascendencia.

Hablar de un poco trascendencia es menospreciar y descalificar de manera abierta, el esfuerzo realizado en la consulta de distintas fuentes para demostrar la falta de visión de quienes han fungido como representantes legislativos. Se pretende entonces reflexionar respecto de un tema, cuya inclusión expresa en la normativa, vendría a brindar una mayor armonía en el campo normativo, situación absolutamente saludable.

d-Complejidad: A diferencia de lo que señala la calificación que fuera otorgada, la complejidad del tema tratado en el artículo es alta. La complejidad tiene que ver con el grado de dificultad de un artículo como tema de investigación.

Debe destacarse que por un tema de Política Criminal, cada ordenamiento jurídico es el que procede a determinar la edad del consentimiento en materia sexual.

Ciertamente se trata de un tema polémico, pero que es imprescindible que sea abordado por el Estado Costarricense, de una manera responsable. No se trata entonces pura y simplemente de señalar un número de años en una reforma legislativa (tal y conforme se ha hecho al momento de realizar las reformas que contienen incrementos de las sanciones establecidas), sino que se trata de un tema que tiene que ser abordado con muchísima seriedad, porque con ello se brinda un adecuado reconocimiento al derecho que poseen (aunque parezca desconocerse) las personas menores de edad para determinarse y conducirse en el ámbito de su sexualidad.

El establecimiento de una edad, que en otros ordenamientos se ha determinado en un límite mayor al que tenían originalmente (lo que revela que su determinación es imprescindible en un ordenamiento jurídico penal que se precie de armónico) y ha observado una tendencia alcista, da cuenta de que debe procurarse una sistematización apropiada, que conlleve estudios actualizados en relación con el comportamiento y actitudes desarrolladas por las personas jóvenes menores de edad, para no mostrarnos ignorantes de lo que es una realidad.

De la misma manera, se aborda el tema de la denominada cláusula Romeo-Julietta que es una especie de “excepción” al límite establecido en la edad del consentimiento, y que resulta aplicable a supuestos calificados, pero que bien pueden presentarse en cualquier momento en nuestra sociedad.

De ahí que la complejidad o dificultad del tema tratado es alta y no moderada, conforme se señaló en la calificación.

5. La Circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, de la Vicerrectoría de Docencia, y su posterior adición del 2 de marzo de 2021, explicita el deber del personal docente de colaborar de forma consultiva con la CRA; así como la responsabilidad que tienen las personas que ocupan puestos de autoridad superior jerárquica en las unidades académicas, de cuidar que la persona docente designada para colaborar cumpla en tiempo y forma, con la solicitud requerida por ese Órgano.
6. El 24 de junio de 2024, la Comisión de Régimen Académico (CRA), de conformidad con lo establecido en el artículo 42 TER del *Reglamento de Régimen Académico y de Servicio Docente*, y de acuerdo con lo indicado en la circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, y su posterior adición del 2 de marzo de 2021, previo a elevar en alzada el recurso interpuesto, solicitó al Decanato de la Facultad de Derecho la designación de dos personas especialistas para evaluar con criterio experto la obra perteneciente a este caso. Las personas especialistas ofrecieron sus criterios el 16 de julio de 2024 y el 8 de octubre de 2024, respectivamente, los cuales fueron remitidos por la Facultad de Derecho en los oficios FD-1511-2024 y FD-2310-2024, del 18 de julio de 2024 y 6 de noviembre de 2024, respectivamente, a la entidad solicitante.
7. En el oficio CRA-996-2025, del 22 de mayo de 2025, la Comisión de Régimen Académico elevó al Consejo Universitario el recurso de apelación interpuesto por el docente de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel Rojas Salas.
8. En la siguiente tabla se consigna lo que establecen las rúbricas general y específicas por áreas académicas para la evaluación de publicaciones y obras, en los rubros de moderada originalidad, moderada relevancia, moderada trascendencia y poca complejidad, tal y como fue calificado el artículo por la Comisión de Régimen Académico, además, cómo se pronunciaron las personas especialistas n.º 1 y n.º 2 sobre esos rubros.

Comisión de Régimen Académico	Especialista n.º 1	Especialista n.º 2
<p>Artículo: “La denominada edad del consentimiento: un terreno legislativo por cultivar”</p> <p>Originalidad (moderada): La obra aporta, sistematiza o produce de manera incipiente, conocimiento o técnicas novedosas para el área disciplinar; la obra incorpora referencias teóricas limitadas en cantidad, pero relevantes para el campo disciplinar; la obra presenta un nivel incipiente de vinculación transdisciplinar cuando aplique; la obra presenta un atisbo de abordaje alternativo a la dominante dentro del campo disciplinar.</p>	<p><i>Es original. No son abundantes las obras que traten el tema con carácter crítico.</i></p>	<p><i>El artículo puede considerarse original debido a varios indicadores. En primer lugar, aborda la temática de la edad del consentimiento desde una perspectiva que no ha sido ampliamente tratada en la literatura existente, centrándose en la autodeterminación sexual de los menores en el contexto de las reformas penales contemporáneas. Además, utiliza fuentes recientes y relevantes que aportan un enfoque actualizado al análisis.</i></p>
<p>Relevancia (moderada): La obra versa sobre un tema o problema conocido a nivel nacional o internacional, de interés disciplinar, social o institucional, según corresponda y la obra presenta aportes preliminares al campo de estudio o ejercicio profesional.</p>	<p><i>Es relevante. Da argumentos sólidos acerca de los problemas asociados con la edad para consentir contemplada en distintos tipos penales.</i></p>	<p><i>La obra analizada es altamente relevante en el campo del Derecho Penal y los derechos de los menores, ya que aborda un tema crítico que impacta directamente en la vida de jóvenes y en la configuración de la legislación penal. Su utilidad para el avance del conocimiento en esta área radica en su enfoque integral, que no solo examina la legislación sobre la edad del consentimiento, sino que también contextualiza esta cuestión dentro del marco del populismo punitivo, permitiendo una comprensión más profunda de las dinámicas sociales y políticas que influyen en la legislación penal. Al centrarse en la autodeterminación sexual de los menores, se engloba también los derechos humanos de una población vulnerabilizada, lo que puede fomentar un abordaje sobre la necesidad de un cambio del paradigma en las políticas de protección infantil y juvenil. El artículo tiene el potencial de convertirse en un referente para futuras publicaciones en la materia, guiando a otros investigadores a abordar la cuestión desde perspectivas similares o complementarias. En conjunto, este trabajo no solo contribuye al entendimiento actual del tema, sino que también sienta las bases para el desarrollo de nuevas líneas de investigación y discusión.</i></p>

<p>Trascendencia (moderada): Cuando los aportes, problematizaciones o resultados contenidos en la obra expresan de forma incipiente viabilidad para generar innovaciones o mejoras que van más allá del entorno disciplinar; muestra alguna utilidad o beneficio para el campo de estudio o para poblaciones vinculadas a su producción; se consigna en un medio de divulgación de limitado alcance; se desarrolla en un idioma que no corresponde con el de mayor difusión y alcance para el ámbito disciplinar en particular.</p>	<p><i>Es trascendente. El estudio de herramientas para que se efectúen reformas legales importantes.</i></p>	<p><i>El artículo es trascendente más allá de un análisis académico y jurídico. El artículo es trascendente ya que realizar un análisis crítico sobre la edad del consentimiento y la autodeterminación sexual de los menores puede generar un impacto social significativo al fomentar un debate informado sobre la protección de los derechos de los jóvenes. Esto es esencial en un contexto donde las políticas punitivas pueden, a menudo, pasar por alto las necesidades y derechos de esta población. Desde un punto de vista académico, el artículo proporciona insumos valiosos que pueden ser utilizados en la investigación y la formación. De igual forma es un trabajo con la capacidad de influir en la forma de decisiones al ofrecer un análisis que resalta la importancia de considerar los derechos humanos en la legislación. Legisladores, jueces y organizaciones pueden beneficiarse de sus hallazgos para formular políticas más efectivas en la realidad de los menores. El artículo no solo enriquece el conocimiento en el ámbito local, sino que también tiene el potencial de influir en prácticas y políticas a nivel mundial. Su trascendencia radica en su capacidad para informar, inspirar y guiar a diferentes sectores hacia un enfoque más respetuoso en la protección de los derechos de los menores.</i></p>
<p>Complejidad (Moderada): La obra presenta un nivel de complejidad bajo, en tanto incorpora metodologías, estrategias de análisis de resultados o refleja herramientas de producción usuales, la obra en su diseño aplica herramientas, acciones o mecanismos para asegurar el cumplimiento de criterios académicos mínimos, según disciplina, la obra presenta coherencia elemental entre su referencia teórica y la metodología aplicada y la obra alcanza un grado de complejidad similar al de otras publicaciones en el ámbito disciplinar y transdisciplinar.</p>	<p><i>La complejidad es media. El análisis es puntual y se circunscribe a un aspecto específico.</i></p>	<p><i>El autor utiliza una variedad de fuentes que incluyen literatura académica reciente, permitiendo un enfoque actualizado del tema. La diversidad de fuentes también garantiza que el análisis se encuentra debidamente fundamentado y refleje múltiples perspectivas. Se evidencia la utilización y análisis de datos cualitativos y cuantitativos para formular argumentos, permitiendo diferentes dimensiones del problema. Estas características hacen del artículo (sic) una obra compleja que no solo aborda un tema crítico, sino que también lo hace de manera rigurosa y multifacética, enriqueciendo el discurso académico y profesional sobre la edad del consentimiento y los derechos de los menores.</i></p>

9. En la reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el 23 de julio de 2025, se analizó el recurso de apelación, así como los criterios ofrecidos por las personas especialistas y se concluyó que estos últimos se encuentran por encima o son muy superiores a los consignados por la Comisión de Régimen Académico en la evaluación del artículo, esto de conformidad con las rúbricas general y específicas por áreas académicas para la evaluación de publicaciones y obras, en cuanto a los rubros de originalidad, relevancia, trascendencia y complejidad.
10. De conformidad con lo indicado por las personas especialistas en los rubros de originalidad, relevancia, trascendencia y complejidad, se concluye que al efectuar la sumatoria de estos rubros, la persona especialista n.º 1, le otorga 1,75 puntos, debido a que el artículo posee alta originalidad (0,50 puntos), alta relevancia (0,50 puntos), alta trascendencia (0,50 puntos) y moderada complejidad (0,25 puntos); y la persona especialista n.º 2 le otorga 2,25 puntos en consideración de que el artículo evaluado posee alta originalidad (0,50 puntos), muy alta relevancia (0,75 puntos), alta trascendencia (0,50 puntos) y alta complejidad (0,50 puntos). Puntajes a los que se les debe adicionar o sumar el puntaje originalmente asignado (1,00 puntos).

Puntaje otorgado por la Comisión de Régimen Académico: 1,00 puntos

Puntaje de la persona especialista n.º 1 de acuerdo a sus criterios: 1,75 puntos

Puntaje de la persona especialista n.º 2 de acuerdo a sus criterios: 2,25 puntos

Total: 5,00 puntos

5,00 puntos divididos entre 3 (puntaje otorgado por la CRA y las dos personas especialistas)= 1,67 puntos.

11. En virtud de lo anterior, el puntaje originalmente otorgado al artículo denominado “La denominada edad del consentimiento: un terreno legislativo por cultivar” debe modificarse y, consecuentemente, pasar de 1,00 puntos a 1,67 puntos.

IV. Recurso de apelación presentado por el Dr. Manuel Rojas Salas en contra de la resolución de calificación CRA 997-2025 (sic), Pase CU-54-2025, del 3 de junio de 2025. Artículo: *Los delitos del odio: ¿necesitan de regulación expresa en la legislación represiva costarricense?*.

1. El 14 de febrero de 2024, el docente de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel Rojas Salas, con el propósito de actualizar el puntaje en Régimen Académico, presentó a evaluación el artículo “Los delitos de odio: ¿necesitan de regulación expresa en la legislación represiva costarricense?” (solicitud n.º 16367, del 14 de febrero de 2024).
2. En la resolución de calificación n.º 2984-61-2024, del 14 de agosto de 2024, la Comisión de Régimen Académico (CRA) le otorgó al artículo “Los delitos de odio: ¿necesitan de regulación expresa en la legislación represiva costarricense?” 1,25 puntos, al considerar que posee moderada originalidad, moderada relevancia, alta trascendencia y moderada complejidad.
3. No conforme con el resultado de la evaluación, el 25 de septiembre de 2024, el docente Rojas Salas presentó de manera directa un recurso de apelación en contra de la resolución de calificación n.º 2984-61-2024, del 14 de agosto de 2024, dicho recurso se adjunta al expediente del caso.
4. La Circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, de la Vicerrectoría de Docencia, y su posterior adición del 2 de marzo de 2021, explicita el deber del personal docente de colaborar de forma consultiva con la CRA; así como la responsabilidad que tienen las personas que ocupan puestos de autoridad superior jerárquica en las unidades académicas, de cuidar que la persona docente designada para colaborar cumpla en tiempo y forma, con la solicitud requerida por ese Órgano.
5. El 11 de diciembre de 2024, La CRA, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 TER del *Reglamento de Régimen Académico y de Servicio Docente*, y de acuerdo con lo indicado en la circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, y su posterior adición del 2 de marzo de 2021, previo a elevar en alzada el recurso interpuesto, solicitó al Decanato de la Facultad de Derecho la designación de dos personas especialistas para evaluar con criterio experto la obra perteneciente a este caso. Las personas especialistas ofrecieron sus criterios el 29 de enero de 2025 y el 21 de febrero de 2025, respectivamente, los cuales fueron remitidos por la Facultad de Derecho en

los oficios FD-177-2025 y FD-384-2025, del 6 de febrero de 2025 y 25 de febrero de 2025, respectivamente, a la entidad solicitante.

6. En el oficio CRA-997-2025, del 22 de mayo de 2025, la CRA elevó al Consejo Universitario el recurso de apelación interpuesto por el docente de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel Rojas Salas.

CONSIDERANDO QUE:

1. El 14 de febrero de 2024, el docente de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel Rojas Salas, con el propósito de actualizar el puntaje en Régimen Académico presentó a evaluación el artículo “Los delitos de odio: ¿necesitan de regulación expresa en la legislación represiva costarricense?” (solicitud n.º 16367, del 14 de febrero de 2024).
2. En la resolución de calificación n.º 2984-61-2024, del 14 de agosto de 2024, la Comisión de Régimen Académico le otorgó al artículo “Los delitos de odio: ¿necesitan de regulación expresa en la legislación represiva costarricense?” 1,25 puntos, al considerar que posee moderada originalidad, moderada relevancia, alta trascendencia y moderada complejidad.
3. No conforme con el resultado de la evaluación, el 25 de septiembre de 2024, el docente Rojas Salas presentó de manera directa un recurso de apelación en contra de la resolución de calificación n.º 2984-61-2024, del 14 del agosto de 2024.
4. El Dr. Manuel Rojas Salas, en su recurso de apelación, expuso lo siguiente:

Las razones de mi inconformidad, las paso a desarrollar, señalando de antemano que sigo sorprendiéndome en cuanto a que la Comisión se haya tomado casi nueve meses para realizar el estudio de la publicación y se otorgue un punto veinticinco como valoración total, puesto que parece que para la Comisión de Régimen Académico, no hay trabajos de investigación que sean susceptibles de alcanzar calificaciones destacadas, a pesar del esfuerzo de la persona investigadora y del hecho público y notorio, de que en el Área del Derecho y particularmente del Derecho Penal, las oportunidades para publicar y los medios son extremadamente escasos.

A. Originalidad: A diferencia de la calificación otorgada en dicho rubro, que se indica que es “Moderada”, la publicación de mi autoría abordó un tema del que no hay mayores estudios en nuestro país, como lo es lo relativo a los delitos de odio, empezando por abarcar lo relativo al denominado discurso del odio o discurso extremo, que sí es objeto de penalización en otras latitudes, ya que se han presentado gestiones relativas a procurar tipificar el discurso de odio, a pesar de que se trata en última instancia de una manifestación de la libertad de expresión, derecho que se encuentra consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos y aunque no ha habido un pronunciamiento expreso sobre el punto, la línea jurisprudencial se aborda para señalar la inconveniencia de su punición, a diferencia de lo que sucede respecto de las motivaciones de las personas en la comisión de algunos tipos penales, de manera tal que no se trata de una Originalidad Moderada, ya que los estudios a nivel nacional sobre el tema, son escasos.

Al hablarse de “originalidad” evidentemente y de conformidad con los términos del Diccionario de la Real Academia Española, implica o conlleva novedad e innovación, lo que puede observarse del mismo contenido del artículo cuya calificación me encuentro impugnando. A diferencia de la calificación, la originalidad es alta, porque precisamente a ningún representante legislativo se le ha ocurrido la idea de establecer, como tiene lugar en legislaciones más avanzadas, una agravante de naturaleza genérica, que contemple la motivación del odio, en el tanto una clarísima discriminación. Esta situación pone de manifiesto que el tema había sido invisibilizado por parte de la legislación y la Dogmática.

Incluso, la guía que tiene el Centro de Evaluación Académica y que es a lo que el docente que es evaluado, trata de ajustarse, indica como este rubro, lo siguiente: “El trabajo demuestra la utilización de fuentes novedosas, de nuevos indicadores o nuevos productos, el uso de nuevas metodologías o técnicas, mediciones originales o aporta grandes novedades científicas o Tecnológicas”.

De modo tal que la calificación es no solo desacertada, sino que además revela una lectura muy a la ligera y con escasa o nula atención a aspectos relevantes.

b) Relevancia: A diferencia de lo que se indicó en la calificación, la publicación aludida, tiene una alta relevancia, en razón de que se pone de manifiesto que a diferencia de la línea seguida por el Poder Legislativo costarricense durante los últimos tiempos, en cuanto a la penalización indiscriminada y las continuas reformas a la legislación represiva, el odio como sentimiento, no puede ser objeto de sanción o de regulación desde la perspectiva del Ius Puniendi Estatal.

En el artículo se hace la distinción entre el discurso de odio o discurso extremo y los hechos típicos distintos del discurso referido, que se encuentran realizados a partir de un sentimiento de odio y que como bien se detalla, tienen lugar generalmente en contra de ciertas minorías o bien en contra de grupos que han sido históricamente discriminados.

De ahí que conforme se muestra en el artículo, a pesar de la existencia de una reforma que se llevó a cabo en fecha reciente y que afecta a los tipos de homicidio y lesiones, existe una gran laguna de punición que no deja de ser preocupante.

La Relevancia, que para el calificador es Moderada, no es tal puesto que el artículo brinda un panorama de la necesidad imperiosa de regular, o bien una agravante genérica, o de incluir expresamente la agravante del odio en caso de hechos que afecten la autodeterminación sexual o indemnidad sexual.

Con el artículo de mi autoría, se pretende visibilizar un tema en el que como bien se ha señalado, hay escasa o nula producción dogmática en nuestro país, que de alguna forma pueda contrarrestar la tendencia punitivista existente.

c)-Complejidad: A diferencia de lo que señala la calificación que fuera otorgada, la complejidad del tema tratado en el artículo es alta. La complejidad tiene que ver con el grado de dificultad de un artículo como tema de investigación.

Debe destacarse que, por un tema de Política Criminal, cada ordenamiento jurídico es el que debe determinar la procedencia de la penalización en concreto de las conductas. En el artículo se destaca con claridad que, a pesar de una reforma legislativa reciente, dicho cambio se quedó corto al dejar por fuera a una serie de personas integrantes de grupos que debieron ser protegidos con la agravante que se introdujo, pero reducida a su aplicación a casos de homicidio y las lesiones.

Igualmente, y aunque resulta polémico y preocupante el fenómeno que se ha denominado “inflacionismo penal”, en el artículo de mi autoría se hace una indicación respecto de la necesidad de que los eventos cometidos en perjuicio de grupos históricamente sometidos a discriminación o desaprobación social, por esa sola circunstancia, son hechos que se hacen merecedores a un reproche mayor por parte de la respuesta punitiva más fuerte y delicada que tiene el ordenamiento jurídico.

El artículo enfatiza la necesidad de que en hechos que lesionen la autodeterminación sexual, la introducción de la reforma cuando existe una motivación de desprecio u odio, como una motivación ulterior distinta del dolo, resulta ser necesaria.

Es claro entonces que cualquier reforma o modificación legislativa que pueda tener lugar respecto del tema tratado, debe abordarse de manera seria y a partir de una apropiada sistematización, para evitar la duplicidad en la protección de las conductas y con la utilización de un lenguaje claro y preciso, que no brinde oportunidad a interpretaciones antojadizas que puedan ser violatorias del principio de legalidad criminal.

Solicito se conozca en alzada por la vía de la apelación que se está interponiendo, y se me otorgue un mínimo de dos puntos para la publicación supra indicada.

5. La Circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, de la Vicerrectoría de Docencia, y su posterior adición del 2 de marzo de 2021, explicita el deber del personal docente de colaborar de forma consultiva con la CRA; así como la responsabilidad que tienen las personas que ocupan puestos de autoridad superior jerárquica en las unidades académicas, de cuidar que la persona docente designada para colaborar cumpla en tiempo y forma, con la solicitud requerida por ese Órgano.
6. El 11 de diciembre de 2024, la Comisión de Régimen Académico (CRA) de conformidad con lo establecido en el artículo 42 TER del *Reglamento de Régimen Académico y de Servicio Docente*, y de acuerdo con lo indicado en la circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, y su posterior adición del 2 de marzo de 2021, previo a elevar en alzada el recurso interpuesto, solicitó al Decanato de la Facultad de Derecho la designación de dos personas especialistas para evaluar con criterio experto la obra perteneciente a este caso. Las personas especialistas ofrecieron sus criterios el 29 de enero de 2025 y el 21 de febrero de 2025, respectivamente, los cuales fueron remitidos por la Facultad de Derecho en los oficios FD-177-2025 y FD-384-2025, del 6 de febrero de 2025 y 25 de febrero de 2025, respectivamente, a la entidad solicitante.
7. En el oficio CRA-997-2025, del 22 de mayo de 2025, la Comisión de Régimen Académico elevó al Consejo Universitario el recurso de apelación interpuesto por el docente de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel Rojas Salas.

8. En la siguiente tabla se consigna lo que establecen las rúbricas general y específicas por áreas académicas para la evaluación de publicaciones y obras, en los rubros de moderada originalidad, moderada relevancia, moderada trascendencia y poca complejidad, tal y como fue calificado el artículo por la Comisión de Régimen Académico, además, cómo se pronunciaron las personas especialistas n.º 1 y n.º 2 sobre esos rubros.

Comisión de Régimen Académico	Especialista n.º 1	Especialista n.º 2
<p>Artículo: “Los delitos del odio: ¿necesitan de regulación expresa en la legislación represiva costarricense?”.</p> <p>Originalidad (moderada): La obra aporta, sistematiza o produce de manera incipiente, conocimiento o técnicas novedosas para el área disciplinar; la obra incorpora referencias teóricas limitadas en cantidad, pero relevantes para el campo disciplinar; la obra presenta un nivel incipiente de vinculación transdisciplinar cuando aplique; la obra presenta un atisbo de abordaje alternativo a la dominante dentro del campo disciplinar.</p>	<p><i>El artículo académico bajo consideración puede ser descrito como original, debido a diferentes criterios inmersos en su desarrollo de ámbito legal y académico. La temática abordada, los delitos de odio en el contexto costarricense y la regulación del discurso del odio, es altamente relevante y contemporánea, y aún no se ha tratado con la profundidad que exige la situación actual en el país.</i></p> <p><i>El autor utiliza fuentes novedosas al referirse a las redes sociales y la globalización como fenómenos que amplifican el discurso del odio, analizando cómo estas herramientas de comunicación impactan las dinámicas sociales y jurídicas en Costa Rica. La reflexión sobre la necesidad o no de una regulación expresa de los delitos de odio dentro del marco legal costarricense introduce nuevos indicadores al relacionar el discurso del odio con las decisiones políticas y sociales locales.</i></p> <p><i>Además, la propuesta de ampliar el espectro de punición en crímenes relacionados con la discriminación sexual es un desarrollo innovador dentro de la legislación penal del país.</i></p> <p><i>El autor también hace uso de una metodología reflexiva y crítica, que no solo examina las implicaciones jurídicas, sino que también cuestiona el uso de herramientas represivas, siguiendo principios y criterios base en materia de Derechos Humanos. Este enfoque no solo es novedoso, sino que plantea interrogantes sobre las tendencias globales sobre la libertad de expresión, la protección a poblaciones vulnerables y la intervención del Estado por medio de las herramientas punitivas.</i></p>	<p><i>Es original. No hay obras en el país que traten ese tema.</i></p>

	<i>El artículo introduce propuestas que, de ser adoptadas, podrían representar una novedad en la legislación costarricense, mejorando su capacidad para enfrentar fenómenos discriminatorios y violentos sin sacrificar principios fundamentales de derechos humanos.</i>	
Relevancia (moderada): La obra versa sobre un tema o problema conocido a nivel nacional o internacional, de interés disciplinar, social o institucional, según corresponda y la obra presenta aportes preliminares al campo de estudio o ejercicio profesional.	<p><i>El artículo estudiado es de relevancia para el avance del conocimiento en el ámbito del Derecho Penal y Derechos Humanos, específicamente en lo que respecta a decisiones de orden legislativo. Al abordar un tema de actualidad, como la proliferación del discurso de odio en Costa Rica, haciendo énfasis en la sociedad tecnológica en la que estamos inmersos, el autor aporta una reflexión crítica que no solo examina el fenómeno desde una perspectiva jurídica, sino también desde un punto de vista social y político.</i></p> <p><i>Mientras se realiza la politización sobre la tipificación de delitos de odio, se resalta la importancia de respetar principios fundamentales como la libertad de expresión y la intervención mínima del Estado, en lugar de adoptar medidas represivas excesivas.</i></p> <p><i>Este enfoque es crucial para avanzar en la discusión sobre la aplicación del Derecho Penal en un contexto globalizado y digitalizado, y podría sentar un precedente para futuras investigaciones y publicaciones sobre la relación entre la tecnología, la comunicación y el derecho.</i></p> <p><i>Además, la propuesta de extender la punición a ciertos crímenes de odio de naturaleza sexual y la reflexión sobre la discriminación hacia poblaciones vulnerabilidades (sic) resultan temas inéditos en la legislación y doctrina costarricense, lo que posiciona al texto como un referente potencial para futuras publicaciones y discusiones jurídicas sobre cómo mejorar la protección de los derechos fundamentales frente a la discriminación y la violencia motivada por el odio.</i></p>	<p><i>Es trascendente. Se hace una propuesta de lege ferenda en el tema.</i></p> <p><i>Es relevante. Hace un análisis puntual de los elementos básicos a considerar en relación con este fenómeno y la respuesta que debería tener desde el ordenamiento jurídico.</i></p> <p><i>El tema también es básico en nuestros tiempos dado el incremento de los discursos de odio (incluso por parte de quienes, por su posición en la estructura institucional, son llamados a censurarlos) y su amplia difusión a través de las nuevas tecnologías de la información la comunicación.</i></p>

<p>Trascendencia (alta): Los aportes idearios, problematizaciones, o resultados contenidos en la obra, expresan viabilidad para generar innovaciones o mejoras que van más allá del entorno disciplinar, la obra muestra diversa utilidad o beneficios para el campo de estudio, o para poblaciones vinculadas a su producción, pese a su grado de sostenibilidad en el tiempo o dependencia de variables ajenas al proceso, la obra se consigna en un medio de divulgación con nivel de alcance o factor de impacto intermedio, según corresponda y la obra se desarrolla en un idioma que corresponde con el de mayor difusión y alcance para el ámbito disciplinar en particular.</p>	<p><i>El artículo académico puede ser considerado trascendente debido a su capacidad para generar un impacto significativo tanto en el ámbito social como académico e institucional. Su relevancia se extiende más allá de un análisis jurídico puntual, al abordar un problema globalizado que afecta a diversas sociedades contemporáneas: el discurso del odio y los delitos motivados por la discriminación.</i></p> <p><i>Este texto no solo analiza el contexto costarricense, sino que también ofrece una comparación con otros países, y su contenido crítico puede ser aplicado a indiferentemente la localidad.</i></p> <p><i>Su propuesta sobre la regulación de los delitos de odio y la ampliación de la punición de crímenes de odio sexuales es de gran utilidad para la comunidad jurídica, pues ofrece insumos para la toma de decisiones legislativas en áreas como los derechos humanos, la libertad de expresión y la protección contra la discriminación.</i></p> <p><i>Asimismo, el impacto social de este texto radica en su capacidad para sensibilizar a los ciudadanos y a los actores políticos sobre la importancia de equilibrar la protección de derechos fundamentales con la concientización del poder punitivo.</i></p> <p><i>A nivel académico, el texto ofrece una base sólida para futuros estudios y debates, ya que plantea interrogantes sobre la función del Derecho Penal en la protección de grupos vulnerables. Su contribución trasciende las fronteras nacionales, sirviendo como referencia para organismos internacionales. En definitiva, el texto no solo aporta sustancia al ejercicio profesional local y nacional, sino que también proporciona una visión integral que podría influir en debates a nivel global.</i></p>	
--	---	--

EL MAG. HUGO AMORES VARGAS explica que de lege ferenda se trata de recomendar modificaciones legislativas y legales, eso permite que, cuando haya una recomendación de modificación legal, un artículo académico de este tipo pueda trascender muchísimo, porque puede servir de base para una propuesta legislativa —eventualmente— de modificación legal a alguna norma.

<p>Complejidad (moderada): La obra presenta un nivel de complejidad bajo, en tanto incorpora metodologías, estrategias de análisis de resultados, o refleja herramientas de producción usuales; la obra en su diseño aplica herramientas, acciones o mecanismos para asegurar el cumplimiento de criterios académicos mínimos, según disciplina; la obra presenta coherencia elemental entre su referencia teórica y la metodología aplicada; la obra alcanza un grado de complejidad similar al de otras publicaciones en el ámbito disciplinar o transdisciplinar.</p>	<p><i>La obra presenta una complejidad destacada tanto en sus conocimientos como en las técnicas y metodologías empleadas, lo cual enriquece su análisis y le otorga un enfoque multidimensional.</i></p> <p><i>La utilización de fuentes jurídicas, sociales y políticas diversas, que incluyen tanto normativa nacional como jurisprudencia internacional, muestra una integración amplia de perspectivas, lo cual eleva el nivel de reflexión sobre el tema de los delitos de odio. Además, el texto emplea una metodología crítica que no solo analiza los aspectos legales, sino también los contextos sociales y políticos.</i></p> <p><i>La existencia de diferentes etapas de análisis, desde la reflexión teórica sobre el discurso del odio hasta las propuestas concretas de regulación legal, demuestra un enfoque estructurado y riguroso que aborda el tema desde varias aristas.</i></p> <p><i>Aunque no se menciona explícitamente, se podría inferir la aplicación de estrategias de validación indirectas a través del análisis de casos internacionales y locales, lo que refuerza la fiabilidad de las conclusiones. Si bien no se describe una</i></p> <p><i>participación explícita de equipos interdisciplinarios, el texto claramente integra elementos de derecho penal, derechos humanos, sociología política y tecnología, lo cual sugiere un enfoque interdisciplinario implícito.</i></p>	<p><i>La complejidad es media, se acude a fuentes bibliográficas únicamente.</i></p>
--	--	--

9. En la reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el 23 de julio de 2025, se analizó el recurso de apelación, así como los criterios ofrecidos por las personas especialistas y se concluyó que estos últimos se encuentran por encima o son muy superiores a los consignados por la Comisión de Régimen Académico en la evaluación del artículo, esto de conformidad con las rúbricas general y específicas por áreas académicas para la evaluación de publicaciones y obras, en cuanto a los rubros de originalidad, relevancia, trascendencia y complejidad.
10. De conformidad con lo indicado por las personas especialistas en los rubros de originalidad, relevancia, trascendencia y complejidad, se concluye que al efectuar la sumatoria de estos rubros, la persona especialista n.º 1 le otorga 2,25 puntos, debido a que el artículo posee alta originalidad (0,50 puntos), muy alta relevancia (0,75

puntos), alta trascendencia (0,50 puntos) y alta complejidad (0,50 puntos); y la persona especialista n.º 2 le otorga 2,00 puntos en consideración de que el artículo evaluado posee alta originalidad (0,50 puntos), alta relevancia (0,50 puntos), alta trascendencia (0,50 puntos) y alta complejidad (0,50 puntos). Puntajes a los que se les debe adicionar o sumar el puntaje originalmente asignado (1,25 puntos).

Puntaje otorgado por la Comisión de Régimen Académico: 1,25 puntos

Puntaje de la persona especialista n.º 1 de acuerdo a sus criterios: 2,25 puntos

Puntaje de la persona especialista n.º 2 de acuerdo a sus criterios: 2,00 puntos

Total: 5,00 puntos

5,50 puntos divididos entre 3 (puntaje otorgado por la CRA y las dos personas especialistas)= 1,85 puntos.

11. En virtud de lo anterior, el puntaje originalmente otorgado al artículo denominado “Los delitos del odio: ¿necesitan de regulación expresa en la legislación represiva costarricense?” debe modificarse y consecuentemente pasar de 1,25 puntos a 1,85 puntos.

ACUERDA:

1. Acoger el recurso de apelación interpuesto por el docente de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel Rojas Salas, en contra de la resolución de calificación n.º 2963-33-2023, del 1.º de noviembre de 2023, de manera que el artículo denominado “El fraude de simulación: un tipo penal incomprensido” debe pasar de 0,75 puntos de calificación a 1,05 puntos.
2. Acoger el recurso de apelación interpuesto por el docente de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel Rojas Salas, en contra de la resolución de calificación n.º 2972-60-2024, del 20 de marzo de 2024, de manera que el artículo “El child grooming como conducta típica en el Código Penal: su regulación legislativa en Costa Rica” pase de 1,25 puntos de calificación a 1,75 puntos.
3. Acoger el recurso de apelación interpuesto por el docente de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel Rojas Salas en contra de la resolución de calificación n.º 2972-61-2024, del 20 de marzo de 2024, de manera que y consecuentemente, el artículo denominado “La denominada edad del consentimiento: un terreno legislativo por cultivar” pase de una calificación de 1,00 puntos a 1,67 puntos.
4. Acoger el recurso de apelación interpuesto por el docente de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel Rojas Salas, en contra de la resolución de calificación n.º 2984-61-2024, del 14 de agosto de 2024, de manera que el artículo denominado “Los delitos del odio: ¿necesitan de regulación expresa en la legislación represiva costarricense?” pase de 1,25 puntos de calificación a 1,85 puntos.
5. Dar por agotada la vía administrativa.
6. Notificar las resoluciones de los siguientes acuerdos al correo electrónico manuel.rojas@ucr.ac.cr

EL MAG. HUGO AMORES VARGAS finaliza con la lectura. Recuerda que la comisión está conformada por su persona, el Dr. Eduardo Calderón Obaldía y es coordinada por la M. Sc. Esperanza Tasies Castro. Agradece al Lic. Rafael Jiménez Ramos, asesor e investigador de la Unidad de Estudios, por la elaboración del dictamen.

****A las nueve horas y veintinueve minutos, se retira el Dr. Eduardo Calderón Obaldía.****

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS cede la palabra al Dr. Keilor Rojas Jiménez.

EL DR. KEILOR ROJAS JIMÉNEZ remarca que está de acuerdo con el dictamen. Resalta que él pertenece a un área distinta, no cuenta con parámetros respecto a cómo se evalúa esto en el Área de Derecho. En su área (Ciencias Básicas), tener un 1,85 en una publicación casi nunca se da, a pesar de que sean de un alcance internacional muy alto; en general, las calificaciones que se reciben son relativamente menores. Destaca que esto es algo anecdótico sobre lo cual no desea entrar en el fondo.

Consulta al Mag. Hugo Amores Vargas, como miembro de la comisión y experto en Derecho, sobre el proceso. Específicamente, por qué todos estos trámites, necesariamente, deben llegar al CU, por qué se agota la vía administrativa, en lugar de que sea en la Vicerrectoría de Docencia. Esto por cuanto piensa que la comisión evalúa miles de artículos y libros al año, y si cada persona recurriera cada una de las notas que le son asignadas, en el Órgano Colegiado no trabajarían, solo se dedicarían a eso. Resume que su consulta es en torno al proceso. Inquire si, con la experiencia del Mag. Hugo Amores Vargas, visualiza alguna manera de hacer más fluido y más expedito este proceso, y que no se requiera la elaboración de un dictamen de más de 50 páginas. Lo anterior, a fin de valorar cómo se puede mejorar el proceso.

EL MAG. HUGO AMORES VARGAS responde que, más bien, el Dr. Eduardo Calderón Obaldía que lleva más tiempo de conformar la comisión podría referirse al respecto. Destaca que, en su caso, con la experiencia de este año, puede indicar al Dr. Keilor Rojas Jiménez que no todas las personas —por dicha— recurren. Sin embargo, hay todo un procedimiento y está establecido, reglamentariamente, que los recursos de apelación o en alzada son resorte del Consejo Universitario, de modo que ahí no tendrían forma de evadir esa responsabilidad y, por tal motivo, agotan la vía administrativa en este tema.

En cuanto a las evaluaciones, han visto todas las materias, tal como en Ciencias Básicas y otras. Recuerda que el martes revisaron un caso relacionado con una publicación sobre el Chile, se trataba de algo muy técnico. A partir de las indicaciones de los pares y los expertos, se rechazó el recurso. Se evaluó la trascendencia, la relevancia y todos los elementos que se hacen en estos análisis. No podría especificar en el ámbito del Derecho —como sugirió el Dr. Keilor Rojas Jiménez—, pues se trata de un tema de argumentación, de lo que indican los pares y, técnicamente, se deben mantener en eso.

*****A las nueve horas y treinta y dos minutos, se incorpora el Dr. Eduardo Calderón Obaldía.*

Manifiesta que la Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas podría referirse al respecto, pero reitera que hay una norma expresa que los obliga a ver estos temas, independientemente de la cantidad que llegan: si llegan 100 recursos, hay que resolver 100 recursos. En ocasiones sucede que la CRA resuelve en la revocatoria y la persona queda satisfecha. A veces se da esa vía, a veces sí se resuelve y va la nota al alza, de tal manera que la persona queda satisfecha. No obstante, sugiere que se podría solicitar a la Unidad de Estudios un análisis estadístico de datos para saber cuántos recursos están ingresando al año en esta materia.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS, en relación con el tema, indica que, en el caso del Área de Humanidades lo que otorgan son 10 y 25 puntos, aunque tenga impacto internacional. Entonces, por ejemplo, para un libro, otorgan a la persona 2 puntos (como si fuera un artículo). Describe que en el Área de Humanidades es una “miseria” la forma en que son evaluados, manifiesta que no hay otra forma de decirlo. De modo que, entonces, deben publicar prácticamente el doble que una persona del área de ciencias duras para subir de categoría académica, aunque muchos —incluida ella— publican internacionalmente; es decir, con alcance internacional.

El problema también radica en el modelo: se está revisando el modelo de evaluación. En lo personal, en eso siempre ha estado en desacuerdo, en defensa de su área. Indica que Humanidades incluye Ciencias

Sociales, Artes y Letras, en el sentido de que las revistas del Área de Humanidades no las recogen las grandes máquinas que ponen los *rankings*, no las cosechan. De modo que este es un problema, porque no es lo mismo un h-Index con el que se cuenta en las Ciencias Duras versus un h-Index del Área de Humanidades, puesto que la mitad de los trabajos del área de las revistas no están cosechadas. En ese punto, hay una desigualdad en las condiciones en el ámbito internacional. Remarca que esta es una discusión dura, que tiene años, que no se ha resuelto; por tal motivo, la mayoría de las personas que conforman el área no están de acuerdo con la evaluación automática a partir de los índices, puesto que habría que hacer una diferenciación por áreas del conocimiento de cómo es que funcionan a nivel internacional los índices. Entonces, los índices, en este momento, también están sumamente cuestionados, porque están trabajando para corporaciones, no para el mundo académico. Aclara que este es su parecer personal.

La mayoría no agota las vías, pero, por ejemplo, uno de estos artículos del docente de derecho tiene un impacto fundamental a nivel nacional, como bien explicó el Mag. Hugo Amores Vargas, y cuestiona: ¿qué más importancia que esa, que es para cambiar la legislación nacional sobre un asunto que es medular en este momento? De modo que la valoración del impacto también es relativa. Cede la palabra al Mag. Hugo Amores Vargas.

EL MAG. HUGO AMORES VARGAS, sobre el mismo tema, lee el artículo 228 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*, el cual señala que:

ARTÍCULO 228.- Conocerán de las apelaciones:

- a) *El Consejo Universitario, de las decisiones tomadas por el rector o por la rectora, salvo en materia laboral, por la Comisión de Régimen Académico, por el Consejo del Sistema de Educación General, por el Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado y por la contralora o el contralor.*

EL MAG. HUGO AMORES VARGAS reitera que esto se indica en el artículo 228 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica* de manera expresa. El CU debe atender las apelaciones de los recursos que se interpongan ante la CRA. Remarca esto a fin de dejar más claro el comentario y retroalimentar en esa materia.

EL DR. EDUARDO CALDERÓN OBALDÍA se disculpa pues se perdió unos minutos de la conversación. Considera que la solución podría ser “salomónica”, al partir de una reforma estatutaria, para que, por un lado, no sea el CU el que dé la última palabra como órgano de alzada y, por otro lado, de la mano con una reforma integral de la forma en que se evalúa la obra académica, profesional y científica en la UCR.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS cede la palabra al Lic. William Méndez Garita.

EL LIC. WILLIAM MÉNDEZ GARITA recuerda, desde un punto de vista de metodología jurídica, que nuestro sistema de derecho administrativo establece siempre los procesos de alzada en aquellos criterios que un órgano inferior emite y puedan ser contraproducentes o lesivos de los derechos de la persona que está realizando la gestión. La doble instancia: primero se recurre. De hecho, manifiesta que este caso es muy particular pues, mientras formó parte de la CAJ con el Dr. Eduardo Calderón Obaldía y el Dr. Jaime Alonso Caravaca Morera, en muchas oportunidades observaron que las personas se “brincan” el recurrir el voto negativo de la comisión y van directamente a la CAJ, lo cual está habilitado. Entonces, así acortan los procesos.

Considera que puede coincidir con lo indicado por el Dr. Keilor Rojas Jiménez en el sentido de que podría ser que valga la pena revisar que el mecanismo de subsanación de discrepancia de criterios entre la comisión y la persona que llega a la comisión debería quedar dentro de una “instancia pura” —por decirlo así— que concentre el tema, y la excepción pudiera venir a una comisión del CU y que pudiera dar a la

CAJ la opción de poder atender otros puntos, como se hizo en la época de la M. Sc. Ana Carmela Velázquez Carrillo (cuando analizaron el tema del régimen salarial académico, documentos que enviaba la comunidad universitaria que no podían distribuirse a otra comisión). De modo que la CAJ pueda dedicar más tiempo y analizar temas jurídicos que no sean propios de ninguna de las otras comisiones.

Considera pertinente llevar a cabo un estudio en los futuros meses o años a fin de visualizar una reforma de ese capítulo. Estima que esta sería una reforma muy sensata. Da las gracias.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS comparte el sentir del Lic. William Méndez Garita, especialmente, por cuanto hay discrepancias entre la valoración final que hace la comisión en contraposición con las recomendaciones de las personas dictaminadoras, entonces no hay coincidencia entre lo que dicen las personas dictaminadoras especialistas y la decisión que toma la comisión. Agotada la discusión, somete a votación la propuesta de acuerdo, y se obtiene el siguiente resultado:

VOTAN A FAVOR: M. Sc. Jáírol Núñez Moya, Dr. Eduardo Calderón Obaldía, Dra. Ilka Treminio Sánchez, Sr. Fernán Orlich Rojas, Mag. Hugo Amores Vargas, Lic. William Méndez Garita, Srta. Isela Chacón Navarro, Ph. D. Sergio Salazar Villanea, Dr. Keilor Rojas Jiménez y Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas.

TOTAL: Diez votos.

EN CONTRA: Ninguno.

I. Recurso de apelación presentado por el Dr. Manuel Rojas Salas en contra de la resolución de calificación CRA 603-2025 (sic), Pase CU-51-2025, del 3 de junio de 2025. Artículo: “El fraude de simulación: un tipo penal incomprensido”.

Por lo tanto, el Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. El 28 de abril de 2023, el docente de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel Rojas Salas, con el propósito de actualizar el puntaje en Régimen Académico, presentó a evaluación el artículo “El fraude de simulación: un tipo penal incomprensido” (solicitud n.º 15302, del 28 de abril de 2023).
2. En la resolución de calificación n.º 2963-33-2023, del 1.º de noviembre de 2023, la Comisión de Régimen Académico le otorgó 0,75 de puntaje al considerar que posee moderada originalidad, moderada relevancia, moderada trascendencia y poca complejidad.
3. No conforme con el resultado de la evaluación, el 25 de septiembre de 2024, el docente Rojas Salas presentó de manera directa un recurso de apelación en contra de la resolución de calificación n.º 2963-33-2023, del 1.º de noviembre de 2023.
4. En la literalidad del recurso el docente Rojas Salas expuso:

(...) interpongo formal RECURSO DE APELACION en contra de la citada resolución, en el tanto me otorga la exigua calificación de 0,75 Centésimas de punto respecto de la publicación El fraude de simulación: un tipo penal incomprensido, que fuera publicada en la obra colectiva “Un Derecho Penal fundado en la dignidad humana”, libro homenaje al Dr. Alvaro Burgos Mata. El hecho de formar parte de quienes podíamos brindar un aporte académico en este libro homenaje dejaba evidente que no se trataba de una convocatoria abierta, sino que el compilador optó por seleccionar algunas personas para ello ,grupo en el que honrosamente me correspondió estar, de manera tal que no se trata de una publicación de poco más o menos, como pareciera desprenderse de la calificación, ,sino que se trata de un homenaje a una persona catedrática, prematuramente fallecida y no se trataba de hacer una publicación por el mero capricho de hacerla, sino que me correspondió realizar una puntual y concienzuda selección del tema.

Las razones de mi inconformidad, las paso a desarrollar:

A. Originalidad: A diferencia de la calificación otorgada en dicho rubro, que se indica que es “Moderada”, la publicación de mi autoría aborda un tema del que no hay mayores estudios, como lo es la figura del tipo penal de fraude por simulación, que si bien es de actualidad, en razón de la existencia de fraudes registrales, de manera extraña y también sorprendente, no existe ni a nivel del a (sic) producción nacional (con una sola publicación que es una tesis de licenciatura que tampoco realiza un abordaje completo del tipo en cuestión), ni tampoco a nivel de la jurisprudencia patria, un estudio completo y detallado de los elementos del tipo penal, de manera tal que no existe un abordaje y comprensión adecuada de los términos en los que el legislador costarricense decidió establecer la punición de la conducta del numeral 218 del código represivo. Para efectos de la publicación se debió realizar un análisis profundo del tipo penal e igualmente una comparación con otros tipos penales con los que usualmente y desde la práctica, se les suele confundir.

Al hablarse de “originalidad” evidentemente y de conformidad con los términos del Diccionario de la Real Academia (sic) Española, implica o conlleva novedad e innovación, lo que puede observarse del mismo contenido del artículo (sic) cuya calificación me encuentro impugnando. A diferencia de la calificación, la originalidad es alta, porque precisamente y como se indica en las conclusiones, el tratamiento que se ha brindado al tipo penal, ha sido ligero y absolutamente deficiente, por lo que se pretende dar una especie de criterio orientador a quienes fungen como operadores del sistema.

Incluso, la guía que tiene el centro de evaluación académica y que es a lo que el docente es evaluado, trata de ajustarse, indica como este rubro, lo siguiente: “El trabajo demuestra la utilización de fuentes novedosas, de nuevos indicadores o nuevos productos, el uso de nuevas metodologías o técnicas, mediciones originales o aporta grandes novedades científicas o tecnológicas”.

De modo tal que la calificación es no solo desacertada, sino que además revela una lectura muy a la ligera y con escasa o nula atención a aspectos relevantes.

b) Relevancia: A diferencia de lo que indicó la persona que ejecutó la calificación de la publicación aludida tiene una alta relevancia, en razón de que aunque se trata de un tipo penal de antigua existencia, propiamente incluido en nuestra legislación represiva desde el año 1970, de una búsqueda bibliográfica se hecha de menos no solamente un análisis desde la academia, en relación con los distintos elementos del tipo penal. (sic) ya que es una figura que no encuentra similares en otras regiones, de manera tal que el material existente para la creación del artículo publicado, era bastante escaso. La relevancia, que para el calificador es Moderada, no es tal puesto que el artículo (sic) brinda un panorama de la figura del Fraude de Simulación partiendo desde el bien jurídico tutelado y las modalidades de comisión, y aclara además la diferencia entre el elemento subjetivo distinto del tipo y la expresión “en perjuicio”, que es fundamental para entender si determinados comportamientos pueden completar el juicio de tipicidad objetiva. Detallo esto porque en definitiva si la expresión mencionada es vista de conformidad con los términos con los que se encuentra en una figura del Derecho Español, devendría en una figura de peligro, lo que en definitiva no concuerda con los principios legitimadores del Derecho Penal, máxime si se trata de un tipo penal que brinda protección al patrimonio, que si bien es cierto se trata de un aspecto de importancia en relación con la vivencia de una persona, tampoco puede considerársele de tal importancia como para considerar un adelantamiento de la protección por parte de las fronteras represivas.

Desde el título mismo del artículo, se aprecia que la simulación fraudulenta no ha sido un tipo penal de análisis pacífico, aspecto que se desarrolla, al mencionarse con detalle las tres modalidades y optar por la dinámica comisiva que más frecuentemente llega a estrados judiciales.

C. Trascendencia: A diferencia de la opinión de quien realizara la calificación del artículo, la trascendencia de la publicación es muy alta, ya que brinda insumos importantes que permiten a cualquier estudio del Derecho Penal y de las Ciencias Jurídicas tener un punto de apoyo en lo tocante al análisis de casos que tengan lugar en la realidad, respecto de su posible encuadramiento en el tipo penal del numeral 218.

En definitiva, el artículo (sic) puede servir-y tal fue la premisa que motivo (sic) su producción como un punto de apoyo para que pueda determinarse, al menos prima facie por parte de personas litigantes

e incluso representantes del ministerio público, respecto de la figura típica. Si se estudia con detalle, podrá superar erróneos conceptos respecto de la figura del Fraude de Simulación y entender el contenido típico.

En realidad, el desconocimiento sobre los alcances de la protección penal es más que palpable y evidente en una buena parte de la comunidad jurídica en relación con el tipo penal de Fraude de simulación. Es por eso que es frecuente que se “asuma” que un contrato realizado, por ejemplo, ante un notario público, es tal y es perfectamente válido, siempre que no exista un juicio sobre el bien, situación absolutamente equivocada e inexacta, por las razones que expongo con amplitud en el artículo. En este sentido, en la publicación se hace una diferencia entre las distintas modalidades de la simulación, precisamente para combatir erróneas como que la figura solamente puede tener lugar mediante la realización de “ventas” o “compraventas” y no mediante otras figuras que se encuentran contempladas en la legislación.

Hablar de un poco trascendencia es hablar (sic) es menospreciar y descalificar de manera abierta, el esfuerzo realizado en la consulta de distintas fuentes (que según he expresado, no son en lo absoluto, abundantes) para tratar de deslindar una figura que hasta ahora ha presentado dificultades en su análisis y aplicación, por parte de quienes fungen como operadores del sistema. El artículo de mi autoría pretende a partir de un estudio serio en relación con los elementos de tipo, determinar el alcance de la cobertura típica y favorecer una mayor comprensión de la figura.

D-Complejidad: A diferencia de lo que señala la calificación que fuera otorgada, la complejidad del tema tratado en el artículo es alta. La complejidad tiene que ver con el grado de dificultad de un artículo como tema de investigación.

Conforme se ha dicho, no hay muchas fuentes bibliográficas y las jurisprudencias resultan escasas, por lo que fue necesario ahondar de modo exhaustivo en el poco material existente para así procurar establecer afirmaciones serias y coherentes respecto de un tipo penal, que conforme se dice, no resulta de fácil comprensión, en parte por la redacción y en parte por el análisis ligero y superficial que se ha hecho, y que lamentablemente parece repetirse, en vista de la calificación que se impugna.

En el trabajo se señala que aunque es un tema de fraude, no corresponde realizar su asimilación con la estafa, tal y como muchas veces se escuchan voces al respecto y se brindan razones para establecer que no se trata de una modalidad de Estafa y que debe descartarse como una modalidad agravada, sino que se afirma con fundamento que se trata de un tipo penal independiente.

Incluso se realiza una comparación entre distintos supuestos, para deslindar el alcance del Fraude de Simulación, respecto de una de las modalidades de la administración fraudulenta. Y de la misma manera, se hace una comparación del contenido del Fraude de simulación, respecto de la falsedad ideológica, tipo con el que frecuentemente se le confunde, justamente en razón de la falla de estudios serios sobre el tipo penal del del 218 del código represivo. Hay que señalar que esta comparación no siempre resulta sencilla, evidentemente siempre que se realice de una manera seria, con miras a establecer claridad en la aplicación de las normas represivas.

También se ha indagado en las legislaciones de otros países como, España, Uruguay y el Salvador, para tratar de señalar paralelismos entre el fraude de simulación y otras figuras análogas. Esto conlleva (sic) que se tuviera que constatar la efectiva existencia de las figuras, señalándose que a diferencia de lo que ha sucedido en Costa Rica, la protección se circunscribe a la protección de derecho del acreedor crediticio, lo que en definitiva y desde la opinión que dejo (sic) plasmada, deja en descubierto una serie de supuestos importantes que o bien afectan o tienen la facultad de afectar el patrimonio.

Discrepo de la calificación en razón de que primeramente se trata de un tema que no ha sido abordado por la dogmática, ni tampoco tratado por la jurisprudencia nacional.

Me permito agregar a esto, que, de una manera absolutamente inexplicable, a pesar de que el país no hay mayor número de sitios en donde se puedan realizar publicaciones jurídicas, que además siguen un proceso de análisis y discusión respecto de su eventual publicación, es incomprensible e inaudito, que la sección de régimen académico menosprecie la labor académica seria mediante criterios que incluso no fundamenta de manera adecuada, sino que la forma de calificar queda al buen tino de quien

califica, o lo que es lo mismo, resulta ser escandalosamente arbitraria, en una comunidad universitaria que se dice apreciar la labor docente y apostar por la excelencia.

Solicito se conozca en alzada por la vía de la apelación que se está interponiendo, y se me otorgue un mínimo de dos puntos para la publicación supra indicada.

5. La Circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, de la Vicerrectoría de Docencia, y su posterior adición del 2 de marzo de 2021, explicita el deber del personal docente de colaborar de forma consultiva con la Comisión de Régimen Académico; así como la responsabilidad que tienen las personas que ocupan puestos de autoridad superior jerárquica en las unidades académicas, de cuidar que la persona docente designada para colaborar cumpla en tiempo y forma con la solicitud requerida por ese órgano.
6. El 20 de febrero de 2024, la Comisión de Régimen Académico, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 TER del *Reglamento de Régimen Académico y de Servicio Docente*, y de acuerdo con lo indicado en la circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, y su posterior adición del 2 de marzo de 2021, previo a elevar en alzada el recurso interpuesto, solicitó al Decanato de la Facultad de Derecho la designación de dos personas especialistas para evaluar con criterio experto la obra perteneciente a este caso. Las personas especialistas ofrecieron sus criterios el 18 y 22 de marzo de 2024, respectivamente, los cuales fueron remitidos a la entidad solicitante por la Facultad de Derecho en el oficio FD-837-2024.
7. La Comisión de Régimen Académico, en el oficio CRA-603-2025, del 22 de mayo de 2025, trasladó al Consejo Universitario el recurso de apelación interpuesto por el docente de la Facultad de Derecho en contra de la resolución de calificación n.º 2963-33-2023, del 1.º de noviembre de 2023 y en el Pase CU-51-2025, del 3 de junio de 2025, se le solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminar acerca del citado recurso.
8. En la reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el 23 de julio de 2025, se analizó el recurso de apelación, así como los criterios ofrecidos por las personas especialistas y se concluyó que estos se encuentran por encima o son superiores a los consignados por la Comisión de Régimen Académico de conformidad con las rúbricas general y específicas por áreas académicas para la evaluación de publicaciones y obras, en cuanto a los rubros de originalidad, relevancia, trascendencia y complejidad.
9. En la siguiente tabla se consigna lo que establecen las rúbricas general y específicas por áreas académicas para la evaluación de publicaciones y obras, los rubros de moderada originalidad, moderada relevancia, moderada trascendencia y poca complejidad, tal y como fue calificado el artículo por la Comisión de Régimen Académico, además, cómo se pronunciaron las personas especialistas n.º 1 y n.º 2 sobre esos rubros.

Comisión de Régimen Académico	Especialista n.º 1	Especialista n.º 2
Artículo: “El fraude de simulación: un tipo penal incomprensido”.	<i>Es original, no son abundantes las obras que traten este tema. Se trata de un tipo penal poco examinado en la doctrina nacional.</i>	<i>La obra posee originalidad ya que el tema no ha sido abordado, salvo un texto muy antiguo en el cual se trató el tema.</i>

<p>Originalidad (moderada): La obra aporta, sistematiza o produce de manera incipiente, conocimiento o técnicas novedosas para el área disciplinar; la obra incorpora referencias teóricas limitadas en cantidad, pero relevantes para el campo disciplinar; la obra presenta un nivel incipiente de vinculación transdisciplinar cuando aplique; la obra presenta un atisbo de abordaje alternativo a la dominante dentro del campo disciplinar.</p>		<p><i>En el artículo se utilizan fuentes extranjeras novedosas que aportan al estudio de la temática tratada.</i></p>
<p>Relevancia (moderada): La obra versa sobre un tema o problema conocido a nivel nacional o internacional, de interés disciplinar, social o institucional, según corresponda y la obra presenta aportes preliminares al campo de estudio o ejercicio profesional.</p>	<p><i>Es relevante, examina puntualmente el tipo penal y sus relaciones con otros tipos penales, por ejemplo, la falsedad ideológica.</i></p>	<p><i>Se trata de una obra relevante, tanto para los abogados como para los estudiantes de derecho, al plantear una serie de temas relevantes sobre un tipo penal en concreto, cuya aplicación en la práctica forense ha generado discusiones y dudas al respecto.</i></p>
<p>Trascendencia (moderada): Cuando los aportes, problematizaciones o resultados contenidos en la obra expresan de forma incipiente viabilidad para generar innovaciones o mejoras que van más allá del entorno disciplinar; muestra alguna utilidad o beneficio para el campo de estudio o para poblaciones vinculadas a su producción; se consigna en un medio de divulgación de limitado alcance; se desarrolla en un idioma que no corresponde con el de mayor difusión y alcance para el ámbito disciplinar en particular.</p>	<p><i>Es trascendente en la medida en que permite visualizar los contornos de un tipo penal que se aplica frecuentemente.</i></p>	<p><i>Como se indicó en el apartado anterior, representa una gran utilidad para los estudiantes y abogados costarricenses, al abordar una temática poco tratada y de arduo análisis. Podrá ser de interés de diferentes sectores.</i></p>

Complejidad (poca): La obra no resulta compleja, en tanto incorpora metodologías, estrategias de análisis de resultados y herramientas de producción desactualizadas; la obra en su diseño no aplica herramientas, acciones o mecanismos para asegurar el cumplimiento de criterios académicos mínimos, según disciplina; la obra no refleja coherencia entre su referencia teórica, metodología o herramientas de producción aplicadas; asimismo, la obra no demuestra superar el grado de complejidad de publicaciones similares en el ámbito disciplinar y transdisciplinar.	<i>La complejidad es media, Hace un análisis de lo que sucede en el caso de escrituras públicas (si son falsedad ideológica o fraude de simulación). Se trata de un tema interesante y complejo, sin embargo, solo ese es el tratado en el artículo.</i>	<i>Se trata de un aporte complejo que, toma en cuenta la literatura extranjera y lleva a cabo también, un análisis de la jurisprudencia nacional, analizando críticamente los temas tratados.</i>
---	--	---

10. De conformidad con lo indicado por las personas especialistas en los rubros de originalidad, relevancia, trascendencia y complejidad, se concluye que al efectuar la sumatoria de estos rubros, la persona especialista n.º 1 le otorga 1,75 puntos, debido a que el artículo posee alta originalidad (0,50 puntos), alta relevancia (0,50 puntos), alta trascendencia (0,50 puntos) y moderada complejidad (0,25 puntos); y la persona especialista n.º 2 le otorga 2,00 puntos en consideración de que el artículo evaluado posee alta originalidad (0,50 puntos), alta relevancia (0,50 puntos), alta trascendencia (0,50 puntos) y alta complejidad (0,50 puntos). Puntajes a los que se les debe adicionar o sumar el puntaje originalmente asignado (0,75 puntos).

Puntaje otorgado por la Comisión de Régimen Académico: 0,75 puntos

Puntaje de la persona especialista n.º 1 de acuerdo a sus criterios: 1,75 puntos

Puntaje de la persona especialista n.º 2 de acuerdo a sus criterios: 2,00 puntos

Total: 4,50 puntos

4,50 puntos divididos entre 3 (puntaje otorgado por la CRA y las dos personas especialistas)= 1,05 puntos.

11. En virtud de lo anterior, el puntaje originalmente otorgado al artículo denominado “El fraude de simulación: un tipo penal incomprensible” debe modificarse y consecuentemente pasar de 0,75 puntos a 1,05 puntos.

II. Recurso de apelación presentado por el Dr. Manuel Rojas Salas en contra de la resolución de calificación CRA 839-2025 (sic), Pase CU-52-2025, del 3 de junio de 2025. Artículo: “El *child grooming* como conducta típica en el Código Penal: su regulación legislativa en Costa Rica”.

Por lo tanto, el Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. El 3 de octubre de 2023, el Dr. Manuel Rojas Salas, docente de la Facultad de Derecho, sometió ante la Comisión de Régimen Académico para su evaluación el artículo “El *child grooming*

como conducta típica en el Código Penal: su regulación legislativa en Costa Rica” (solicitud de calificación n.º 15927, del 4 de octubre de 2023).

2. En la resolución de calificación n.º 2972-60-2024, del 20 de marzo de 2024, la Comisión de Régimen Académico le otorgó 1,25 de puntaje al considerar que posee moderada originalidad, moderada relevancia, moderada trascendencia y alta complejidad.
3. No conforme con el resultado de la evaluación, el 22 de abril de 2024, el docente Rojas Salas presentó de manera directa un recurso de apelación en contra de la resolución de calificación n.º 2972-60-2024, del 20 de abril de 2024.
4. La integralidad del recurso de apelación es la que de seguido se expone:

Las razones de mi inconformidad, las paso a desarrollar, señalando nuevamente y de antemano que sorprende sobremanera que para la Comisión de Régimen Académico, pareciera que no hay trabajos de investigación que sean susceptibles de alcanzar calificaciones destacadas, a pesar del esfuerzo de la persona investigadora y del hecho público y notorio, de que en el Área del Derecho y particularmente del Derecho Penal, las oportunidades para publicar y los medios son extremadamente escasos. Destaco este aspecto en vista de que cualquier artículo publicado en la Revista Digital de Ciencias Penales, o de la Maestría en Ciencias Penales, ha sido seleccionado cuidadosamente, por lo que no se trata de trabajos que bajo ningún concepto pueden ser considerados repetitivos ni trillados, como parece que son considerados por la Comisión:

A. Originalidad: A diferencia de la calificación otorgada en dicho rubro, que se indica que es “Moderada”, la publicación de mi autoría abordó un tema del que si bien es cierto es una figura que ha surgido al amparo del desarrollo de las denominadas tecnologías información y comunicación, no se ha hecho un estudio relativo a la forma en que el legislador costarricense ha abordado el fenómeno del Child Grooming o ciber acoso por parte de personas mayores a personas menores de edad a través de medios tecnológicos.

En ese sentido, el legislador costarricense se ha limitado a criminalizar el comportamiento, sin tomar en cuenta la existencia de posibles múltiples protecciones a través de distintas tipificaciones, lo que origina una acentuada confusión respecto del sentido mismo de la protección.

Al hablarse de “originalidad” evidentemente y de conformidad con los términos del Diccionario de la Real Academia Española, implica o conlleva novedad e innovación, lo que puede observarse del mismo contenido del artículo (sic) cuya calificación me encuentro impugnando. A diferencia de la calificación, la originalidad es alta, porque precisamente se analiza primeramente el fenómeno a nivel de la Dogmática, siempre teniéndose como parámetro o límite los principios legitimadores del Derecho Penal, que lamentablemente suelen irrespetarse y pasarse por alto cuando se trata de realizar la criminalización de comportamientos, acentuándose una deficiente técnica legislativa, respecto de la que generalmente, no se formula mayor crítica, y en donde la academia debe tener un papel fundamental y de vanguardia.

Incluso, la guía que tiene el Centro de Evaluación Académica y que es a lo que el docente que es evaluado, trata de ajustarse, indica como este rubro, lo siguiente:

“El trabajo demuestra la utilización de fuentes novedosas, de nuevos indicadores o nuevos productos, el uso de nuevas metodologías o técnicas tecnológicas, mediciones originales o aporta grandes novedades científicas o tecnológicas.

De modo tal que la calificación es no solo desacertada, sino que además revela una lectura muy a la ligera y con escasa o nula atención a aspectos relevantes,

b) relevancia: A diferencia de lo que se indicó en la calificación, la publicación aludida, tiene una alta relevancia, en razón de que a lo largo del contenido del artículo, se pone de manifiesto que la actuación legislativa en el terreno del Child Grooming ha sido absolutamente inadecuada, sin perderse de vista que ha existido un incremento desafortunado y obviamente exagerado respecto de los tipos penales

que brindan protección a las personas menores de edad respecto de comportamientos que se estiman lesivos, ejecutados por personas mayores de edad.

Primeramente se hace un abordaje del bien jurídico tutelado, aspecto que viene a resultar esencial cuando se habla de la tipificación de nuevos comportamientos. En ese proceso inflacionario del Derecho Penal, no ha existido la más mínima sistematicidad por parte del poder legislativo en las reformas que se han promulgado a lo largo de los años y esto es un punto que claramente se pone de manifiesto.

Se realiza un análisis del tipo penal que curiosamente fue colocado “en el medio” de dos figuras típicas preexistentes bajo el formato “bis”, cuando la realidad es que el comportamiento del child grooming prima facie, no tiene mayor relación con los tipos penales de Corrupción de Menores, que fue el lugar que el legislador costarricense definió para ubicar la figura.

De la misma forma se critica la redacción utilizada, en donde el legislador optó, en claro cumplimiento de su función, por abrir el tipo penal, generándose con ello inseguridad desde el punto de vista jurídico, habida cuenta de que existen comportamientos repetidos, justamente en razón de esa falta de sistematización que se pone en evidencia, ya que lo único que viene a determinarse de alguna manera, es que la protección, que evidentemente resultaba necesaria en el momento actual, no se formuló de una manera que conllevara una redacción atinada ni coherente en relación con otras figuras típicas preexistentes.

La relevancia en consecuencia es alta, a diferencia de lo que se indica en la calificación que me encuentro impugnando en el presente recurso.

c)Trascendencia: A diferencia de lo que se indica en la calificación que me encuentro impugnando, la trascendencia de la publicación es muy alta, ya que desde la perspectiva de quien suscribe la impugnación, se pone de manifiesto que la técnica legislativa empleada para efectos de la tipificación del child grooming, fue absolutamente desafortunada, puesto que en realidad se tipificaron comportamientos distintos entre sí.

En el artículo de mi autoría se hace referencia a que el legislador, dejando de lado los principios legitimadores del Derecho Penal como ultima ratio, intervención mínima y el carácter fragmentario, al extremo que se criminaliza el procurar establecer una conversación, sin que ella se haya producido, originando un tipo penal de muy dudosa y cuestionable constitucionalidad. Incluso se destaca en la segunda modalidad comisiva, se tipifica “el peligro de un peligro” lo que conlleva un inadecuado adelantamiento de la protección penal, hasta límites no permitidos.

Se destaca igualmente que se pretende sancionar la simple finalidad o tendencia ulterior, sin que se vea materializada en actos concretos, lo que hace que el Derecho Penal sea utilizado para incursionar en terrenos absolutamente ajenos y reservados a la autonomía de la voluntad.

Hablar de una trascendencia moderada es menospreciar y descalificar de manera abierta, el esfuerzo realizado en la consulta de distintas fuentes para demostrar la falta de visión de quienes han fungido como representantes legislativos. Se pretende entonces reflexionar respecto de un tema, cuya inclusión expresa en la normativa, vendría a brindar una mayor armonía en el campo normativo, situación absolutamente saludable. Por otra parte, resulta absolutamente incomprensible que se hable de una trascendencia moderada y de una complejidad ALTA, tal y conforme se ha indicado en la calificación, puesto que se trata de calificativos van uno a la par del otro.

Solicito se conozca en alzada por la vía de la apelación que se está interponiendo, y se me otorgue un mínimo de dos puntos para la publicación supra indicada.

5. La circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, y su posterior adición del 2 de marzo de 2021, explicita el deber del personal docente de colaborar de forma consultiva con la Comisión de Régimen Académico; así como la responsabilidad que tienen las personas que ocupan puestos de autoridad superior jerárquica en las unidades académicas, de cuidar que la persona docente designada para colaborar cumpla en tiempo y forma con la solicitud requerida por ese órgano.
6. El 24 de junio de 2024, la Comisión de Régimen Académico, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 TER del *Reglamento de Régimen Académico y de Servicio Docente*, y de acuerdo con lo indicado en la circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, y su posterior adición del 2 de

marzo de 2021, previo a elevar en alzada el recurso interpuesto, solicitó al Decanato de la Facultad de Derecho la designación de dos personas especialistas para evaluar con criterio experto la obra perteneciente a este caso. Las personas especialistas ofrecieron sus criterios el 16 de julio de 2024 y el 8 de octubre de 2024, respectivamente, los cuales fueron remitidos a la entidad solicitante en los oficios FD-1511-2024 y FD-2310-2024, del 18 de julio de 2024 y 6 de noviembre de 2024, por la Facultad de Derecho.

7. La Comisión de Régimen Académico, en el oficio CRA-839-2025, del 22 de mayo de 2025, trasladó al Consejo Universitario el recurso de apelación interpuesto por el docente de la Facultad de Derecho en contra de la resolución de calificación n.º 2972-60-2024, del 20 de marzo de 2024 y en el Pase CU-52-2025, del 3 de junio de 2025, se le solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminar acerca del citado recurso.
8. En la reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el 23 de julio de 2025, se analizó el recurso de apelación, así como los criterios ofrecidos por las personas especialistas y se concluyó que estos últimos se encuentran por encima o son muy superiores a los empleados por la Comisión de Régimen Académico en la evaluación del artículo, esto de conformidad con las rúbricas general y específicas por áreas académicas para la evaluación de publicaciones y obras, en cuanto a los rubros de originalidad, relevancia, trascendencia y complejidad.
9. En la siguiente tabla se consigna lo que establecen las rúbricas general y específicas por áreas académicas para la evaluación de publicaciones y obras, en los rubros de moderada originalidad, moderada relevancia, moderada trascendencia y poca complejidad, tal y como fue calificado el artículo por la Comisión de Régimen Académico, además, cómo se pronunciaron las personas especialistas n.º 1 y n.º 2 sobre esos rubros.

Comisión de Régimen Académico	Especialista n.º 1	Especialista n.º 2
<p>Artículo: “El <i>child grooming</i> como conducta típica en el Código Penal: su regulación legislativa en Costa Rica”.</p> <p>Originalidad (moderada): La obra aporta, sistematiza o produce de manera incipiente, conocimiento o técnicas novedosas para el área disciplinar; la obra incorpora referencias teóricas limitadas en cantidad, pero relevantes para el campo disciplinar; la obra presenta un nivel incipiente de vinculación transdisciplinar cuando aplique; la obra presenta un atisbo de abordaje alternativo a la dominante dentro del campo disciplinar.</p>	<p><i>Es original. No son abundantes las obras que traten este tipo penal (aunque las hay).</i></p>	<p><i>El trabajo valorado es sumamente original, debido a que la temática abordada desafía las convencionales en el área del Derecho Penal. El autor ofrece no solo una combinación de metodológicas (sic) y análisis de datos variados, sino que lo impregna con un alto grado de conocimiento de la materia que genera una mayor valoración. El adentrarse de igual forma a conocer las conductas que están sucediendo debido a las novedades tecnológicas del avance del tiempo y los cambios de interacciones sociales, enriquece el trabajo en cuanto a su originalidad. Se trata de una contribución valiosa y refrescante.</i></p>

<p>Relevancia (moderada): La obra versa sobre un tema o problema conocido a nivel nacional o internacional, de interés disciplinar, social o institucional, según corresponda y la obra presenta aportes preliminares al campo de estudio o ejercicio profesional.</p>	<p><i>Es relevante. Hace un análisis puntual de los elementos típicos contenidos en la norma y su distinción con el delito de corrupción de menores de edad.</i></p>	<p><i>El artículo es de relevancia para el avance del conocimiento en el área. El abordaje de la relación entre el Derecho Penal, la protección de menores, la interacción mediante redes sociales, es un tema crítico y con un desarrollo exponencial. Al ofrecer una perspectiva clara y fundamentada, bajo el análisis de un experto, este trabajo no solo facilita la comprensión de un fenómeno creciente en la sociedad, sino que también establece un marco de referencia que puede ser utilizado en futuras investigaciones y publicaciones sobre la materia. Su enfoque y relevancia social lo posicionan como un recurso indispensable para futuras investigaciones en relación a protección de menores y Derecho Penal.</i></p>
<p>Trascendencia (moderada): Cuando los aportes, problematizaciones o resultados contenidos en la obra expresan de forma incipiente viabilidad para generar innovaciones o mejoras que van más allá del entorno disciplinar; muestra alguna utilidad o beneficio para el campo de estudio o para poblaciones vinculadas a su producción; se consigna en un medio de divulgación de limitado alcance; se desarrolla en un idioma que no corresponde con el de mayor difusión y alcance para el ámbito disciplinar en particular.</p>	<p><i>Es trascendente. Es útil para estudiosos y operadores jurídicos que apliquen el tipo penal.</i></p>	<p><i>El artículo es trascendente más allá de un análisis académico y jurídico, pues ofrece a la comunidad. El grooming es un tema que afecta cotidianamente a los menores de edad, y que está presente y pasa mayormente desapercibido por la forma de operar y la facilitación que permite las redes sociales y plataformas tecnológicas. Por lo tanto, contribuye a la sensibilización sobre la protección de los menores frente a conductas delictivas. A nivel académico, ofrece insumos valiosos para la formación de profesionales en Derecho, y su relevancia se extiende a instituciones</i></p>

		<p>gubernamentales y organizaciones dedicadas a la protección infantil, facilitando la toma de decisiones informadas. Además, este trabajo puede servir como referencia en discusiones internacionales sobre la regulación de la conducta de grooming, aportando a un entendimiento global y a la creación de políticas efectivas en la materia. En definitiva, su utilización por diferentes sectores potencia el ejercicio profesional, fortaleciendo la protección de la infancia tanto a nivel local como nacional e internacional.</p>
<p>Complejidad (alta): La obra presenta un nivel de complejidad moderado, en tanto incorpora metodologías complejas (por ejemplo: diversa, experimental, enfoque crítico o interdisciplinaria) estrategias de análisis de resultados o refleja herramientas complejas de producción, la obra en su diseño y desarrollo aplica herramientas, acciones o mecanismos para asegurar el cumplimiento de criterios académicos, según disciplina, la obra presenta coherencia intermedia entre su referencia teórica y la metodología aplicada y la obra alcanza un grado de complejidad superior de otras publicaciones del ámbito disciplinar o transdisciplinar.</p>	<p><i>La complejidad es media. El análisis es puntual.</i></p>	<p>El artículo parte de la utilización de una gran variedad de fuentes tanto legislativas como doctrinarias, que enriquecen el análisis y permiten una comprensión integral del fenómeno del grooming. Además, el autor utiliza metodologías diversas, integrando enfoques cualitativos que demuestra (sic) un compromiso con la rigurosidad académica. El tema requiere conocimientos en derecho, psicología y sociología para abordar adecuadamente la problemática.</p> <p>Asimismo, se implementan estrategias de validación de datos y control de calidad que garantizan la fiabilidad de los resultados presentados, lo que eleva aún más el estándar de la obra y su contribución al campo del Derecho Penal y la protección de la infancia.</p>

10. De conformidad con lo indicado por las personas especialistas en los rubros de originalidad, relevancia, trascendencia y complejidad, se concluye que al efectuar la sumatoria de estos rubros, la persona especialista n.º 1 le otorga 1,75 puntos, ya que el artículo posee alta originalidad (0,50 puntos), alta relevancia (0,50 puntos), alta trascendencia (0,50 puntos) y moderada complejidad (0,25 puntos) y la persona especialista n.º 2 le otorga 2,25 puntos en consideración de que el artículo evaluado posee muy alta originalidad (0,75 puntos), alta relevancia (0,50 puntos), alta trascendencia (0,50 puntos) y alta complejidad (0,50 puntos). Puntajes a los que se les debe adicionar o sumar el puntaje originalmente asignado (1,25 puntos).

Puntaje otorgado por la Comisión de Régimen Académico: 1,25 puntos

Puntaje de la persona especialista n.º 1 de acuerdo a sus criterios: 1,75 puntos

Puntaje de la persona especialista n.º 2 de acuerdo a sus criterios: 2,25 puntos

Total: 5,25 puntos

5,25 puntos divididos entre 3 (puntaje otorgado por la CRA y las dos personas especialistas)= 1,75 puntos

11. En virtud de lo anterior, el puntaje originalmente otorgado al artículo denominado “El *child grooming* como conducta típica en el Código Penal: su regulación legislativa en Costa Rica” debe modificarse y consecuentemente pasar de 1,25 puntos a 1,75 puntos.

III. Recurso de apelación presentado por el Dr. Manuel Rojas Salas en contra de la resolución de calificación CRA 996-2025 (sic), Pase CU-53-2025, del 3 de junio de 2025. Artículo: “La denominada edad del consentimiento: un terreno legislativo por cultivar”.

Por lo tanto, el Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. El 16 de octubre de 2023, el Dr. Manuel Rojas Salas, docente de la Facultad de Derecho, sometió ante la Comisión de Régimen Académico para su evaluación el artículo “La denominada edad del consentimiento: un terreno legislativo por cultivar” (solicitud n.º 15929, del 17 de octubre de 2023).
2. En la resolución de calificación n.º 2972-61-2024, del 20 de marzo de 2024, la Comisión de Régimen Académico le otorgó 1,00 puntos al considerar que posee moderada originalidad, moderada relevancia, moderada trascendencia y moderada complejidad.
3. No conforme con el resultado de la evaluación, el 24 de abril de 2024, el docente Rojas Salas presentó de manera directa un recurso de apelación en contra de la resolución de calificación n.º 2972-61-2024, del 20 de abril de 2024. La integralidad del citado recurso al expediente del caso.
4. La literalidad del recurso de apelación es la que a continuación se expone:

Las razones de mi inconformidad, las paso a desarrollar, señalando de antemano que sorprende sobremedida que para la Comisión de Régimen Académico, pareciera que no hay trabajos de investigación que sean susceptibles de alcanzar calificaciones destacadas, a pesar del esfuerzo de la persona investigadora y del hecho público y notorio, de que en el Área del Derecho y particularmente del Derecho Penal, las oportunidades para publicar y los medios son extremadamente escasos. Destaco este aspecto en vista de que cualquier artículo publicado en la Revista Digital de Ciencias Penales, o de la Maestría en Ciencias Penales, ha sido seleccionado cuidadosamente, por lo que no se trata de trabajos que bajo ningún concepto pueden ser considerados repetitivos ni trillados, como parece que son considerados por la Comisión:

A. Originalidad: A diferencia de la calificación otorgada en dicho rubro, que se indica que es “moderada”, la publicación de mi autoría aborda un tema del que no hay mayores estudios, como lo es el tema de la edad del consentimiento en personas menores de edad. Contrariamente a lo que desde una perspectiva de sensatez y respeto a los principios básicos del ordenamiento jurídico podría esperarse, los Estados y particularmente el Costarricense, se han decantado por realizar modificaciones a los distintos tipos penales que incluyen hechos de contenido sexual que incluyen hechos de tipo sexual que afectan a personas menores de edad. Las modificaciones se han realizado a partir de una tendencia de excesiva sobreprotección en donde prácticamente se objetiviza a la persona menor de edad, dejándose de lado lo que se conoce con el reconocimiento progresivo de los Derechos, en cuanto al relativo (sic) al ejercicio de su sexualidad. Más bien, el tema de los derechos sexuales y su ejercicio por parte de las personas menores de edad es un tema que se ha visto absolutamente invisibilizado.

Al hablarse de “originalidad” evidentemente y de conformidad con los términos del Diccionario de la Real Academia Española, implica o conlleva novedad e innovación, lo que puede observarse del mismo contenido del artículo (sic) cuya calificación me encuentro impugnando. A diferencia de la calificación, la originalidad es alta, porque precisamente a ningún representante legislativo se le ha ocurrido la idea de establecer, como tiene lugar en legislaciones más avanzadas y para romper con el inflacionismo penal, el establecer una edad del consentimiento como límite para el cese de la protección penal.

Incluso, la guía que tiene el Centro de Evaluación Académica y que es a lo que el docente que es evaluado trata de ajustarse, indica como este rubro, lo siguiente: “El trabajo demuestra la utilización de fuentes novedosas, de nuevos indicadores o nuevos productos, el uso de nuevas de nuevas metodologías o técnicas, mediciones originales o aporta grandes novedades científicas o tecnológicas”

De modo tal que la calificación es no solo desacertada, sino que además revela una lectura muy a la ligera y con escasa o nula atención a aspectos relevantes.

b) Relevancia: A diferencia de lo que se indicó en la calificación, la publicación aludida, tiene una alta relevancia, en razón de que se pone de manifiesto que ha existido un incremento desafortunado y obviamente exagerado respecto de los tipos penales que tutelan la autodeterminación sexual y la indemnidad sexuales (sic). En ese proceso inflacionario del Derecho penal, no ha existido la más mínima sistematicidad por parte del Poder Legislativo en las reformas que se han promulgado a lo largo de los años. De ahí que conforme se muestra en el artículo, existen graves inconsistencias en las conductas tipificadas y en el establecimiento de rangos etarios. La relevancia, que para el calificador es moderada, no es tal puesto que el artículo (sic) brinda un panorama de la necesidad imperiosa de regular, en atención a compromisos asumidos por el Estado Costarricense en Convenciones, de establecer un límite a la acción proteccionista estatal desde el ámbito del Ius Puniendi.

Con el artículo de mi autoría, se pretende visibilizar un tema en el que la sociedad y el Poder Legislativo, han optado por mirar hacia otro lado, precisamente porque se pone de manifiesto que aún se considera a las personas menores de edad como seres asexuados, o bien como personas que no pueden adoptar ningún tipo de decisión en materia de su sexualidad, cuando se trata de un aspecto estrechamente vinculado con el concepto de dignidad humana, necesario para el desarrollo de cualquier persona en el contexto de una sociedad.

c) Trascendencia: A diferencia de lo que se indica en la calificación que me encuentro impugnando, la trascendencia de la publicación es muy alta, ya que brinda insumos importantes que permiten a cualquier estudioso del Derecho Penal y de las Ciencias Jurídicas tener un panorama más amplio del exceso de protección existente e igualmente establecer un punto de reflexión respecto de la importancia de establecer desde un punto de vista normativo, una edad del consentimiento, al menos a lo tocante en determinados tipos penales, con la finalidad de acabar con el desorden y caos existente, al que nos ha llevado la multiplicidad de reformas legislativas, que persisten en mantener groseros yerros de redacción y contenido, y solamente se preocupan por incrementar las sanciones existentes, haciéndose eco de discursos estrictamente de carácter populista, en donde, con una visión retorcida, se presenta al Derecho Penal como la forma de evitar los males presentes en la sociedad costarricense.

Precisamente el artículo (sic) indicado al abordar un tema que debió ser tratado y plasmado en la legislación penal de manera prioritaria, viene a resultar con alta trascendencia, porque a diferencia

de lo que suele suceder en otras ramas del Derecho, en el campo del Derecho Penal, la persona investigadora, debe mantener una actitud crítica, máxime en casos en donde se señala la existencia de responsabilidad penal en personas menores de edad (a quienes puede aplicárseles la Ley Penal Juvenil desde el momento en que cumplen 12 años), pero de una manera absolutamente contradictoria y que no es más que una actitud en donde se cosifica a los y las menores de edad, no se les permite la más mínima decisión en el terreno de la sexualidad.

De ahí que el poner en evidencia esa actitud abiertamente mojigata y conservadora que pretender desconocer una realidad que es más que palpable a partir de un vistazo incluso en temas de redes sociales, hace que el tema de la edad del consentimiento y su establecimiento expreso, sea un aspecto de alta trascendencia.

Hablar de un poco trascendencia es menospreciar y descalificar de manera abierta, el esfuerzo realizado en la consulta de distintas fuentes para demostrar la falta de visión de quienes han fungido como representantes legislativos. Se pretende entonces reflexionar respecto de un tema, cuya inclusión expresa en la normativa, vendría a brindar una mayor armonía en el campo normativo, situación absolutamente saludable.

d-Complejidad: A diferencia de lo que señala la calificación que fuera otorgada, la complejidad del tema tratado en el artículo es alta. La complejidad tiene que ver con el grado de dificultad de un artículo como tema de investigación.

Debe destacarse que por un tema de Política Criminal, cada ordenamiento jurídico es el que procede a determinar la edad del consentimiento en materia sexual.

Ciertamente se trata de un tema polémico, pero que es imprescindible que sea abordado por el Estado Costarricense, de una manera responsable. No se trata entonces pura y simplemente de señalar un número de años en una reforma legislativa (tal y conforme se ha hecho al momento de realizar las reformas que contienen incrementos de las sanciones establecidas), sino que se trata de un tema que tiene que ser abordado con muchísima seriedad, porque con ello se brinda un adecuado reconocimiento al derecho que poseen (aunque parezca desconocerse) las personas menores de edad para determinarse y conducirse en el ámbito de su sexualidad.

El establecimiento de una edad, que en otros ordenamientos se ha determinado en un límite mayor al que tenían originalmente (lo que revela que su determinación es imprescindible en un ordenamiento jurídico penal que se precie de armónico) y ha observado una tendencia alcista, da cuenta de que debe procurarse una sistematización apropiada, que conlleve estudios actualizados en relación con el comportamiento y actitudes desarrolladas por las personas jóvenes menores de edad, para no mostrarnos ignorantes de lo que es una realidad.

De la misma manera, se aborda el tema de la denominada cláusula Romeo-Julietta que es una especie de “excepción” al límite establecido en la edad del consentimiento, y que resulta aplicable a supuestos calificados, pero que bien pueden presentarse en cualquier momento en nuestra sociedad.

De ahí que la complejidad o dificultad del tema tratado es alta y no moderada, conforme se señaló en la calificación.

5. La Circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, de la Vicerrectoría de Docencia, y su posterior adición del 2 de marzo de 2021, explicita el deber del personal docente de colaborar de forma consultiva con la Comisión de Régimen Académico; así como la responsabilidad que tienen las personas que ocupan puestos de autoridad superior jerárquica en las unidades académicas, de cuidar que la persona docente designada para colaborar cumpla en tiempo y forma, con la solicitud requerida por ese Órgano.
6. El 24 de junio de 2024, la Comisión de Régimen Académico, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 TER del *Reglamento de Régimen Académico y de Servicio Docente*, y de acuerdo con lo indicado en la circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, y su posterior adición del 2 de marzo de 2021, previo a elevar en alzada el recurso interpuesto, solicitó al Decanato de la Facultad

de Derecho la designación de dos personas especialistas para evaluar con criterio experto la obra perteneciente a este caso. Las personas especialistas ofrecieron sus criterios el 16 de julio de 2024 y el 8 de octubre de 2024, respectivamente, los cuales fueron remitidos por la Facultad de Derecho en los oficios FD-1511-2024 y FD-2310-2024, del 18 de julio de 2024 y 6 de noviembre de 2024, respectivamente, a la entidad solicitante.

7. En el oficio CRA-996-2025, del 22 de mayo de 2025, la Comisión de Régimen Académico elevó al Consejo Universitario el recurso de apelación interpuesto por el docente de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel Rojas Salas.
8. En la siguiente tabla se consigna lo que establecen las rúbricas general y específicas por áreas académicas para la evaluación de publicaciones y obras, en los rubros de moderada originalidad, moderada relevancia, moderada trascendencia y poca complejidad, tal y como fue calificado el artículo por la Comisión de Régimen Académico, además, cómo se pronunciaron las personas especialistas n.º 1 y n.º 2 sobre esos rubros.

Comisión de Régimen Académico	Especialista n.º 1	Especialista n.º 2
<p>Artículo: “La denominada edad del consentimiento: un terreno legislativo por cultivar”</p> <p>Originalidad (moderada): La obra aporta, sistematiza o produce de manera incipiente, conocimiento o técnicas novedosas para el área disciplinar; la obra incorpora referencias teóricas limitadas en cantidad, pero relevantes para el campo disciplinar; la obra presenta un nivel incipiente de vinculación transdisciplinar cuando aplique; la obra presenta un atisbo de abordaje alternativo a la dominante dentro del campo disciplinar.</p>	<p><i>Es original. No son abundantes las obras que traten el tema con carácter crítico.</i></p>	<p><i>El artículo (sic) puede considerarse original debido a varios indicadores. En primer lugar, aborda la temática de la edad del consentimiento desde una perspectiva que no ha sido ampliamente tratada en la literatura existente, centrándose en la autodeterminación sexual de los menores en el contexto de las reformas penales contemporáneas. Además, utiliza fuentes recientes y relevantes que aportan un enfoque actualizado al análisis..</i></p>
<p>Relevancia (moderada): La obra versa sobre un tema o problema conocido a nivel nacional o internacional, de interés disciplinar, social o institucional, según corresponda y la obra presenta aportes preliminares al campo de estudio o ejercicio profesional.</p>	<p><i>Es relevante. Da argumentos sólidos acerca de los problemas asociados con la edad para consentir contemplada en distintos tipos penales.</i></p>	<p><i>La obra analizada es altamente relevante en el campo del Derecho Penal y los derechos de los menores, ya que aborda un tema crítico que impacta directamente en la vida de jóvenes y en la configuración de la legislación penal.</i></p>

		<p><i>Su utilidad para el avance del conocimiento en esta área radica en su enfoque integral, que no solo examina la legislación sobre la edad del consentimiento, sino que también contextualiza esta cuestión dentro del marco del populismo punitivo, permitiendo una comprensión más profunda de las dinámicas sociales y políticas que influyen en la legislación penal.</i></p> <p><i>Al centrarse en la autodeterminación sexual de los menores, se engloba también los derechos humanos de una población vulnerabilizada, lo que puede fomentar un abordaje sobre la necesidad de un cambio del paradigma en las políticas de protección infantil y juvenil. El artículo (sic) tiene el potencial de convertirse en un referente para futuras publicaciones en la materia, guiando a otros investigadores a abordar la cuestión desde perspectivas similares o complementarias. En conjunto, este trabajo no solo contribuye al entendimiento actual del tema, sino que también sienta las bases para el desarrollo de nuevas líneas de investigación y discusión.</i></p>
<p>Trascendencia (moderada): Cuando los aportes, problematizaciones o resultados contenidos en la obra expresan de forma incipiente viabilidad para generar innovaciones o mejoras que van más allá del entorno disciplinar; muestra alguna utilidad o beneficio</p>	<p><i>Es trascendente. El estudio de herramientas para que se efectúen reformas legales importantes.</i></p>	<p><i>El artículo es trascendente más allá de un análisis académico y jurídico. El artículo es trascendente ya que realizar un análisis crítico sobre la edad del consentimiento y la autodeterminación sexual de los menores puede generar un impacto social significativo al fomentar un debate informado sobre la protección de los derechos de los jóvenes.</i></p>

para el campo de estudio o para poblaciones vinculadas a su producción; se consigna en un medio de divulgación de limitado alcance; se desarrolla en un idioma que no corresponde con el de mayor difusión y alcance para el ámbito disciplinar en particular.		<p><i>Esto es esencial en un contexto donde las políticas punitivas pueden, a menudo, pasar por alto las necesidades y derechos de esta población.</i></p> <p><i>Desde un punto de vista académico, el artículo proporciona insumos valiosos que pueden ser utilizados en la investigación y la formación. De igual forma es un trabajo con la capacidad de influir en la forma de decisiones al ofrecer un análisis que resalta la importancia de considerar los derechos humanos en la legislación. Legisladores, jueces y organizaciones pueden beneficiarse de sus hallazgos para formular políticas más efectivas en la realidad de los menores. El artículo no solo enriquece el conocimiento en el ámbito local, sino que también tiene el potencial de influir en prácticas y políticas a nivel mundial. Su trascendencia radica en su capacidad para informar, inspirar y guiar a diferentes sectores hacia un enfoque más respetuoso en la protección de los derechos de los menores.</i></p>
Complejidad (Moderada): La obra presenta un nivel de complejidad bajo, en tanto incorpora metodologías, estrategias de análisis de resultados o refleja herramientas de producción usuales, la obra en su diseño aplica herramientas, acciones o mecanismos para asegurar el cumplimiento de criterios académicos mínimos, según	<i>La complejidad es media. El análisis es puntual y se circunscribe a un aspecto específico.</i>	<i>El autor utiliza una variedad de fuentes que incluyen literatura académica reciente, permitiendo un enfoque actualizado del tema. La diversidad de fuentes también garantiza que el análisis se encuentra debidamente fundamentado y refleje múltiples perspectivas. Se evidencia la utilización y análisis de datos cualitativos</i>

disciplina, la obra presenta coherencia elemental entre su referencia teórica y la metodología aplicada y la obra alcanza un grado de complejidad similar al de otras publicaciones en el ámbito disciplinar y transdisciplinar.		<p>y cuantitativos para formular argumentos, permitiendo diferentes dimensiones del problema.</p> <p><i>Estas características hacen del artículo (sic) una obra compleja que no solo aborda un tema crítico, sino que también lo hace de manera rigurosa y multifacética, enriqueciendo el discurso académico y profesional sobre la edad del consentimiento y los derechos de los menores.</i></p>
--	--	---

9. En la reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el 23 de julio de 2025, se analizó el recurso de apelación, así como los criterios ofrecidos por las personas especialistas y se concluyó que estos últimos se encuentran por encima o son muy superiores a los consignados por la Comisión de Régimen Académico en la evaluación del artículo, esto de conformidad con las rúbricas general y específicas por áreas académicas para la evaluación de publicaciones y obras, en cuanto a los rubros de originalidad, relevancia, trascendencia y complejidad.

10. De conformidad con lo indicado por las personas especialistas en los rubros de originalidad, relevancia, trascendencia y complejidad, se concluye que al efectuar la sumatoria de estos rubros, la persona especialista n.º 1, le otorga 1,75 puntos, debido a que el artículo posee alta originalidad (0,50 puntos), alta relevancia (0,50 puntos), alta trascendencia (0,50 puntos) y moderada complejidad (0,25 puntos); y la persona especialista n.º 2 le otorga 2,25 puntos en consideración de que el artículo evaluado posee alta originalidad (0,50 puntos), muy alta relevancia (0,75 puntos), alta trascendencia (0,50 puntos) y alta complejidad (0,50 puntos). Puntajes a los que se les debe adicionar o sumar el puntaje originalmente asignado (1,00 puntos).

Puntaje otorgado por la Comisión de Régimen Académico: 1,00 puntos

Puntaje de la persona especialista n.º 1 de acuerdo a sus criterios: 1,75 puntos

Puntaje de la persona especialista n.º 2 de acuerdo a sus criterios: 2,25 puntos

Total: 5,00 puntos

5,00 puntos divididos entre 3 (puntaje otorgado por la CRA y las dos personas especialistas)= 1,67 puntos.

11. En virtud de lo anterior, el puntaje originalmente otorgado al artículo denominado “La denominada edad del consentimiento: un terreno legislativo por cultivar” debe modificarse y, consecuentemente, pasar de 1,00 puntos a 1,67 puntos.

IV. Recurso de apelación presentado por el Dr. Manuel Rojas Salas en contra de la resolución de calificación CRA 997-2025 (sic), Pase CU-54-2025, del 3 de junio de 2025. Artículo: “Los delitos del odio: ¿necesitan de regulación expresa en la legislación represiva costarricense?”.

Por lo tanto, el Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. El 14 de febrero de 2024, el docente de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel Rojas Salas, con el propósito de actualizar el puntaje en Régimen Académico presentó a evaluación el artículo “Los delitos de odio: ¿necesitan de regulación expresa en la legislación represiva costarricense?” (solicitud n.º 16367, del 14 de febrero de 2024).
2. En la resolución de calificación n.º 2984-61-2024, del 14 de agosto de 2024, la Comisión de Régimen Académico le otorgó al artículo “Los delitos de odio: ¿necesitan de regulación expresa en la legislación represiva costarricense?” 1,25 puntos, al considerar que posee moderada originalidad, moderada relevancia, alta trascendencia y moderada complejidad.
3. No conforme con el resultado de la evaluación, el 25 de septiembre de 2024, el docente Rojas Salas presentó de manera directa un recurso de apelación en contra de la resolución de calificación n.º 2984-61-2024, del 14 de agosto de 2024.
4. El Dr. Manuel Rojas Salas, en su recurso de apelación, expuso lo siguiente:

Las razones de mi inconformidad, las paso a desarrollar, señalando de antemano que sigo sorprendiéndome en cuanto a que la Comisión se haya tomado casi nueve meses para realizar el estudio de la publicación y se otorgue un punto veinticinco como valoración total, puesto que parece que para la Comisión de Régimen Académico, no hay trabajos de investigación que sean susceptibles de alcanzar calificaciones destacadas, a pesar del esfuerzo de la persona investigadora y del hecho público y notorio, de que en el Área del Derecho y particularmente del Derecho Penal, las oportunidades para publicar y los medios son extremadamente escasos.

A. Originalidad: A diferencia de la calificación otorgada en dicho rubro, que se indica que es “Moderada”, la publicación de mi autoría abordó un tema del que no hay mayores estudios en nuestro país, como lo es lo relativo a los delitos de odio, empezando por abarcar lo relativo al denominado discurso del odio o discurso extremo, que sí es objeto de penalización en otras latitudes, ya que se han presentado gestiones relativas a procurar tipificar el discurso de odio, a pesar de que se trata en última instancia de una manifestación de la libertad de expresión, derecho que se encuentra consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos y aunque no ha habido un pronunciamiento expreso sobre el punto, la línea jurisprudencial se aborda para señalar la inconveniencia de su punición, a diferencia de lo que sucede respecto de las motivaciones de las personas en la comisión de algunos tipos penales, de manera tal que no se trata de una Originalidad Moderada, ya que los estudios a nivel nacional sobre el tema, son escasos.

Al hablarse de “originalidad” evidentemente y de conformidad con los términos del Diccionario de la Real Academia Española, implica o conlleva novedad e innovación, lo que puede observarse del mismo contenido del artículo cuya calificación me encuentro impugnando. A diferencia de la calificación, la originalidad es alta, porque precisamente a ningún representante legislativo se le ha ocurrido la idea de establecer, como tiene lugar en legislaciones más avanzadas, una agravante de naturaleza genérica, que contemple la motivación del odio, en el tanto una clarísima discriminación. Esta situación pone de manifiesto que el tema había sido invisibilizado por parte de la legislación y la Dogmática.

Incluso, la guía que tiene el Centro de Evaluación Académica y que es a lo que el docente que es evaluado, trata de ajustarse, indica como este rubro, lo siguiente: “El trabajo demuestra la utilización de fuentes novedosas, de nuevos indicadores o nuevos productos, el uso de nuevas metodologías o técnicas, mediciones originales o aporta grandes novedades científicas o Tecnológicas”.

De modo tal que la calificación es no solo desacertada, sino que además revela una lectura muy a la ligera y con escasa o nula atención a aspectos relevantes.

b) Relevancia: A diferencia de lo que se indicó en la calificación, la publicación aludida, tiene una alta relevancia, en razón de que se pone de manifiesto que a diferencia de la línea seguida por el Poder Legislativo costarricense durante los últimos tiempos, en cuanto a la penalización indiscriminada y las

continuas reformas a la legislación represiva, el odio como sentimiento, no puede ser objeto de sanción o de regulación desde la perspectiva del Ius Puniendi Estatal.

En el artículo se hace la distinción entre el discurso de odio o discurso extremo y los hechos típicos distintos del discurso referido, que se encuentran realizados a partir de un sentimiento de odio y que como bien se detalla, tienen lugar generalmente en contra de ciertas minorías o bien en contra de grupos que han sido históricamente discriminados.

De ahí que conforme se muestra en el artículo, a pesar de la existencia de una reforma que se llevó a cabo en fecha reciente y que afecta a los tipos de homicidio y lesiones, existe una gran laguna de punición que no deja de ser preocupante.

La Relevancia, que para el calificador es Moderada, no es tal puesto que el artículo brinda un panorama de la necesidad imperiosa de regular, o bien una agravante genérica, o de incluir expresamente la agravante del odio en caso de hechos que afecten la autodeterminación sexual o indemnidad sexual.

Con el artículo de mi autoría, se pretende visibilizar un tema en el que como bien se ha señalado, hay escasa o nula producción dogmática en nuestro país, que de alguna forma pueda contrarrestar la tendencia punitivista existente.

c)-Complejidad: A diferencia de lo que señala la calificación que fuera otorgada, la complejidad del tema tratado en el artículo es alta. La complejidad tiene que ver con el grado de dificultad de un artículo como tema de investigación.

Debe destacarse que, por un tema de Política Criminal, cada ordenamiento jurídico es el que debe determinar la procedencia de la penalización en concreto de las conductas. En el artículo se destaca con claridad que, a pesar de una reforma legislativa reciente, dicho cambio se quedó corto al dejar por fuera a una serie de personas integrantes de grupos que debieron ser protegidos con la agravante que se introdujo, pero reducida a su aplicación a casos de homicidio y las lesiones.

Igualmente, y aunque resulta polémico y preocupante el fenómeno que se ha denominado “inflacionismo penal”, en el artículo de mi autoría se hace una indicación respecto de la necesidad de que los eventos cometidos en perjuicio de grupos históricamente sometidos a discriminación o desaprobación social, por esa sola circunstancia, son hechos que se hacen merecedores a un reproche mayor por parte de la respuesta punitiva más fuerte y delicada que tiene el ordenamiento jurídico.

El artículo enfatiza la necesidad de que en hechos que lesionen la autodeterminación sexual, la introducción de la reforma cuando existe una motivación de desprecio u odio, como una motivación ulterior distinta del dolo, resulta ser necesaria.

Es claro entonces que cualquier reforma o modificación legislativa que pueda tener lugar respecto del tema tratado, debe abordarse de manera seria y a partir de una apropiada sistematización, para evitar la duplicidad en la protección de las conductas y con la utilización de un lenguaje claro y preciso, que no brinde oportunidad a interpretaciones antojadizas que puedan ser violatorias del principio de legalidad criminal.

Solicito se conozca en alzada por la vía de la apelación que se está interponiendo, y se me otorgue un mínimo de dos puntos para la publicación supra indicada.

5. La Circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, de la Vicerrectoría de Docencia, y su posterior adición del 2 de marzo de 2021, explicita el deber del personal docente de colaborar de forma consultiva con la Comisión de Régimen Académico; así como la responsabilidad que tienen las personas que ocupan puestos de autoridad superior jerárquica en las unidades académicas, de cuidar que la persona docente designada para colaborar cumpla en tiempo y forma, con la solicitud requerida por ese Órgano.
6. El 11 de diciembre de 2024, la Comisión de Régimen Académico, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 TER del Reglamento de Régimen Académico y de Servicio Docente, y de acuerdo con lo indicado en la circular VD-63-2020, del 15 de diciembre de 2020, y su posterior adición del

2 de marzo de 2021, previo a elevar en alzada el recurso interpuesto, solicitó al Decanato de la Facultad de Derecho la designación de dos personas especialistas para evaluar con criterio experto la obra perteneciente a este caso. Las personas especialistas ofrecieron sus criterios el 29 de enero de 2025 y el 21 de febrero de 2025, respectivamente, los cuales fueron remitidos por la Facultad de Derecho en los oficios FD-177-2025 y FD-384-2025, del 6 de febrero de 2025 y 25 de febrero de 2025, respectivamente, a la entidad solicitante.

7. En el oficio CRA-997-2025, del 22 de mayo de 2025, la Comisión de Régimen Académico elevó al Consejo Universitario el recurso de apelación interpuesto por el docente de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel Rojas Salas.
8. En la siguiente tabla se consigna lo que establecen las rúbricas general y específicas por áreas académicas para la evaluación de publicaciones y obras, en los rubros de moderada originalidad, moderada relevancia, moderada trascendencia y poca complejidad, tal y como fue calificado el artículo por la Comisión de Régimen Académico, además, cómo se pronunciaron las personas especialistas n.º 1 y n.º 2 sobre esos rubros.

Comisión de Régimen Académico	Especialista n.º 1	Especialista n.º 2
<p>Artículo: “Los delitos del odio: ¿necesitan de regulación expresa en la legislación represiva costarricense?”.</p> <p>Originalidad (moderada): La obra aporta, sistematiza o produce de manera incipiente, conocimiento o técnicas novedosas para el área disciplinar; la obra incorpora referencias teóricas limitadas en cantidad, pero relevantes para el campo disciplinar; la obra presenta un nivel incipiente de vinculación transdisciplinar cuando aplique; la obra presenta un atisbo de abordaje alternativo a la dominante dentro del campo disciplinar.</p>	<p><i>El artículo académico bajo consideración puede ser descrito como original, debido a diferentes criterios inmersos en su desarrollo de ámbito legal y académico. La temática abordada, los delitos de odio en el contexto costarricense y la regulación del discurso del odio, es altamente relevante y contemporánea, y aún no se ha tratado con la profundidad que exige la situación actual en el país.</i></p> <p><i>El autor utiliza fuentes novedosas al referirse a las redes sociales y la globalización como fenómenos que amplifican el discurso del odio, analizando cómo estas herramientas de comunicación impactan las dinámicas sociales y jurídicas en Costa Rica. La reflexión sobre la necesidad o no de una regulación expresa de los delitos de odio dentro del marco legal costarricense introduce nuevos indicadores al relacionar el discurso del odio con las decisiones políticas y sociales locales.</i></p>	<p><i>Es original. No hay obras en el país que traten ese tema.</i></p>

	<p><i>Además, la propuesta de ampliar el espectro de punición en crímenes relacionados con la discriminación sexual es un desarrollo innovador dentro de la legislación penal del país.</i></p> <p><i>El autor también hace uso de una metodología reflexiva y crítica, que no solo examina las implicaciones jurídicas, sino que también cuestiona el uso de herramientas represivas, siguiendo principios y criterios base en materia de Derechos Humanos. Este enfoque no solo es novedoso, sino que plantea interrogantes sobre las tendencias globales sobre la libertad de expresión, la protección a poblaciones vulnerables y la intervención del Estado por medio de las herramientas punitivas.</i></p> <p><i>El artículo introduce propuestas que, de ser adoptadas, podrían representar una novedad en la legislación costarricense, mejorando su capacidad para enfrentar fenómenos discriminatorios y violentos sin sacrificar principios fundamentales de derechos humanos.</i></p>	
<p>Relevancia (moderada): La obra versa sobre un tema o problema conocido a nivel nacional o internacional, de interés disciplinar, social o institucional, según corresponda y la obra presenta aportes preliminares al campo de estudio o ejercicio profesional.</p>	<p><i>El artículo estudiado es de relevancia para el avance del conocimiento en el ámbito del Derecho Penal y Derechos Humanos, específicamente en lo que respecta a decisiones de orden legislativo.</i></p>	<p><i>Es relevante. Hace un análisis puntual de los elementos básicos a considerar en relación con este fenómeno y la respuesta que debería tener desde el ordenamiento jurídico.</i></p>

	<p><i>Al abordar un tema de actualidad, como la proliferación del discurso de odio en Costa Rica, haciendo énfasis en la sociedad tecnológica en la que estamos inmersos, el autor aporta una reflexión crítica que no solo examina el fenómeno desde una perspectiva jurídica, sino también desde un punto de vista social y político.</i></p> <p><i>Mientras se realiza la politización sobre la tipificación de delitos de odio, se resalta la importancia de respetar principios fundamentales como la libertad de expresión y la intervención mínima del Estado, en lugar de adoptar medidas represivas excesivas. Este enfoque es crucial para avanzar en la discusión sobre la aplicación del Derecho Penal en un contexto globalizado y digitalizado, y podría sentar un precedente para futuras investigaciones y publicaciones sobre la relación entre la tecnología, la comunicación y el derecho.</i></p> <p><i>Además, la propuesta de extender la punición a ciertos crímenes de odio de naturaleza sexual y la reflexión sobre la discriminación hacia poblaciones vulnerabilidades (sic) resultan temas inéditos en la legislación y doctrina costarricense, lo que posiciona al texto como un referente potencial para futuras publicaciones y discusiones jurídicas sobre cómo mejorar la protección de los derechos fundamentales frente a la discriminación y la violencia motivada por el odio.</i></p>	<p><i>El tema también es básico en nuestros tiempos dado el incremento de los discursos de odio (incluso por parte de quienes, por su posición en la estructura institucional, son llamados a censurarlos) y su amplia difusión a través de las nuevas tecnologías de la información la comunicación.</i></p>
--	--	---

<p>Trascendencia (alta): Los aportes idearios, problematizaciones, o resultados contenidos en la obra, expresan viabilidad para generar innovaciones o mejoras que van más allá del entorno disciplinar, la obra muestra diversa utilidad o beneficios para el campo de estudio, o para poblaciones vinculadas a su producción, pese a su grado de sostenibilidad en el tiempo o dependencia de variables ajenas al proceso, la obra se consigna en un medio de divulgación con nivel de alcance o factor de impacto intermedio, según corresponda y la obra se desarrolla en un idioma que corresponde con el de mayor difusión y alcance para el ámbito disciplinar en particular.</p>	<p><i>El artículo académico puede ser considerado trascendente debido a su capacidad para generar un impacto significativo tanto en el ámbito social como académico e institucional. Su relevancia se extiende más allá de un análisis jurídico puntual, al abordar un problema globalizado que afecta a diversas sociedades contemporáneas: el discurso del odio y los delitos motivados por la discriminación.</i></p> <p><i>Este texto no solo analiza el contexto costarricense, sino que también ofrece una comparación con otros países, y su contenido crítico puede ser aplicado a indiferentemente la localidad.</i></p> <p><i>Su propuesta sobre la regulación de los delitos de odio y la ampliación de la punición de crímenes de odio sexuales es de gran utilidad para la comunidad jurídica, pues ofrece insumos para la toma de decisiones legislativas en áreas como los derechos humanos, la libertad de expresión y la protección contra la discriminación.</i></p> <p><i>Asimismo, el impacto social de este texto radica en su capacidad para sensibilizar a los ciudadanos y a los actores políticos sobre la importancia de equilibrar la protección de derechos fundamentales con la concientización del poder punitivo.</i></p>	<p><i>Es trascendente. Se hace una propuesta de lege ferenda en el tema.</i></p>
--	--	--

	<p><i>A nivel académico, el texto ofrece una base sólida para futuros estudios y debates, ya que plantea interrogantes sobre la función del Derecho Penal en la protección de grupos vulnerables. Su contribución trasciende las fronteras nacionales, sirviendo como referencia para organismos internacionales. En definitiva, el texto no solo aporta sustancia al ejercicio profesional local y nacional, sino que también proporciona una visión integral que podría influir en debates a nivel global.</i></p>	
<p>Complejidad (moderada): La obra presenta un nivel de complejidad bajo, en tanto incorpora metodologías, estrategias de análisis de resultados, o refleja herramientas de producción usuales; la obra en su diseño aplica herramientas, acciones o mecanismos para asegurar el cumplimiento de criterios académicos mínimos, según disciplina; la obra presenta coherencia elemental entre su referencia teórica y la metodología aplicada; la obra alcanza un grado de complejidad similar al de otras publicaciones en el ámbito disciplinar o transdisciplinar.</p>	<p><i>La obra presenta una complejidad destacada tanto en sus conocimientos como en las técnicas y metodologías empleadas, lo cual enriquece su análisis y le otorga un enfoque multidimensional.</i></p> <p><i>La utilización de fuentes jurídicas, sociales y políticas diversas, que incluyen tanto normativa nacional como jurisprudencia internacional, muestra una integración amplia de perspectivas, lo cual eleva el nivel de reflexión sobre el tema de los delitos de odio. Además, el texto emplea una metodología crítica que no solo analiza los aspectos legales, sino también los contextos sociales y políticos.</i></p> <p><i>La existencia de diferentes etapas de análisis, desde la reflexión teórica sobre el discurso del odio hasta las propuestas concretas de</i></p>	<p><i>La complejidad es media, se acude a fuentes bibliográficas únicamente.</i></p>

	<p><i>regulación legal, demuestra un enfoque estructurado y riguroso que aborda el tema desde varias aristas.</i></p> <p><i>Aunque no se menciona explícitamente, se podría inferir la aplicación de estrategias de validación indirectas a través del análisis de casos internacionales y locales, lo que refuerza la fiabilidad de las conclusiones. Si bien no se describe una participación explícita de equipos interdisciplinarios, el texto claramente integra elementos de derecho penal, derechos humanos, sociología política y tecnología, lo cual sugiere un enfoque interdisciplinario implícito.</i></p>	
--	--	--

9. En la reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada el 23 de julio de 2025, se analizó el recurso de apelación, así como los criterios ofrecidos por las personas especialistas y se concluyó que estos últimos se encuentran por encima o son muy superiores a los consignados por la Comisión de Régimen Académico en la evaluación del artículo, esto de conformidad con las rúbricas general y específicas por áreas académicas para la evaluación de publicaciones y obras, en cuanto a los rubros de originalidad, relevancia, trascendencia y complejidad.
10. De conformidad con lo indicado por las personas especialistas en los rubros de originalidad, relevancia, trascendencia y complejidad, se concluye que al efectuar la sumatoria de estos rubros, la persona especialista n.º 1 le otorga 2,25 puntos, debido a que el artículo posee alta originalidad (0,50 puntos), muy alta relevancia (0,75 puntos), alta trascendencia (0,50 puntos) y alta complejidad (0,50 puntos); y la persona especialista n.º 2 le otorga 2,00 puntos en consideración de que el artículo evaluado posee alta originalidad (0,50 puntos), alta relevancia (0,50 puntos), alta trascendencia (0,50 puntos) y alta complejidad (0,50 puntos). Puntajes a los que se les debe adicionar o sumar el puntaje originalmente asignado (1,25 puntos).

Puntaje otorgado por la Comisión de Régimen Académico: 1,25 puntos

Puntaje de la persona especialista n.º 1 de acuerdo a sus criterios: 2,25 puntos

Puntaje de la persona especialista n.º 2 de acuerdo a sus criterios: 2,00 puntos

Total: 5,00 puntos

5,50 puntos divididos entre 3 (puntaje otorgado por la CRA y las dos personas especialistas)= 1,85 puntos.

11. En virtud de lo anterior, el puntaje originalmente otorgado al artículo denominado “Los delitos del odio: ¿necesitan de regulación expresa en la legislación represiva costarricense?” debe modificarse y consecuentemente pasar de 1,25 puntos a 1,85 puntos.

ACUERDA

1. Acoger el recurso de apelación interpuesto por el docente de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel Rojas Salas, en contra de la resolución de calificación n.º 2963-33-2023, del 1.º de noviembre de 2023, de manera que el artículo denominado “El fraude de simulación: un tipo penal incomprendido” debe pasar de 0,75 puntos de calificación a 1,05 puntos.
2. Acoger el recurso de apelación interpuesto por el docente de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel Rojas Salas, en contra de la resolución de calificación n.º 2972-60-2024, del 20 de marzo de 2024, de manera que el artículo “El *child grooming* como conducta típica en el Código Penal: su regulación legislativa en Costa Rica” pase de 1,25 puntos de calificación a 1,75 puntos.
3. Acoger el recurso de apelación interpuesto por el docente de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel Rojas Salas en contra de la resolución de calificación n.º 2972-61-2024, del 20 de marzo de 2024, de manera que y consecuentemente, el artículo denominado “La denominada edad del consentimiento: un terreno legislativo por cultivar” pase de una calificación de 1,00 puntos a 1,67 puntos.
4. Acoger el recurso de apelación interpuesto por el docente de la Facultad de Derecho, Dr. Manuel Rojas Salas, en contra de la resolución de calificación n.º 2984-61-2024, del 14 de agosto de 2024, de manera que el artículo denominado “Los delitos del odio: ¿necesitan de regulación expresa en la legislación represiva costarricense?” pase de 1,25 puntos de calificación a 1,85 puntos.
5. Dar por agotada la vía administrativa.
6. Notificar las resoluciones de los siguientes acuerdos al correo electrónico manuel.rojas@ucr.ac.cr

ACUERDO FIRME.

****Se retoma la transmisión de la sesión.****

ARTÍCULO 4

La Comisión de Estatuto Orgánico presenta el Dictamen CEO-8-2025 referente a valorar la reforma al artículo 28 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*, a fin de que los miembros del Consejo Universitario no se vean limitados para ejercer sus funciones académicas solamente en la unidad respectiva.

LA DRA. ILKA TREMINIO SÁNCHEZ expone el dictamen, que, a la letra, dice:

ANTECEDENTES

1. El Consejo Universitario, en la sesión n.º 6744, artículo 8, del 10 de octubre de 2023, conoció la Propuesta de Miembros CU-26-2023, suscrita por la Ph. D. Patricia Fumero Vargas, y acordó:
Solicitar a la Comisión de Estatuto Orgánico que valore la reforma al artículo 28 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, a fin de que los miembros del Consejo Universitario no se vean limitados para ejercer sus funciones académicas solamente en la unidad respectiva.

2. La Dirección del Consejo Universitario, mediante el Pase CU-95-2023, del 11 de octubre de 2023, trasladó el caso a la Comisión de Estatuto Orgánico para el análisis respectivo.
3. La Comisión de Estatuto Orgánico solicitó a la Dirección del Consejo Universitario publicar en primera consulta a la comunidad universitaria la propuesta de reforma estatutaria al artículo 28 (Propuesta de reforma al Estatuto Orgánico CEO-4-2024, del 23 de julio de 2024).
4. La Dirección del Consejo Universitario comunicó la propuesta al decanato y a la dirección de cada unidad académica, así como a las direcciones de las sedes regionales, en la Circular CU-6-2024, del 5 de agosto de 2024. Además, se publicó en el *Alcance a La Gaceta Universitaria* n.º 58-2024, del 5 de agosto de 2024.
5. El Consejo Universitario, en la sesión n.º 6898, artículo 16, del 15 de mayo de 2025, conoció el Dictamen CEO-1-2025, del 27 de febrero de 2025, y acordó publicar en segunda consulta a la comunidad universitaria, en *La Gaceta Universitaria*, la reforma al artículo 28 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*.
6. La consulta fue publicada en *La Gaceta Universitaria* n.º 29-2025, del 26 de mayo de 2025.

ANÁLISIS

1. Origen del caso

La Ph. D. Patricia Fumero Vargas presentó ante el Consejo Universitario la Propuesta de Miembros CU-26-2023, del 6 de setiembre de 2023, para que los miembros del Consejo Universitario (si así lo desean) puedan tener la posibilidad de ejercer funciones académicas en otras unidades que no son su unidad base, siempre que tales actividades no interfieran con las labores como miembros del Órgano Colegiado. Esto, dado que la redacción vigente del artículo 28 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica* limita esa posibilidad, lo que hace que se pierda el fomento de la interdisciplinariedad, motivo por el cual, en la sesión n.º 6744, artículo 8, del 10 de octubre de 2023, se acordó:

Solicitar a la Comisión de Estatuto Orgánico que valore la reforma al artículo 28 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, a fin de que los miembros del Consejo Universitario no se vean limitados para ejercer sus funciones académicas solamente en la unidad respectiva.

2. Propósito

Reformar el artículo 28 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*, a fin de que los miembros del Consejo Universitario no vean limitado el ejercicio de sus funciones académicas en cualquier unidad de la Institución, siempre que estas no interfieran con sus labores como miembros.

3. Marco normativo

Las Políticas Institucionales 2021-2025 promueven la inter- y transdisciplinariedad en su política 2.4, que señala: *Estimulará la flexibilidad curricular que potencie el trabajo inter-, multi- y transdisciplinario, en los ámbitos de la docencia, la investigación y la acción social, en concordancia con las condiciones presupuestarias de la Universidad;* y específicamente en los objetivos: 2.4.2 *Impulsar el desarrollo de las actividades sustantivas desde una estrategia multi-, inter- y transdisciplinaria, que considere la complejidad de los problemas y la diversidad de perspectivas de abordaje,* y 2.4.4 *Evaluar y ajustar el modelo de régimen académico para incentivar el trabajo colaborativo y el abordaje de los problemas, con perspectiva multi-, inter- y transdisciplinaria en las áreas sustantivas.*

Asimismo, el *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica* manifiesta lo siguiente sobre la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad:

ARTÍCULO 50.- *Corresponderá específicamente al vicerrector o a la vicerrectora de Docencia:*

(...)

g) *Atender por medio de los coordinadores y de las coordinadoras de área la actividad interdisciplinaria y transdisciplinaria en el campo docente. (...)*

ARTÍCULO 65.- *El Consejo Académico de Áreas es el órgano colegiado encargado de promover el desarrollo interdisciplinario del quehacer universitario, en apego a los intereses institucionales y nacionales. Sus propuestas deben ser conocidas y resueltas por los órganos de gobierno de la Universidad de Costa Rica.*

ARTÍCULO 67.- *Corresponderá al Consejo Académico de Áreas:*

(...)

d) *Propiciar líneas de trabajo académico que articulen acciones interdisciplinarias en cada área y entre las diferentes áreas. (...)*

ARTÍCULO 196.- *Con el propósito de contribuir en forma más eficiente al desarrollo artístico, científico y tecnológico del país, la Universidad debe brindar todas las facilidades a su alcance para la realización de nuevos planes de estudio, que promuevan una formación interdisciplinaria y transdisciplinaria.*

ARTÍCULO 199.- *Los planes de estudios interdisciplinarios y transdisciplinarios se ejecutarán por medio de un Consejo de Carrera, integrado por docentes miembros de diversas unidades académicas que participan en dichos planes, quienes elegirán a su coordinador o a su coordinadora.*

4. Primera consulta a la comunidad universitaria

La Comisión de Estatuto Orgánico, mediante la Propuesta de reforma al Estatuto Orgánico CEO-4-2024, del 23 de julio de 2024, solicitó a la Dirección del Consejo Universitario publicar en primera consulta a la comunidad universitaria la propuesta de reforma al artículo 28 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*, la cual fue comunicada por la Dirección del Consejo Universitario al decanato y a la dirección de cada unidad académica, así como a las direcciones de las sedes regionales, en la Circular CU-6-2024, del 5 de agosto de 2024 y, además, fue publicada en el *Alcance a La Gaceta Universitaria* n.º 58-2024, del 5 de agosto de 2024.

La comunidad universitaria contó con un plazo de treinta días hábiles para remitir sus observaciones (del 5 de agosto al 17 de setiembre de 2024), y se recibieron respuestas de las siguientes personas o instancias:

1. Asamblea de la Escuela de Ingeniería Eléctrica.
2. Asamblea de la Sede Regional del Sur.
3. Asamblea de la Facultad de Farmacia.
4. Asamblea de la Sede Regional del Atlántico.
5. Asamblea de la Sede Regional del Caribe.
6. Asamblea de la Escuela de Ingeniería de Biosistemas.
7. Asamblea de la Escuela de Trabajo Social.
8. Consejo Asesor de la Facultad de Ingeniería.
9. Orlando Arrieta Orozco, decano de la Facultad de Ingeniería.
10. Víctor Manuel Jiménez García, director del Instituto de Investigaciones Agrícolas.

Al respecto, las respuestas recibidas de la comunidad universitaria estuvieron a favor de la propuesta de reforma al considerar pertinente que exista flexibilidad de participación de los miembros del Consejo Universitario en las unidades académicas; sin embargo, para una unidad académica faltó claridad en cuanto a la pretensión de la propuesta.

5. Segunda consulta a la comunidad universitaria

La Comisión de Estatuto Orgánico, mediante el Dictamen CEO-1-2025, del 27 de febrero de 2025, presentó ante el Consejo Universitario la propuesta de reforma al artículo 28 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*, la cual fue conocida en la sesión n.º 6898, artículo 16, del 15 de mayo de 2025, y publicada en *La Gaceta Universitaria* n.º 29-2025, del 26 de mayo de 2025.

La comunidad universitaria contó con un plazo de quince días hábiles para remitir sus observaciones (del 26 de mayo al 16 de junio de 2025); no obstante, no se recibieron respuestas a esta consulta.

REFLEXIONES DE LA COMISIÓN

La Comisión de Estatuto Orgánico (CEO) analizó los argumentos en torno a la propuesta de reforma al artículo 28 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*, y coincide en que es adecuado eliminar la limitante referida a que los miembros del Consejo Universitario solo puedan ejercer funciones académicas en la unidad respectiva, pues lo conveniente es que —si lo desean— puedan seguir aportando desde la docencia, la investigación y la acción social,

sin restricción, en cualquier unidad académica de la Institución, siempre que no interfiera en sus labores en el Órgano Colegiado. Esto como una posibilidad y no como una obligación.

Lo anterior, a fin de promover la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad por la que aboga la Universidad de Costa Rica tanto en las Políticas Institucionales 2021-2025 como en el *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*.

Esta es una propuesta significativa que da la posibilidad de colaboración inter- y transdisciplinaria y, además, ayuda a actualizar y flexibilizar una práctica que siempre ha sido muy rígida, pero que cada vez se está volviendo más común, lo cual es uno de los desafíos de la Universidad.

Al respecto, posterior a la primera consulta, la CEO analizó cada una de respuestas recibidas de la comunidad universitaria y consideró prudente aclarar que la pretensión de esta reforma es que los miembros del Consejo Universitario tengan la posibilidad de apoyar *ad honorem* a cualquier unidad académica, sin que necesariamente tenga que ser su unidad base, siempre y cuando no interfiera en sus labores como miembros de este Órgano Colegiado.

Asimismo, de la segunda consulta a la comunidad universitaria no se recibieron observaciones, por lo que esta comisión estima que se debe continuar con el proceso estipulado en el artículo 236 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*, y enviar a la Asamblea Colegiada Representativa la reforma estatutaria al artículo 28, a fin de que los miembros del Consejo Universitario no vean limitado el ejercicio de sus funciones académicas en cualquier unidad de la Institución, siempre que estas no interfieran con sus labores como miembros.

Por otro lado, de aprobarse esta propuesta de modificación en la Asamblea Colegiada Representativa, sería conveniente incluir en el artículo 5 del *Reglamento del Consejo Universitario* una nueva atribución para las personas miembros del Consejo Universitario que señale lo siguiente: *Ejercer funciones académicas ad honorem, siempre que estas no interfieran con sus labores como miembros del Consejo Universitario y esté en concordancia con la normativa sobre esta materia.*

PROPUESTA DE ACUERDO

La Comisión de Estatuto Orgánico presenta al plenario la siguiente propuesta de acuerdo:

CONSIDERANDO QUE:

1. El Consejo Universitario, en la sesión n.º 6744, artículo 8, del 10 de octubre de 2023, conoció la Propuesta de Miembros CU-26-2023, de la Ph. D. Patricia Fumero Vargas, para que los miembros del Consejo Universitario (si así lo desean) puedan tener la posibilidad de ejercer funciones académicas en otras unidades que no son su unidad base, siempre que tales actividades no interfieran con las labores como miembros del Órgano Colegiado, pues la redacción vigente del artículo 28 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica* limita esa posibilidad y hace que se pierda el fomento de la interdisciplinariedad, motivo por el cual se acordó:

Solicitar a la Comisión de Estatuto Orgánico que valore la reforma al artículo 28 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, a fin de que los miembros del Consejo Universitario no se vean limitados para ejercer sus funciones académicas solamente en la unidad respectiva.

2. Es adecuado eliminar la limitante de que los miembros del Consejo Universitario solo puedan ejercer funciones académicas en la unidad respectiva, pues lo conveniente es que —si lo desean— puedan seguir aportando desde la docencia, la investigación y la acción social, sin restricción, en cualquier unidad académica de la Institución, siempre y cuando no interfiera con sus labores en el Órgano Colegiado, lo cual promueve la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad por la que aboga la Universidad de Costa Rica tanto en las Políticas Institucionales 2021-2025 como en el *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*. Esto como una posibilidad y no como una obligación.
3. Esta es una propuesta significativa que da la posibilidad de colaboración inter- y transdisciplinaria y, además, ayuda a actualizar y flexibilizar una práctica que siempre ha sido muy rígida, pero que cada vez se está volviendo más común, lo cual es uno de los desafíos de la Universidad.

4. El artículo 236 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica* establece el proceso de reformas a dicha norma y señala:

ARTÍCULO 236.- *La iniciativa en materia de reformas al Estatuto Orgánico corresponde a los miembros del Consejo Universitario y a la Asamblea Colegiada Representativa. Los anteproyectos de reforma provenientes de otras fuentes solo podrán ser acogidos, para su trámite, por un miembro del Consejo Universitario.*

La Comisión respectiva del Consejo Universitario hará un estudio preliminar del anteproyecto y determinará, mediante acto motivado, si procede o no elaborar una propuesta que será publicada, por primera vez, con el propósito de consultar el criterio de la comunidad universitaria, la cual contará con un plazo de treinta días hábiles para remitir sus observaciones. El plazo empezará a regir a partir de la fecha de publicación en La Gaceta Universitaria y se divulgará en todos los medios de comunicación universitarios disponibles. La directora o el director del Consejo Universitario comunicará la propuesta al decano o a la decana y a la directora o al director de cada unidad académica, que consultarán con su respectiva asamblea para su debido pronunciamiento, dentro del plazo establecido. La directora o el director del Consejo Universitario deberá informar al plenario sobre el inicio de este proceso.

Una vez recibidas las observaciones de la comunidad universitaria a la primera consulta, la comisión respectiva procederá a elaborar el o los dictámenes, que serán analizados en el seno del Consejo Universitario. El que se apruebe se publicará en segunda consulta a la comunidad universitaria, la cual contará con un plazo de quince días hábiles para remitir sus observaciones. El plazo empezará a correr a partir de su publicación en La Gaceta Universitaria y se divulgará en todos los medios de comunicación universitarios disponibles.

Concluido el periodo de consulta, la comisión elaborará el o los dictámenes, de los cuales uno deberá ser aprobado en dos sesiones ordinarias del Consejo Universitario, por al menos dos tercios de los miembros presentes, para su posterior decisión en la Asamblea Colegiada Representativa.

Las consultas a la comunidad universitaria deberán ser efectuadas entre el primer día lectivo del primer ciclo y el último día lectivo del segundo ciclo de cada año.

5. Las Políticas Institucionales 2021-2025 promueven la inter- y transdisciplinariedad en su política 2.4, que señala: *Estimulará la flexibilidad curricular que potencie el trabajo inter-, multi- y transdisciplinario, en los ámbitos de la docencia, la investigación y la acción social, en concordancia con las condiciones presupuestarias de la Universidad; y específicamente en los objetivos: 2.4.2 Impulsar el desarrollo de las actividades sustantivas desde una estrategia multi-, inter- y transdisciplinaria, que considere la complejidad de los problemas y la diversidad de perspectivas de abordaje, y 2.4.4 Evaluar y ajustar el modelo de régimen académico para incentivar el trabajo colaborativo y el abordaje de los problemas, con perspectiva multi-, inter- y transdisciplinaria en las áreas sustantivas.*
6. La Dirección del Consejo Universitario, mediante la Circular CU-6-2024, del 5 de agosto de 2024, comunicó al decanato y a la dirección de cada unidad académica, así como a las direcciones de las sedes regionales, la propuesta de la Comisión de Estatuto Orgánico¹ referente a la reforma al artículo 28 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*. Además, se publicó en primera consulta a la comunidad universitaria en el *Alcance a La Gaceta Universitaria* n.º 58-2024, del 5 de agosto de 2024.
7. La comunidad universitaria contó con un plazo de treinta días hábiles (del 5 de agosto al 17 de setiembre de 2024) para pronunciarse respecto a esta reforma estatutaria y se recibieron respuestas de 10 personas o instancias, quienes estuvieron a favor de la propuesta de reforma al considerar pertinente que exista flexibilidad de participación de los miembros del Consejo Universitario en las distintas unidades académicas; sin embargo, conviene reiterar que lo que se pretende con esta reforma es que los miembros del Consejo Universitario tengan la posibilidad de apoyar *ad honorem* a cualquier unidad académica, sin que necesariamente tenga que ser su unidad base, siempre y cuando no interfiera en sus labores como miembros de este Órgano Colegiado.
8. El Consejo Universitario, en la sesión n.º 6898, artículo 16, del 15 de mayo de 2025, conoció el Dictamen CEO-1-2025, del 27 de febrero de 2025, y acordó publicar en segunda consulta a la comunidad universitaria, en *La Gaceta Universitaria*, la reforma al artículo 28 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*. La consulta fue publicada en *La Gaceta Universitaria* n.º 29-2025, del 26 de mayo de 2025.

¹ Propuesta de reforma al Estatuto Orgánico CEO-4-2024, del 23 de julio de 2024.

9. La comunidad universitaria contó con un plazo de quince días hábiles para remitir sus observaciones (del 26 de mayo al 16 de junio de 2025), y no se recibieron respuestas, por lo que se continúa con el proceso de reforma estipulado en el *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*.
10. La reforma al artículo 28 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*, es la siguiente:

TEXTO VIGENTE EN EL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 28.- Los miembros del Consejo Universitario, cuando sean docentes, ejercerán solo funciones académicas en la unidad respectiva siempre que estas no interfieran con sus labores como miembros del Consejo Universitario.	ARTÍCULO 28.- Los miembros del Consejo Universitario, cuando sean docentes, <u>podrán</u> ejercerán solo funciones académicas, en la unidad respectiva siempre que estas no interfieran con sus labores como miembros del Consejo Universitario.

ACUERDA

1. Aprobar en primera sesión ordinaria, de conformidad con lo que establece el artículo 236 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*, la siguiente reforma estatutaria al artículo 28, para su posterior decisión en la Asamblea Colegiada Representativa:

ARTÍCULO 28.- Los miembros del Consejo Universitario, cuando sean docentes, podrán ejercer funciones académicas, siempre que estas no interfieran con sus labores como miembros del Consejo Universitario.

2. Solicitar a la Dirección del Consejo Universitario que, en caso de que la Asamblea Colegiada Representativa apruebe la reforma al artículo 28 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*, para que los miembros del Consejo Universitario no se vean limitados para ejercer funciones académicas en cualquier unidad de la Institución, siempre que estas no interfieran con sus labores como miembros, se proceda con la siguiente modificación en el artículo 5 del *Reglamento del Consejo Universitario* para incluir una nueva atribución a las personas miembros del Consejo Universitario: *Ejercer funciones académicas ad honorem, siempre que estas no interfieran con sus labores como miembros del Consejo Universitario y esté en concordancia con la normativa sobre esta materia.*

LA DRA. ILKA TREMINIO SÁNCHEZ puntualiza que la propuesta es apoyada por la M. Sc. Esperanza Tasies Castro; el Lic. William Méndez Garita; la Srta. Isela Chacón Navarro; la MBA Rosa Julia Cerdas González, en representación del señor rector; el Dr. Jaime Alonso Caravaca Morera; y su persona (la Dra. Ilka Treminio Sánchez). Agradece a la Licda. Gréttel Castro Céspedes, asesora de la Unidad de Estudios, por la elaboración del dictamen. Da las gracias.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS somete a discusión el dictamen. Cede la palabra al Dr. Keilor Rojas Jiménez para que se refiera al tema.

EL DR. KEILOR ROJAS JIMÉNEZ agradece a la Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas por esta iniciativa, la cual describe como oportuna, pertinente y necesaria. Es claro que, para quienes están en el Órgano Colegiado, esta es su prioridad (estar en el Consejo Universitario), pero remarca que nunca dejan de ser personas académicas; siempre hay cierta experticia, por ende, resalta la posibilidad de contribuir a la academia y a la Universidad en diferentes formas. Exterioriza sentirse encantado de apoyar esta iniciativa.

Es su percepción que muchas de las personas miembros que ingresaron recientemente al CU están a la mitad de la carrera, de desarrollo. Por ende, de alguna manera, deben volver a la academia. El “músculo” deben mantenerlo ejercitado de alguna manera y en la medida de las posibilidades. Con esto, manifiesta su total apoyo, reitera su felicitación a la Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS refiere al Dr. Keilor Rojas Jiménez que su propuesta fue dirigida en ese sentido, pues de la manera en que se indicaba, limitaba la posibilidad. Al estar en el

Órgano Colegiado, la persona miembro no puede impartir clases de cursos multitudinarios (de 50 o 30 estudiantes), fundamentalmente, porque en su área (Humanidades) no cuentan con asistentes para impartir la docencia, pero sí podrían trabajar en un posgrado, en un centro de investigación, brindar cursos cortos en esta línea. De modo que, reitera, este fue el espíritu: que puedan continuar trabajando sin que después se les señale que están en contra de lo que establece el *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*. Remarca la importancia de flexibilizar el movimiento que se tiene dentro de la Institución, precisamente, a partir de la experticia de cada uno. En el caso de quienes están a la mitad de la carrera, es importante que no pierdan el contacto con la academia, pues siempre retornan a esta.

Seguidamente, somete a votación la propuesta de acuerdo, y se obtiene el siguiente resultado:

VOTAN A FAVOR: M. Sc. Jáiro Núñez Moya, Dr. Eduardo Calderón Obaldía, Dra. Ilka Treminio Sánchez, Sr. Fernán Orlich Rojas, Mag. Hugo Amores Vargas, Lic. William Méndez Garita, Srta. Isela Chacón Navarro, Ph. D. Sergio Salazar Villanea, Dr. Keilor Rojas Jiménez y Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas.

TOTAL: Diez votos.

EN CONTRA: Ninguno.

Por lo tanto, el Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. El Consejo Universitario, en la sesión n.º 6744, artículo 8, del 10 de octubre de 2023, conoció la Propuesta de Miembros CU-26-2023, de la Ph. D. Patricia Fumero Vargas, para que los miembros del Consejo Universitario (si así lo desean) puedan tener la posibilidad de ejercer funciones académicas en otras unidades que no son su unidad base, siempre que tales actividades no interfieran con las labores como miembros del Órgano Colegiado, pues la redacción vigente del artículo 28 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica* limita esa posibilidad y hace que se pierda el fomento de la interdisciplinariedad, motivo por el cual se acordó:

Solicitar a la Comisión de Estatuto Orgánico que valore la reforma al artículo 28 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, a fin de que los miembros del Consejo Universitario no se vean limitados para ejercer sus funciones académicas solamente en la unidad respectiva.

2. Es adecuado eliminar la limitante de que los miembros del Consejo Universitario solo puedan ejercer funciones académicas en la unidad respectiva, pues lo conveniente es que —si lo desean— puedan seguir aportando desde la docencia, la investigación y la acción social, sin restricción, en cualquier unidad académica de la Institución, siempre y cuando no interfiera con sus labores en el Órgano Colegiado, lo cual promueve la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad por la que aboga la Universidad de Costa Rica tanto en las Políticas Institucionales 2021-2025 como en el *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*. Esto como una posibilidad y no como una obligación.
3. Esta es una propuesta significativa que da la posibilidad de colaboración inter- y transdisciplinaria y, además, ayuda a actualizar y flexibilizar una práctica que siempre ha sido muy rígida, pero que cada vez se está volviendo más común, lo cual es uno de los desafíos de la Universidad.
4. El artículo 236 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica* establece el proceso de reformas a dicha norma y señala:

ARTÍCULO 236.- *La iniciativa en materia de reformas al Estatuto Orgánico corresponde a los miembros del Consejo Universitario y a la Asamblea Colegiada Representativa. Los anteproyectos de reforma provenientes de otras fuentes solo podrán ser acogidos, para su trámite, por un miembro del Consejo Universitario.*

La Comisión respectiva del Consejo Universitario hará un estudio preliminar del anteproyecto y determinará, mediante acto motivado, si procede o no elaborar una propuesta que será publicada, por primera vez, con el propósito de consultar el criterio de la comunidad universitaria, la cual contará con un plazo de treinta días hábiles para remitir sus observaciones. El plazo empezará a regir a partir de la fecha de publicación en La Gaceta Universitaria y se divulgará en todos los medios de comunicación universitarios disponibles. La directora o el director del Consejo Universitario comunicará la propuesta al decano o a la decana y a la directora o al director de cada unidad académica, que consultarán con su respectiva asamblea para su debido pronunciamiento, dentro del plazo establecido. La directora o el director del Consejo Universitario deberá informar al plenario sobre el inicio de este proceso.

Una vez recibidas las observaciones de la comunidad universitaria a la primera consulta, la comisión respectiva procederá a elaborar el o los dictámenes, que serán analizados en el seno del Consejo Universitario. El que se apruebe se publicará en segunda consulta a la comunidad universitaria, la cual contará con un plazo de quince días hábiles para remitir sus observaciones. El plazo empezará a correr a partir de su publicación en La Gaceta Universitaria y se divulgará en todos los medios de comunicación universitarios disponibles.

Concluido el periodo de consulta, la comisión elaborará el o los dictámenes, de los cuales uno deberá ser aprobado en dos sesiones ordinarias del Consejo Universitario, por al menos dos tercios de los miembros presentes, para su posterior decisión en la Asamblea Colegiada Representativa.

Las consultas a la comunidad universitaria deberán ser efectuadas entre el primer día lectivo del primer ciclo y el último día lectivo del segundo ciclo de cada año.

5. Las Políticas Institucionales 2021-2025 promueven la inter- y transdisciplinariedad en su política 2.4, que señala: *Estimulará la flexibilidad curricular que potencie el trabajo inter-, multi- y transdisciplinario, en los ámbitos de la docencia, la investigación y la acción social, en concordancia con las condiciones presupuestarias de la Universidad; y específicamente en los objetivos: 2.4.2 Impulsar el desarrollo de las actividades sustantivas desde una estrategia multi-, inter- y transdisciplinaria, que considere la complejidad de los problemas y la diversidad de perspectivas de abordaje, y 2.4.4 Evaluar y ajustar el modelo de régimen académico para incentivar el trabajo colaborativo y el abordaje de los problemas, con perspectiva multi-, inter- y transdisciplinaria en las áreas sustantivas.*
6. La Dirección del Consejo Universitario, mediante la Circular CU-6-2024, del 5 de agosto de 2024, comunicó al decanato y a la dirección de cada unidad académica, así como a las direcciones de las sedes regionales, la propuesta de la Comisión de Estatuto Orgánico² referente a la reforma al artículo 28 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*. Además, se publicó en primera consulta a la comunidad universitaria en el *Alcance a La Gaceta Universitaria* n.º 58-2024, del 5 de agosto de 2024.
7. La comunidad universitaria contó con un plazo de treinta días hábiles (del 5 de agosto al 17 de setiembre de 2024) para pronunciarse respecto a esta reforma estatutaria y se recibieron respuestas de 10 personas o instancias, quienes estuvieron a favor de la propuesta de reforma al considerar pertinente que exista flexibilidad de participación de los miembros del Consejo Universitario en las distintas unidades académicas; sin embargo, conviene reiterar que lo que se pretende con esta reforma es que los miembros del Consejo Universitario tengan la posibilidad de apoyar *ad honorem* a cualquier unidad académica, sin que necesariamente tenga que ser su unidad base, siempre y cuando no interfiera en sus labores como miembros de este Órgano Colegiado.
8. El Consejo Universitario, en la sesión n.º 6898, artículo 16, del 15 de mayo de 2025, conoció el Dictamen CEO-1-2025, del 27 de febrero de 2025, y acordó publicar en segunda consulta a la comunidad universitaria, en *La Gaceta Universitaria*, la reforma al artículo 28 del *Estatuto*

² Propuesta de reforma al Estatuto Orgánico CEO-4-2024, del 23 de julio de 2024.

Orgánico de la Universidad de Costa Rica. La consulta fue publicada en *La Gaceta Universitaria* n.º 29-2025, del 26 de mayo de 2025.

9. La comunidad universitaria contó con un plazo de quince días hábiles para remitir sus observaciones (del 26 de mayo al 16 de junio de 2025), y no se recibieron respuestas, por lo que se continúa con el proceso de reforma estipulado en el *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*.
10. La reforma al artículo 28 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*, es la siguiente:

TEXTO VIGENTE EN EL <i>ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA</i>	TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 28.- Los miembros del Consejo Universitario, cuando sean docentes, ejercerán solo funciones académicas en la unidad respectiva siempre que estas no interfieran con sus labores como miembros del Consejo Universitario.	ARTÍCULO 28.- Los miembros del Consejo Universitario, cuando sean docentes, <u>podrán</u> ejercerán solo funciones académicas, en la unidad respectiva siempre que estas no interfieran con sus labores como miembros del Consejo Universitario.

ACUERDA

1. Aprobar en primera sesión ordinaria, de conformidad con lo que establece el artículo 236 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*, la siguiente reforma estatutaria al artículo 28, para su posterior decisión en la Asamblea Colegiada Representativa:

ARTÍCULO 28.- Los miembros del Consejo Universitario, cuando sean docentes, podrán ejercer funciones académicas, siempre que estas no interfieran con sus labores como miembros del Consejo Universitario.

2. Solicitar a la Dirección del Consejo Universitario que, en caso de que la Asamblea Colegiada Representativa apruebe la reforma al artículo 28 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*, para que los miembros del Consejo Universitario no se vean limitados para ejercer funciones académicas en cualquier unidad de la Institución, siempre que estas no interfieran con sus labores como miembros, se proceda con la siguiente modificación en el artículo 5 del *Reglamento del Consejo Universitario* para incluir una nueva atribución a las personas miembros del Consejo Universitario: *Ejercer funciones académicas ad honorem, siempre que estas no interfieran con sus labores como miembros del Consejo Universitario y esté en concordancia con la normativa sobre esta materia.*

ACUERDO FIRME.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS aclara que hay una discrepancia en la numeración entre el documento que leyó la Dra. Ilka Treminio Sánchez y la numeración que se consigna en el acta. Esto sucedió porque, al subir el documento a la nube, este contenía un número repetido; al arreglarlo en el acta cambia la numeración. Indica lo anterior a fin de explicar a las personas que escuchan la transmisión, así como a las personas miembro la discrepancia que se presentó en la numeración; no obstante, indica que se trata de un error material. Agradece por el apoyo, continúa con el siguiente punto de agenda.

ARTÍCULO 5

La señora directora, Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas, presenta la Propuesta Proyecto de Ley CU-142-2025 en torno al proyecto de ley denominado *Reforma del artículo 1 y adición de un capítulo V a la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres, Ley n.º 8589, del 25 de abril de 2007. Ley para el tratamiento de los crímenes de violencia de género por parte de los medios de comunicación*, Expediente legislativo n.º 24.563.

LA SRTA. ISELA CHACÓN NAVARRO expone un resumen ejecutivo de la Propuesta Proyecto de Ley CU-142-2025.

A continuación, se incluye la Propuesta Proyecto de Ley CU-142-2025:

El Consejo Universitario, en la sesión n.º 6876, artículo 2, inciso f), con base en el Análisis Preliminar de Proyectos de Ley CU-1-2025, decidió solicitar criterio sobre el proyecto de ley³ al Sistema de Medios de Comunicación, a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, al Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer, y a la Unidad de Equidad e Igualdad de Género⁴.

PROPUESTA DE ACUERDO

Luego del análisis del proyecto de *Reforma del artículo 1 y adición de un capítulo V a la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres, Ley n.º 8589, del 25 de abril de 2007. Ley para el tratamiento de los crímenes de violencia de género por parte de los medios de comunicación*, Expediente legislativo n.º 24.563, la Dirección del Consejo Universitario somete a consideración del plenario la siguiente propuesta de acuerdo:

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 88 de la *Constitución Política de la República de Costa Rica*, la Asamblea Legislativa, por medio de la Comisión Permanente Especial de la Mujer (oficio AL-CPMUJ-0706-2024), solicita el criterio institucional respecto al texto base del proyecto de *Reforma del artículo 1 y adición de un capítulo V a la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres, Ley n.º 8589, del 25 de abril de 2007. Ley para el tratamiento de los crímenes de violencia de género por parte de los medios de comunicación*, Expediente legislativo n.º 24.563.
2. La Rectoría, de conformidad con el *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*, artículo 30, inciso u), tramita la solicitud de la Asamblea Legislativa al Consejo Universitario para que se emita el criterio institucional sobre el proyecto de ley (oficio R-6939-2024).
3. La presente ley pretende tipificar diversos tipos de violencia relacionados con el papel de los medios de comunicación en la reproducción y aceptación de conductas violentas contra la mujer, esto debido a que tienen una gran incidencia nivel nacional, de manera que los juicios emitidos por estos y los estereotipos reproducidos se difunden dentro de la sociedad sin un cuestionamiento crítico, lo cual provoca que el interés por noticias amarillistas, sensacionalistas y calamitosas genere mayor culpabilidad y revictimización sobre la persona que sufre violencia de género y sus familiares.
4. El texto propuesto se compone de dos artículos: el primero reforma el artículo 1 de la *Ley de Penalización de la Violencia contra las mujeres*, Ley n.º 8589, del 25 de abril de 2007; y el segundo adiciona un capítulo V, titulado “Violencia simbólica y mediática”, al título II, “Delitos”, de la *Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres*, Ley n.º 8589, del 25 de abril de 2007 y corre la numeración.
5. La Oficina Jurídica, en la Opinión Jurídica OJ-83-2025, señala que en la presente iniciativa no se percibe un quebrantamiento del régimen constitucional de la Universidad de Costa Rica.

³ El proyecto de ley se encuentra en la Comisión Permanente Especial de la Mujer, en el lugar n.º 4 del orden del día de la sesión ordinaria n.º 11, del 1º de octubre de 2025, según consulta al Sistema de Información Legislativo del 8 de octubre de 2025.

⁴ Se recibieron oficios de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC-300-2025), del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer (CIEM-128-2025) y de la Unidad de Equidad e Igualdad de Género (R-2531-2025).

6. En el ámbito nacional, la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de Todas las Edades. Costa Rica 2017-2032 (PLANONI)⁵ reconoce que los medios de comunicación realizan una espectacularización de la violencia en general; y brindan un tratamiento sensacionalista, en el que se da la reproducción de prejuicios y estereotipos de género en todos los espacios de comunicación, incluidos los virtuales, lo cual provoca una deshumanización de estas e inclusive impacta a nivel social y genera sensaciones de parálisis e impotencia frente a la ocurrencia de estos actos (PLANONI, 2017).
7. Para la viabilidad del texto del proyecto de ley, las personas especialistas⁶ sugieren que se deben atender los siguientes aspectos:
 - 7.1. Revisar el uso de los conceptos “violencia de género”, “violencia machista” y “violencia contra las mujeres”. Aunque socialmente estos suelen equipararse, teóricamente, remiten a fenómenos particulares. Es importante señalar que dentro de la legislación costarricense el término reconocido es “violencia contra las mujeres”.
 - 7.2. Si bien el proyecto no menciona explícitamente el concepto de violencia política, este se encuentra implícito en su contenido, por lo que resulta pertinente incorporarlo de forma explícita en el artículo 1, como forma de violencia. Los medios de comunicación ejercen una influencia determinante al reproducir estereotipos de género, revictimizar a las mujeres y justificar indirectamente las agresiones, lo que conduce a su exclusión simbólica del espacio público. Esta exclusión no solo vulnera su dignidad, sino que restringe su participación política, social y cultural, tal como lo reconocen instrumentos internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, citados en la iniciativa. La narrativa mediática dista de ser neutral, ya que posee efectos políticos directos al moldear la opinión pública y condicionar el ejercicio de los derechos ciudadanos de las mujeres.
 - 7.3. Operacionalizar las definiciones: establecer de forma clara y objetiva los criterios que determinan cuándo un mensaje mediático constituye una violación. Esto implica definir casos concretos de lo que se considera reproducir “dominación, desigualdad y discriminación”, “estado de subordinación”, “promover la violencia contra la mujer como conducta aceptable”, “justificar la violencia de género”, “narrativa sensacionalista” o cuándo una expresión “revictimiza” (arts. 41 y 42).
 - 7.4. Robustecer los antecedentes, de manera que se enriquezca la contextualización mediante la inclusión de investigaciones e informes sobre el tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación, desarrollados tanto por instituciones académicas como sin fines de lucro. Esto fortalecerá la base argumentativa y demostrará una comprensión profunda del problema según los tipos de medios y violencia.
 - 7.5. Diferenciar y tipificar los medios y formatos: reconocer que los medios de comunicación no son un bloque uniforme; por lo que se debe especificar y tipificar los formatos comunicativos (prensa escrita, radio, TV, digital, redes sociales) y sus lógicas de producción (informativa, de entretenimiento), ya que la violencia mediática se expresa de manera diferente en cada uno.
 - 7.6. Precisar la redacción normativa, por ejemplo, el artículo 41 es impreciso, en lugar de “violencia producida por medio de roles de género y estereotipos”, debería decir “a través de la publicación de contenidos que reproducen sesgos y estereotipos de género”.
 - 7.7. Delimitar las conductas y su relación al tipificar las acciones que constituyen violencia simbólica y violencia mediática. Así como el impacto en la representación de las mujeres y la relación jerárquica entre ellas. También, es necesario tipificar sus formas de expresión específicas en los formatos mediáticos y las lógicas de producción de comunicación expresadas en la vida de las mujeres.
 - 7.8. Identificar y explicitar cuáles serían las instituciones encargadas del monitoreo, la recepción de denuncias, la tramitación y la sanción así como sus mecanismos de evaluación, con base en una tipificación de la violencia. Se recomienda la creación de una comisión de seguimiento a este proceso, con actores clave como

5 Instituto Nacional de las Mujeres. (2018). Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las Edades Costa Rica 2017-2032. EUNED. https://www.inamu.go.cr/documents/37629/80933/planovi_2017-2032.pdf/c568389e-152f-ec79-74f1-0dd9cfabb01f?t=1732776102541

6 De la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC-300-2025), del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer (CIEM-128-2025) y de la Unidad de Equidad e Igualdad de Género (R-2531-2025).

el Instituto Nacional de la Mujer, el Colegio de Periodistas de Costa Rica, representación de las carreras de comunicación de universidades públicas y privadas, y representantes de la sociedad civil.

- 7.9. Especificar el régimen sancionatorio en torno a la penalización de ambas formas de violencia; es indispensable indicar en qué consiste la multa emitida y detallar el procedimiento completo, desde el ente que le corresponde recibir y tramitar los reportes hasta la emisión de la sanción.
 - 7.10. Contemplar y explicitar cuáles serían los recursos presupuestarios y humanos destinados de forma permanente para las acciones de monitoreo, evaluación, análisis de los contenidos y capacitación.
 - 7.11. Incorporar un enfoque preventivo y formativo en lugar de un régimen puramente sancionatorio, que articule la formación en derechos humanos de las mujeres aplicados a la comunicación y la prevención de la violencia en espacios mediáticos, con un grado de supervisión por parte de la administración pública y de responsabilidad y compromiso por parte de los medios de comunicación. Se sugiere incluir artículos específicos de prevención y basarse en herramientas existentes, como la guía del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: *Guía para el abordaje noticioso de casos de femicidio desde una perspectiva de género y análisis interseccional*, en donde se detallan una serie de pasos para prevenir los discursos comunicacionales que reproducen y normalizan la violencia de género.
 - 7.12. Garantizar la capacitación especializada y continua en la temática para quienes deban tramitar, con el fin de superar las dificultades que las definiciones técnicas puedan generar en la práctica.
 - 7.13. Garantizar que la regulación proteja simultáneamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a la libertad de expresión y de prensa, para evitar cualquier ambigüedad que pueda generar conflicto entre estos derechos, debido a que es necesario reconocer la interdependencia de los derechos humanos y, por ende, la imposibilidad de anteponer un derecho sobre otro.
8. El Estado costarricense debe asumir una posición activa y fiscalizadora frente a la violencia simbólica y mediática contra las mujeres en los medios de comunicación. El contexto internacional evidencia la urgente necesidad de regular los discursos de odio en redes sociales y medios digitales, donde la violencia se exagera por la falta de normativa. Por lo que corresponde imperativamente que el país cuente con legislación específica para controlar y sancionar estas prácticas, en aras de garantizar la protección de los derechos de las mujeres en todos los espacios mediáticos.

ACUERDA

Comunicar a la Asamblea Legislativa, a la Comisión Permanente Especial de la Mujer, que la Universidad de Costa Rica recomienda aprobar el texto base del proyecto de *Reforma del artículo 1 y adición de un capítulo V a la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres, Ley n.º 8589, del 25 de abril de 2007. Ley para el tratamiento de los crímenes de violencia de género por parte de los medios de comunicación*, Expediente legislativo n.º 24.563, siempre que se incorporen las observaciones del considerando 7.

La Universidad de Costa Rica queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas para aportar en este proyecto de ley.

LA SRTA. ISELA CHACÓN NAVARRO agradece a la Mag. Rose Mary Fonseca González, asesora de la Unidad de Estudios, quien colaboró en la elaboración del dictamen. Asimismo, agradece a las escuelas que colaboraron con su criterio técnico. Da las gracias.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS somete a discusión el dictamen. Cede la palabra al Lic. William Méndez Garita.

EL LIC. WILLIAM MÉNDEZ GARITA destaca que este es un tema muy interesante. Se trata de un problema serio en las sociedades modernas. Evidentemente, desde un punto de vista de libertad de expresión, deben tener mucho cuidado cuando quieren insertarse en aspectos de medios de comunicación e indicarles qué deben hacer y qué no. Considera que la norma que se propone presenta ese pequeño

problema. Además, todas las observaciones lo llevan a la conclusión de que, más bien, se debería indicar *no aprobar hasta tanto se lleven a cabo todas esas correcciones*. En su criterio, el aspecto más importante es el número 8, el cual solicita proyectar de nuevo en la pantalla.

Procede a leer un extracto del considerando n.º 8, el cual señala:

El Estado costarricense debe asumir una posición activa y fiscalizadora frente a la violencia simbólica y mediática contra las mujeres en los medios de comunicación. El contexto internacional evidencia la urgente necesidad de regular los discursos de odio en redes sociales y medios digitales (...)

Afirma que ahí está la diferencia: la mayor parte de los medios de comunicación, formalmente establecidos como tales en Costa Rica, tienen su tratado deontológico, tienen su propio código periodístico y han sido capacitados por el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica y por otras instancias, precisamente en estos y muchos otros tratamientos de temas.

En lo personal, ha formado parte de muchas de estas actividades de capacitación en diferentes momentos, en virtud de que el problema principal se encuentra en los medios de comunicación que surgen en las redes sociales, cuya responsabilidad es oculta. Es decir, prácticamente, están fuera del control de la ciudadanía y, con mucha más razón, de las instituciones.

Por tal motivo, su preocupación es que no deben enfocarse en los medios de comunicación que son conocidos (tal como Canal 7, La Nación, La República, CRHoy.com, Columbia, entre otra gran cantidad de medios de comunicación), porque es usual que todos estos siempre estén dentro de los parámetros convencionales de respeto a los derechos de las mujeres, así como otros tipos de derechos. Inclusive, es evidente que cuando estos medios han cometido un error, están sujetos a la sanción pública e inclusive al llamado de los órganos de control de los medios de comunicación, tal como la Sala Constitucional, instancia en la que, precisamente, se han presentado recursos por estas circunstancias.

Explica que la Sala Constitucional ha reiterado, en muchas oportunidades, que existe una línea muy delgada entre el interés de avanzar en los derechos de ciertas poblaciones que han sido vulneradas por los medios de comunicación y el “pasarse” de la línea divisoria, en donde, más bien, pueden “caer” en los intentos de la sociedad de regular los medios de comunicación, pues se empieza con una materia, pero se puede terminar en otra.

De modo que esta es una materia que, en ocasiones, resulta difícil de entender, en torno a la compleja interrelación entre cuándo es libertad de expresión y cuándo es un abuso de la libertad de expresión, aspecto en el que deben tener precaución. En dicho sentido, comparte que, a lo largo de toda su vida, siempre ha sido muy enfático en que prefiere defender la libertad absoluta y no la libertad regulada. Posteriormente, en un café, les puede contar un caso que le generó mucho conflicto cuando él (el Lic. William Méndez Garita) salió a defender un medio de comunicación por una publicación que había realizado dicho medio.

En suma, si cree que deben regular esto en Costa Rica, deben tener normas previsorias, deben ser normas formativas de los periodistas, en donde los medios de comunicación se comprometan con una carta de principios tanto en esta materia como en otras materias importantísimas, tal como una que, en lo personal, le preocupa bastante: la niñez (además del tema de la mujer). Remarca que, en ocasiones, algunas publicaciones son muy insensibles en el abordaje de las temáticas de la niñez, y deben tener mucho cuidado con esto, fundamentalmente, en virtud de que se cuenta con un Código de la Niñez y la Adolescencia.

Por lo anterior, su solicitud es revisar el enfoque de la propuesta de acuerdo (irse por el “no aprobar”), por cuanto considera que todas las recomendaciones precisadas por las instancias de la Universidad son bastante entendibles. Esperaría que la Asamblea Legislativa los tome en cuenta, pero deben hacer la advertencia a la Asamblea Legislativa de que les gusta el proyecto, pero les gustaría que la Asamblea

lo haga; porque si no definen esa advertencia de los elementos que se están señalando y se indica como “aprobar” podría entenderse que hicieron un check, lo cual crearía una “autorización abierta”. En un tema tan delicado como es la libertad de expresión y de los medios, prefiere ser, en este sentido, cauteloso (“echarse un poquito para atrás”) y subrayar con cierto énfasis que, por favor, presten atención a lo que las personas expertas de la Universidad de Costa Rica han señalado. Se disculpa por extenderse en este tema.

****Se da un intercambio de opiniones y comentarios, fuera de actas, entre los miembros sobre correcciones de forma, para su incorporación en la propuesta de acuerdo.****

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS procede a la lectura de la propuesta de acuerdo, a saber:

*Comunicar a la Asamblea Legislativa, a la Comisión Permanente Especial de la Mujer, que la Universidad de Costa Rica recomienda **aprobar** el texto base del proyecto de Reforma del artículo 1 y adición de un capítulo V a la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres, Ley n.º 8589, del 25 de abril de 2007. Ley para el tratamiento de los crímenes de violencia de género por parte de los medios de comunicación, Expediente legislativo n.º 24.563, **siempre y cuando** se incorporen las observaciones del considerando 7.*

La Universidad de Costa Rica queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas para aportar en este proyecto de ley.

Seguidamente, somete a votación la propuesta de acuerdo, y se obtiene el siguiente resultado:

VOTAN A FAVOR: M. Sc. Jáiro Núñez Moya, Dr. Eduardo Calderón Obaldía, Dra. Ilka Treminio Sánchez, Sr. Fernán Orlich Rojas, Mag. Hugo Amores Vargas, Lic. William Méndez Garita, Srta. Isela Chacón Navarro, Ph. D. Sergio Salazar Villanea, Dr. Keilor Rojas Jiménez y Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas.

TOTAL: Diez votos.

EN CONTRA: Ninguno.

Por lo tanto, el Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 88 de la *Constitución Política de la República de Costa Rica*, la Asamblea Legislativa, por medio de la Comisión Permanente Especial de la Mujer (oficio AL-CPMUJ-0706-2024), solicita el criterio institucional respecto al texto base del proyecto de *Reforma del artículo 1 y adición de un capítulo V a la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres, Ley n.º 8589, del 25 de abril de 2007. Ley para el tratamiento de los crímenes de violencia de género por parte de los medios de comunicación*, Expediente legislativo n.º 24.563.
2. La Rectoría, de conformidad con el *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*, artículo 30, inciso u), tramita la solicitud de la Asamblea Legislativa al Consejo Universitario para que se emita el criterio institucional sobre el proyecto de ley (oficio R-6939-2024).
3. La presente ley pretende tipificar diversos tipos de violencia relacionados con el papel de los medios de comunicación en la reproducción y aceptación de conductas violentas contra la mujer, esto debido a que tienen una gran incidencia nivel nacional, de manera que los juicios emitidos por estos y los estereotipos reproducidos se difunden dentro de la sociedad sin un cuestionamiento crítico, lo cual provoca que el interés por noticias amarillistas, sensacionalistas y calamitosas genere mayor culpabilidad y revictimización sobre la persona que sufre violencia de género y sus familiares.

4. El texto propuesto se compone de dos artículos: el primero reforma el artículo 1 de la *Ley de Penalización de la Violencia contra las mujeres*, Ley n.º 8589, del 25 de abril de 2007; y el segundo adiciona un capítulo V, titulado “Violencia simbólica y mediática”, al título II, “Delitos”, de la *Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres*, Ley n.º 8589, del 25 de abril de 2007 y corre la numeración.
5. La Oficina Jurídica, en la Opinión Jurídica OJ-83-2025, señala que en la presente iniciativa no se percibe un quebrantamiento del régimen constitucional de la Universidad de Costa Rica.
6. En el ámbito nacional, la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de Todas las Edades. Costa Rica 2017-2032 (PLANOVI)⁷ reconoce que los medios de comunicación realizan una espectacularización de la violencia en general; y brindan un tratamiento sensacionalista, en el que se da la reproducción de prejuicios y estereotipos de género en todos los espacios de comunicación, incluidos los virtuales, lo cual provoca una deshumanización de estas e inclusive impacta a nivel social y genera sensaciones de parálisis e impotencia frente a la ocurrencia de estos actos (PLANOVI, 2017).
7. Para la viabilidad del texto del proyecto de ley, las personas especialistas⁸ sugieren que se deben atender los siguientes aspectos:
 - 7.1. Revisar el uso de los conceptos “violencia de género”, “violencia machista” y “violencia contra las mujeres”. Aunque socialmente estos suelen equipararse, teóricamente, remiten a fenómenos particulares. Es importante señalar que dentro de la legislación costarricense el término reconocido es “violencia contra las mujeres”.
 - 7.2. Si bien el proyecto no menciona explícitamente el concepto de violencia política, este se encuentra implícito en su contenido, por lo que resulta pertinente incorporarlo de forma explícita en el artículo 1, como forma de violencia. Los medios de comunicación ejercen una influencia determinante al reproducir estereotipos de género, revictimizar a las mujeres y justificar indirectamente las agresiones, lo que conduce a su exclusión simbólica del espacio público. Esta exclusión no solo vulnera su dignidad, sino que restringe su participación política, social y cultural, tal como lo reconocen instrumentos internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, citados en la iniciativa. La narrativa mediática dista de ser neutral, ya que posee efectos políticos directos al moldear la opinión pública y condicionar el ejercicio de los derechos ciudadanos de las mujeres.
 - 7.3. Operacionalizar las definiciones: establecer de forma clara y objetiva los criterios que determinan cuándo un mensaje mediático constituye una violación. Esto implica definir casos concretos de lo que se considera reproducir “dominación, desigualdad y discriminación”, “estado de subordinación”, “promover la violencia contra la mujer como conducta aceptable”, “justificar la violencia de género”, “narrativa sensacionalista” o cuándo una expresión “revictimiza” (arts. 41 y 42).
 - 7.4. Robustecer los antecedentes, de manera que se enriquezca la contextualización mediante la inclusión de investigaciones e informes sobre el tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación, desarrollados tanto por instituciones académicas como sin fines de lucro. Esto fortalecerá la base argumentativa y demostrará una comprensión profunda del problema según los tipos de medios y violencia.

7 Instituto Nacional de las Mujeres. (2018). Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las Edades Costa Rica 2017-2032. EUNED. https://www.inamu.go.cr/documents/37629/80933/planovi_2017-2032.pdf/c568389e-152f-ec79-74f1-0dd9cfabb01f?t=1732776102541

8 De la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC-300-2025), del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer (CIEM-128-2025) y de la Unidad de Equidad e Igualdad de Género (R-2531-2025).

- 7.5. **Diferenciar y tipificar los medios y formatos: reconocer que los medios de comunicación no son un bloque uniforme; por lo que se debe especificar y tipificar los formatos comunicativos (prensa escrita, radio, TV, digital, redes sociales) y sus lógicas de producción (informativa, de entretenimiento), ya que la violencia mediática se expresa de manera diferente en cada uno.**
- 7.6. **Precisar la redacción normativa, por ejemplo, el artículo 41 es impreciso, en lugar de “violencia producida por medio de roles de género y estereotipos”, debería decir “a través de la publicación de contenidos que reproducen sesgos y estereotipos de género”.**
- 7.7. **Delimitar las conductas y su relación al tipificar las acciones que constituyen violencia simbólica y violencia mediática. Así como el impacto en la representación de las mujeres y la relación jerárquica entre ellas. También, es necesario tipificar sus formas de expresión específicas en los formatos mediáticos y las lógicas de producción de comunicación expresadas en la vida de las mujeres.**
- 7.8. **Identificar y explicitar cuáles serían las instituciones encargadas del monitoreo, la recepción de denuncias, la tramitación y la sanción así como sus mecanismos de evaluación, con base en una tipificación de la violencia. Se recomienda la creación de una comisión de seguimiento a este proceso, con actores clave como el Instituto Nacional de la Mujer, el Colegio de Periodistas de Costa Rica, representación de las carreras de comunicación de universidades públicas y privadas, y representantes de la sociedad civil.**
- 7.9. **Especificar el régimen sancionatorio en torno a la penalización de ambas formas de violencia; es indispensable indicar en qué consiste la multa emitida y detallar el procedimiento completo, desde el ente que le corresponde recibir y tramitar los reportes hasta la emisión de la sanción.**
- 7.10. **Contemplar y explicitar cuáles serían los recursos presupuestarios y humanos destinados de forma permanente para las acciones de monitoreo, evaluación, análisis de los contenidos y capacitación.**
- 7.11. **Incorporar un enfoque preventivo y formativo en lugar de un régimen puramente sancionatorio, que articule la formación en derechos humanos de las mujeres aplicados a la comunicación y la prevención de la violencia en espacios mediáticos, con un grado de supervisión por parte de la administración pública y de responsabilidad y compromiso por parte de los medios de comunicación. Se sugiere incluir artículos específicos de prevención y basarse en herramientas existentes, como la guía del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: *Guía para el abordaje noticioso de casos de femicidio desde una perspectiva de género y análisis interseccional*, en donde se detallan una serie de pasos para prevenir los discursos comunicacionales que reproducen y normalizan la violencia de género.**
- 7.12. **Garantizar la capacitación especializada y continua en la temática para quienes deban tramitar, con el fin de superar las dificultades que las definiciones técnicas puedan generar en la práctica.**
- 7.13. **Garantizar que la regulación proteja simultáneamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a la libertad de expresión y de prensa, para evitar cualquier ambigüedad que pueda generar conflicto entre estos derechos, debido a que es necesario reconocer la interdependencia de los derechos humanos y, por ende, la imposibilidad de anteponer un derecho sobre otro.**

8. El Estado costarricense debe asumir una posición activa y fiscalizadora frente a la violencia simbólica y mediática contra las mujeres en los medios de comunicación. El contexto internacional evidencia la urgente necesidad de regular los discursos de odio en redes sociales y medios digitales, donde la violencia se exagera por la falta de normativa. Por lo que corresponde imperativamente que el país cuente con legislación específica para controlar y sancionar estas prácticas, en aras de garantizar la protección de los derechos de las mujeres en todos los espacios mediáticos.

ACUERDA

Comunicar a la Asamblea Legislativa, a la Comisión Permanente Especial de la Mujer, que la Universidad de Costa Rica recomienda aprobar el texto base del proyecto de *Reforma del artículo 1 y adición de un capítulo V a la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres, Ley n.º 8589, del 25 de abril de 2007. Ley para el tratamiento de los crímenes de violencia de género por parte de los medios de comunicación*, Expediente legislativo n.º 24.563, siempre y cuando se incorporen las observaciones del considerando 7.

La Universidad de Costa Rica queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas para aportar en este proyecto de ley.

ACUERDO FIRME.

****A las diez horas y cinco minutos, el Consejo Universitario hace un receso

A las diez horas y treinta y nueve minutos, se reanuda la sesión, con la presencia de los siguientes miembros: M. Sc. Jáiro Núñez Moya, Dr. Eduardo Calderón Obaldía, Dra. Ilka Treminio Sánchez, Sr. Fernán Orlich Rojas, Mag. Hugo Amores Vargas, Lic. William Méndez Garita, Srta. Isela Chacón Navarro, Ph. D. Sergio Salazar Villanea, Dr. Keilor Rojas Jiménez y Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas. ****

ARTÍCULO 6

La Comisión de Docencia y Posgrado presenta el Dictamen CDP-10-2025 sobre analizar la solicitud de la Escuela de Formación Docente de cambio de nombre oficial del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum por Departamento de Educación Secundaria.

EL PH. D. SERGIO SALAZAR VILLANEA expone el dictamen, que, a la letra, dice:

ANTECEDENTES

1. El Consejo Universitario, en la sesión n.º 2762, artículo 14, del 2 de marzo de 1981, aprobó el *Reglamento sobre departamentos, secciones y cursos*, el cual fue reformado por este Órgano en la sesión n.º 3180, artículo 8, del 15 de mayo de 1985.
2. El Consejo Universitario, en la sesión n.º 3629, artículo 7, del 28 de febrero de 1990, acordó (...) *aprobar la propuesta del Consejo de Área de Ciencias Sociales en el sentido de transformar la sección de Experiencia Profesional y Currículum en el Departamento del mismo nombre de la Escuela de Formación Docente*.
3. La Asamblea de la Escuela de Formación Docente, en la sesión n.º 03-2024, del 26 de junio de 2024, tomó el acuerdo de solicitar el cambio de nombre oficial del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum por Departamento de Educación Secundaria (oficio EFD-1394-2024, del 9 de julio de 2024).

4. El Consejo de Área de Ciencias Sociales, en la sesión CACS-84-2024, del 11 de setiembre de 2024, conoce y concuerda con la Escuela de Formación Docente en realizar el cambio de nombre oficial del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum por Departamento de Educación Secundaria.
5. El Consejo de Área de Ciencias Sociales emite la solicitud al Consejo Universitario para el cambio de nombre oficial del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum por Departamento de Educación Secundaria (oficio CACS-18-2025, 25 de marzo de 2025).
6. La Dirección del Consejo Universitario trasladó la solicitud de la Escuela de Formación Docente para que fuera analizada por la Comisión de Docencia y Posgrado (Pase CU-63-2025, 12 de junio de 2025).

ANÁLISIS

I. Origen y propósito del caso

El presente estudio, orientado al cambio de nombre oficial del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum por el de Departamento de Educación Secundaria, surge a partir de la solicitud planteada por la Escuela de Formación Docente. El propósito de esta gestión es garantizar que la denominación del departamento represente de manera objetiva y precisa las carreras que lo integran, todas ellas relacionadas con la formación de profesionales en el ámbito de la educación media o secundaria.

II. Normativa

El *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica* establece:

ARTÍCULO 8.- La Universidad de Costa Rica está constituida por facultades, escuelas, departamentos, secciones, sedes regionales, institutos y centros de investigación, estaciones experimentales, unidades especiales de investigación y unidades de apoyo a la investigación y servicios administrativos y técnicos, ubicados en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio y en otras regiones que fuesen escogidas por la Institución para el mejor cumplimiento de sus funciones [énfasis añadido].

ARTÍCULO 107.- Existirán además, en la Universidad de Costa Rica, departamentos y secciones que agrupan cátedras afines. Los detalles de estas unidades se encuentran en el reglamento correspondiente.

Tal como se desprende de lo dispuesto en los artículos anteriores, los departamentos y secciones forman parte esencial de la estructura académica de la Universidad de Costa Rica. Estas unidades se constituyen a partir de cátedras afines, lo que permite una mejor organización y especialización en las áreas del conocimiento que abarcan. Asimismo, los departamentos y secciones se encuentran sujetos a un cuerpo normativo específico que asegura así la adecuada integración de estas unidades en el conjunto de la Institución, el *Reglamento sobre departamentos, secciones y cursos*.

Los primeros tres artículos del *Reglamento sobre departamentos, secciones y cursos* establecen que los departamentos constituyen divisiones académicas especializadas que agrupan a profesores y cursos de disciplinas iguales o afines, con el propósito de desarrollar principalmente funciones de docencia y, cuando corresponda, también de investigación y acción social. Además, disponen que estos, a su vez, dependen de una facultad (no dividida en escuelas), de una escuela o de una sede regional. Su creación debe responder a un criterio de eficiencia, enmarcado dentro de consideraciones tanto académicas como económicas.

En cuanto a su establecimiento, la creación de un departamento debe ser propuesta por la Asamblea de la Escuela o de la facultad ante el respectivo Consejo de Área, o por la Asamblea de la Sede Regional ante el Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Docencia. En ambos casos, la propuesta debe ser conocida y aprobada por el Consejo Universitario.

Respecto a sus funciones, los departamentos tienen a su cargo, entre otras tareas, efectuar reuniones periódicas con la participación de todo el personal docente adscrito; proponer los programas de los cursos departamentales; analizar, cuando corresponda, los proyectos de investigación y acción social para su recomendación a las autoridades académicas superiores; estimular el mejoramiento académico de su personal; presentar las ternas para el nombramiento de la persona que ocupe la dirección del departamento; organizar, administrar y evaluar los recursos físicos necesarios para el desarrollo de sus actividades; y emitir pronunciamientos técnicos sobre los asuntos que correspondan a su campo de especialidad.

Por lo anterior, los departamentos se configuran como unidades básicas de organización académica, cuyo establecimiento debe responder a criterios de pertinencia y eficiencia, y cuyas funciones abarcan la gestión docente, el apoyo a la investigación y acción social, el fortalecimiento del personal académico y la administración de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

III. Criterio de la asesoría legal del Consejo Universitario

El asesor legal del Consejo Universitario, por medio del Criterio Legal CU-10-2025, del 29 de mayo de 2025, manifestó que el cambio de nombre oficial del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum por Departamento de Educación Secundaria cumple con los requisitos establecidos en el *Reglamento sobre departamentos, secciones y cursos*, ya que fue aprobada en Asamblea de Escuela y, posteriormente, avalada por el Consejo de Área de Ciencias Sociales.

IV. Solicitud de la Escuela de Formación Docente

Con el propósito de cumplir con lo que establece el *Reglamento sobre departamentos, secciones y cursos*, artículo 2, la Asamblea de la Escuela de Formación Docente, en la sesión 03-2024, del 26 de junio de 2024, acordó el cambio de nombre oficial del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum por Departamento de Educación Secundaria. Seguidamente, el Consejo de Área de Ciencias Sociales, en su sesión CACS-84-2024, conoció y acordó aprobar la solicitud de cambio de nombre del departamento.

Una vez analizados los acuerdos de ambos órganos, la Comisión de Docencia y Posgrado (CDP) solicitó⁹ profundizar en los criterios académicos, organizativos y administrativos que sustentan el cambio de nombre del departamento. En atención a ello, se sintetizan a continuación los razonamientos expuestos por la Escuela de Formación Docente en el oficio EFD-1413-2025, del 29 de julio de 2025:

A) Justificación sobre la propuesta

El nombre oficial vigente, Departamento de Experiencia Profesional y Currículum, no refleja con precisión el objeto de estudio ni el nivel educativo en el que se centran las carreras que lo integran. Dicha denominación carece de especificidad, pues no alude directamente a la enseñanza en el nivel de educación media o secundaria, que constituye el foco disciplinar y profesional de las diez carreras adscritas al departamento. Este desfase nominal genera inconsistencias con respecto a la identidad académica y dificulta la alineación con la clasificación interna de la Escuela de Formación Docente (donde ya existen instancias con denominaciones directas: Educación Preescolar, Educación Primaria y Docencia Universitaria).

El cambio de nombre a Departamento de Educación Secundaria permitirá:

- Alinear formalmente la denominación con el quehacer académico real de la unidad.
- Facilitar la identificación interna y externa de las carreras de enseñanza en secundaria.
- Brindar mayor coherencia institucional con la organización de la Escuela de Formación Docente.
- Formalizar una práctica ya consolidada, pues desde la creación del departamento (1990) se ha venido usando de manera informal la denominación “Educación Secundaria” en actas, documentación oficial e incluso en la dirección de correo institucional. El impacto esperado no implica reestructuración organizativa, ni cambios en la atención del estudiantado, ni en la formación profesional o curricular, dado que las funciones y dinámicas académicas permanecerán idénticas.

B) Información académica

Con el fin de dimensionar de manera clara las condiciones académicas del Departamento de Educación Secundaria, se presenta un cuadro comparativo que resume la información más relevante correspondiente al I y II ciclo lectivo. Dicho cuadro integra los datos sobre cursos ofertados, demanda estudiantil, personal docente, plazas disponibles y contrataciones adicionales, lo que permite visualizar de forma sintética la dinámica académica de la unidad.

9 Con el oficio CDP-17-2025, del 18 de junio de 2025.

Cuadro1. Comparativo de información académica

Categoría	I Ciclo	II Ciclo
Cursos propios y de servicio	35 cursos (58 grupos) 3 de servicio 3 mixtos	28 cursos (50 grupos) 3 de servicio 3 mixtos
Demanda estudiantil	1.424 estudiantes	881 estudiantes (Total anual: 2.305)
Docentes asignados	43 personas	37 personas
Plazas docentes	10 en propiedad 2 en reserva de tiempo de estudios 27 interinas	Igual distribución (considerando ciclos)
Contrataciones adicionales	N/A	80 interinos (supervisión de experiencias)

Fuente: Elaboración propia a partir del oficio EFD-1413-2025.

La amplitud de la oferta académica del departamento lo convierte en un referente a nivel nacional, pues incluye bachilleratos y licenciaturas en la Enseñanza del Castellano y la Literatura, Ciencias Naturales, Estudios Sociales y Educación Cívica, Matemática, Música, Inglés, Francés, Artes Plásticas, Filosofía y Psicología. Esta diversidad no solo fortalece el perfil disciplinar de la Escuela de Formación Docente, sino que también contribuye a la formación de profesionales especializados en las distintas áreas de la educación secundaria.

C) Información administrativa

En el plano administrativo, el Departamento de Educación Secundaria cuenta con una persona secretaria a tiempo completo y medio tiempo para la persona que ejerce la coordinación. Esta asignación es semejante a la de otras instancias de la Escuela de Formación Docente: el Departamento de Docencia Universitaria dispone de una persona secretaria a tiempo completo y medio tiempo para la dirección, mientras que las secciones de Educación Preescolar y Educación Primaria cuentan con una persona secretaria a tiempo completo y un cuarto de tiempo para la coordinación respectiva.

La oficialización del cambio de nombre no requiere recursos adicionales. No se prevé la necesidad de nuevas plazas docentes o administrativas, ni de equipo o infraestructura. En consecuencia, la dinámica organizativa y funcional del departamento permanecerá sin modificaciones, se limitará a la gestión al ajuste nominal solicitado.

V. Reflexiones de la comisión

Luego del análisis de la normativa aplicable, de la solicitud presentada por la Escuela de Formación Docente y de la información adicional requerida por la Comisión de Docencia y Posgrado (CDP), esta comisión considera pertinente el cambio del nombre oficial del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum por Departamento de Educación Secundaria, en concordancia con la potestad conferida en el artículo 2 del *Reglamento sobre departamentos, secciones y cursos*.

En atención al análisis realizado, la comisión expone los siguientes criterios que fundamentan la propuesta de cambio de nombre del departamento:

a) Cumplimiento de la normativa universitaria:

La CDP constató que la nueva denominación no altera la estructura organizativa vigente, ni modifica las funciones ni la dependencia jerárquica del departamento. Asimismo, verificó que su implementación no demanda recursos adicionales, lo que asegura el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 del *Reglamento sobre departamentos, secciones y cursos*. Además, la comisión confirmó que la solicitud presentada por la Escuela de Formación Docente se ajusta al procedimiento previsto en dicho artículo, al haber sido aprobada en Asamblea de Escuela y, posteriormente, avalada por el Consejo de Área de Ciencias Sociales, de manera que cumple con los requisitos reglamentarios establecidos.

b) Pertinencia académica:

La CDP estimó que el cambio de nombre permite adecuar la denominación oficial a la naturaleza real de las carreras que integran el departamento, todas ellas orientadas a la enseñanza en educación media o secundaria. De este modo, se valoró que la denominación de Departamento de Educación Secundaria refleja con mayor claridad el objeto de estudio, fortalece la pertinencia disciplinar e integra de forma más precisa los contenidos propios de la formación profesional en dicho nivel educativo, lo cual se alinea con las necesidades del sistema educativo costarricense.

c) Pertinencia económica:

La CDP consideró que el ajuste nominal no implica modificaciones en la asignación presupuestaria ni en la dotación de personal o infraestructura. En consecuencia, concluyó que se trata de una gestión con nulo impacto financiero que contribuye a mejorar la coherencia académica y administrativa del departamento sin generar nuevas cargas institucionales.

PROPUESTA DE ACUERDO

La Comisión de Docencia y Posgrado presenta al plenario la siguiente propuesta de acuerdo:

CONSIDERANDO QUE:

1. El Consejo Universitario, en la sesión n.º 2762, artículo 14, del 2 de marzo de 1981, aprobó el *Reglamento sobre departamentos, secciones y cursos*, el cual fue reformado por este Órgano en la sesión n.º 3180, artículo 8, del 15 de mayo de 1985.
2. El Consejo Universitario, en la sesión n.º 3629, artículo 7, del 28 de febrero de 1990, acordó (...) *aprobar la propuesta del Consejo de Área de Ciencias Sociales en el sentido de transformar la sección de Experiencia Profesional y Currículum en el Departamento del mismo nombre de la Escuela de Formación Docente*.
3. La Asamblea de la Escuela de Formación Docente, en la sesión n.º 03-2024, del 26 de junio de 2024, tomó el acuerdo de solicitar el cambio de nombre oficial del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum por Departamento de Educación Secundaria (oficio EFD-1394-2024, del 9 de julio de 2024).
4. El Consejo de Área de Ciencias Sociales, en la sesión CACS-84-2024, del 11 de setiembre de 2024, conoce y concuerda con la Escuela de Formación Docente en realizar el cambio de nombre oficial del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum por Departamento de Educación Secundaria.
5. El Consejo de Área de Ciencias Sociales emite la solicitud al Consejo Universitario para el cambio de nombre oficial del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum por Departamento de Educación Secundaria (oficio CACS-18-2025, 25 de marzo de 2025).
6. La Dirección del Consejo Universitario trasladó la solicitud de la Escuela de Formación Docente para que fuera analizada por la Comisión de Docencia y Posgrado (Pase CU-63-2025, 12 de junio de 2025).
7. El presente estudio está orientado al cambio de nombre oficial del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum por el de Departamento de Educación Secundaria, que surge a partir de la solicitud planteada por la Escuela de Formación Docente. El propósito de esta gestión es garantizar que la denominación del departamento represente de manera objetiva y precisa las carreras que lo integran, todas ellas orientadas a la formación de profesionales en el ámbito de la educación media o secundaria.
8. Según lo dispuesto en los artículos 8 y 107 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*, los departamentos y secciones forman parte esencial de la estructura académica universitaria, en tanto constituyen agrupaciones de cátedras afines que facilitan la organización y especialización de las disciplinas, y que se rigen por lo establecido en el *Reglamento sobre departamentos, secciones y cursos*, lo cual garantiza su adecuada integración al conjunto de la Institución.

9. Los departamentos, según el *Reglamento sobre departamentos, secciones y cursos*, son divisiones académicas especializadas que agrupan a profesores y cursos de disciplinas iguales o afines, cuya creación debe responder a criterios de pertinencia y eficiencia (enmarcados dentro de consideraciones tanto académicas como económicas), y que cumplen funciones esenciales de docencia, investigación, acción social y administración de recursos.
10. El asesor legal del Consejo Universitario, por medio del Criterio Legal CU-10-2025, del 29 de mayo de 2025, manifestó que el cambio de nombre oficial del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum por Departamento de Educación Secundaria cumple con los requisitos establecidos en el *Reglamento sobre departamentos, secciones y cursos*, ya que fue aprobado en Asamblea de Escuela y, posteriormente, avalado por el Consejo de Área de Ciencias Sociales.
11. Mediante el oficio CDP-17-2025, del 18 de junio de 2025, la Comisión de Docencia y Posgrado solicitó a la Escuela de Formación Docente profundizar en los criterios académicos, organizativos y administrativos que fundamentan el cambio de nombre oficial del departamento. En atención a dicha solicitud, la escuela expuso sus razonamientos en el oficio EFD-1413-2025, del 29 de julio de 2025.
12. El nombre oficial vigente, Departamento de Experiencia Profesional y Currículum, no refleja con precisión el objeto de estudio ni el nivel educativo en el que se centran las carreras que lo integran. Dicha denominación carece de especificidad, pues no alude directamente a la enseñanza en el nivel de educación media o secundaria, que constituye el foco disciplinar y profesional de las diez carreras adscritas al departamento. Este desfase nominal genera inconsistencias con respecto a la identidad académica y dificulta la alineación con la clasificación interna de la Escuela de Formación Docente (donde ya existen instancias con denominaciones directas: Educación Preescolar, Educación Primaria y Docencia Universitaria).
13. El cambio de nombre a Departamento de Educación Secundaria, según criterio de la unidad académica, permitirá alinear formalmente la denominación con el quehacer académico real de la unidad, facilitar la identificación interna y externa de las carreras de enseñanza en secundaria, brindar mayor coherencia institucional con la organización de la Escuela de Formación Docente y, además, formalizar una práctica ya consolidada desde la creación del departamento en 1990, pues en actas, documentación oficial e, incluso, en la dirección de correo institucional se ha venido utilizando de manera informal dicha denominación; todo lo anterior, sin implicar reestructuración organizativa, ni cambios en la atención del estudiantado, ni en los procesos de formación profesional o curricular, dado que las funciones y dinámicas académicas permanecerán idénticas.
14. En el plano administrativo, el Departamento de Educación Secundaria cuenta con una persona secretaria a tiempo completo y medio tiempo para la persona que ejerce la coordinación. Esta asignación es semejante a la de otras instancias de la Escuela de Formación Docente: el Departamento de Docencia Universitaria dispone de una persona secretaria a tiempo completo y medio tiempo para la dirección, mientras que las secciones de Educación Preescolar y Educación Primaria cuentan con una persona secretaria a tiempo completo y un cuarto de tiempo para la coordinación respectiva. La oficialización del cambio de nombre no requiere recursos adicionales. La Escuela de Formación Docente no prevé la necesidad de nuevas plazas docentes o administrativas, ni de equipo o infraestructura. En consecuencia, la dinámica organizativa y funcional del departamento permanecerá sin modificaciones, se limitará a la gestión al ajuste nominal solicitado.
15. La Comisión de Docencia y Posgrado constató que la nueva denominación no altera la estructura organizativa vigente, ni modifica las funciones o la dependencia jerárquica del departamento. Asimismo, verificó que su implementación no demanda recursos adicionales, lo que asegura el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 del *Reglamento sobre departamentos, secciones y cursos*. Además, la comisión confirmó que la solicitud presentada por la Escuela de Formación Docente se ajusta al procedimiento previsto en dicho artículo, al haber sido aprobada en Asamblea de Escuela y posteriormente avalada por el Consejo de Área de Ciencias Sociales, cumpliendo así con los requisitos reglamentarios establecidos.
16. La Comisión de Docencia y Posgrado estimó que el cambio de nombre permite adecuar la denominación oficial a la naturaleza real de las carreras que integran el departamento, todas ellas orientadas a la enseñanza en educación media o secundaria. De este modo, se valoró que la denominación de Departamento de Educación Secundaria refleja con mayor claridad el objeto de estudio, fortalece la pertinencia disciplinar e integra de forma más precisa los contenidos propios de la formación profesional en dicho nivel educativo, lo cual se alinea con las necesidades del sistema educativo costarricense.

17. La Comisión de Docencia y Posgrado consideró que el ajuste nominal no implica modificaciones en la asignación presupuestaria ni en la dotación de personal o infraestructura. En consecuencia, concluyó que se trata de una gestión con nulo impacto financiero que contribuye a mejorar la coherencia académica y administrativa del departamento sin generar nuevas cargas institucionales.
18. Luego del análisis de la normativa aplicable, de la solicitud presentada por la Escuela de Formación Docente y de la información adicional requerida por la Comisión de Docencia y Posgrado, dicha comisión considera pertinente el cambio del nombre oficial del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum por Departamento de Educación Secundaria, en concordancia con la potestad conferida en el artículo 2 del *Reglamento sobre departamentos, secciones y cursos*.

ACUERDA

Aprobar el cambio de nombre del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum, de la Escuela de Formación Docente, para que, en adelante, sea denominado como Departamento de Educación Secundaria.

EL PH. D. SERGIO SALAZAR VILLANEA precisa que el dictamen está firmado por el Dr. Keilor Rojas Jiménez, la Dra. Ilka Treminio Sánchez, la M. Sc. Esperanza Tasies Castro, el Sr. Fernán Orlich Rojas, el M. Sc. Jáírol Núñez Moya y su persona, en calidad de coordinador de la comisión.

Agradece a la Mag. Joselyn Valverde Monestel, asesora e investigadora de la Unidad de Estudios del Consejo Universitario, por la elaboración del dictamen. Da las gracias.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS, al no haber comentarios sobre la propuesta de acuerdo respecto al cambio de nombre a “Departamento de Educación Secundaria”, somete a votación la propuesta de acuerdo, y se obtiene el siguiente resultado:

VOTAN A FAVOR: M. Sc. Jáírol Núñez Moya, Dr. Eduardo Calderón Obaldía, Dra. Ilka Treminio Sánchez, Sr. Fernán Orlich Rojas, Mag. Hugo Amores Vargas, Lic. William Méndez Garita, Srta. Isela Chacón Navarro, Ph. D. Sergio Salazar Villanea, Dr. Keilor Rojas Jiménez y Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas.

TOTAL: Diez votos.

EN CONTRA: Ninguno.

Por lo tanto, el Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. El Consejo Universitario, en la sesión n.º 2762, artículo 14, del 2 de marzo de 1981, aprobó el *Reglamento sobre departamentos, secciones y cursos*, el cual fue reformado por este Órgano en la sesión n.º 3180, artículo 8, del 15 de mayo de 1985.
2. El Consejo Universitario, en la sesión n.º 3629, artículo 7, del 28 de febrero de 1990, acordó (...) *aprobar la propuesta del Consejo de Área de Ciencias Sociales en el sentido de transformar la sección de Experiencia Profesional y Currículum en el Departamento del mismo nombre de la Escuela de Formación Docente*.
3. La Asamblea de la Escuela de Formación Docente, en la sesión n.º 03-2024, del 26 de junio de 2024, tomó el acuerdo de solicitar el cambio de nombre oficial del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum por Departamento de Educación Secundaria (oficio EFD-1394-2024, del 9 de julio de 2024).
4. El Consejo de Área de Ciencias Sociales, en la sesión CACS-84-2024, del 11 de setiembre de 2024, conoce y concuerda con la Escuela de Formación Docente en realizar el cambio de nombre oficial

del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum por Departamento de Educación Secundaria.

5. El Consejo de Área de Ciencias Sociales emite la solicitud al Consejo Universitario para el cambio de nombre oficial del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum por Departamento de Educación Secundaria (oficio CACS-18-2025, 25 de marzo de 2025).
6. La Dirección del Consejo Universitario trasladó la solicitud de la Escuela de Formación Docente para que fuera analizada por la Comisión de Docencia y Posgrado (Pase CU-63-2025, 12 de junio de 2025).
7. El presente estudio está orientado al cambio de nombre oficial del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum por el de Departamento de Educación Secundaria, que surge a partir de la solicitud planteada por la Escuela de Formación Docente. El propósito de esta gestión es garantizar que la denominación del departamento represente de manera objetiva y precisa las carreras que lo integran, todas ellas orientadas a la formación de profesionales en el ámbito de la educación media o secundaria.
8. Según lo dispuesto en los artículos 8 y 107 del *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*, los departamentos y secciones forman parte esencial de la estructura académica universitaria, en tanto constituyen agrupaciones de cátedras afines que facilitan la organización y especialización de las disciplinas, y que se rigen por lo establecido en el *Reglamento sobre departamentos, secciones y cursos*, lo cual garantiza su adecuada integración al conjunto de la Institución.
9. Los departamentos, según el *Reglamento sobre departamentos, secciones y cursos*, son divisiones académicas especializadas que agrupan a profesores y cursos de disciplinas iguales o afines, cuya creación debe responder a criterios de pertinencia y eficiencia (enmarcados dentro de consideraciones tanto académicas como económicas), y que cumplen funciones esenciales de docencia, investigación, acción social y administración de recursos.
10. El asesor legal del Consejo Universitario, por medio del Criterio Legal CU-10-2025, del 29 de mayo de 2025, manifestó que el cambio de nombre oficial del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum por Departamento de Educación Secundaria cumple con los requisitos establecidos en el *Reglamento sobre departamentos, secciones y cursos*, ya que fue aprobado en Asamblea de Escuela y, posteriormente, avalado por el Consejo de Área de Ciencias Sociales.
11. Mediante el oficio CDP-17-2025, del 18 de junio de 2025, la Comisión de Docencia y Posgrado solicitó a la Escuela de Formación Docente profundizar en los criterios académicos, organizativos y administrativos que fundamentan el cambio de nombre oficial del departamento. En atención a dicha solicitud, la escuela expuso sus razonamientos en el oficio EFD-1413-2025, del 29 de julio de 2025.
12. El nombre oficial vigente, Departamento de Experiencia Profesional y Currículum, no refleja con precisión el objeto de estudio ni el nivel educativo en el que se centran las carreras que lo integran. Dicha denominación carece de especificidad, pues no alude directamente a la *enseñanza en el nivel de educación media o secundaria*, que constituye el foco disciplinar y profesional de las diez carreras adscritas al departamento. Este desfase nominal genera inconsistencias con respecto a la identidad académica y dificulta la alineación con la clasificación interna de la Escuela de Formación Docente (donde ya existen instancias con denominaciones directas: Educación Preescolar, Educación Primaria y Docencia Universitaria).

13. El cambio de nombre a Departamento de Educación Secundaria, según criterio de la unidad académica, permitirá alinear formalmente la denominación con el quehacer académico real de la unidad, facilitar la identificación interna y externa de las carreras de enseñanza en secundaria, brindar mayor coherencia institucional con la organización de la Escuela de Formación Docente y, además, formalizar una práctica ya consolidada desde la creación del departamento en 1990, pues en actas, documentación oficial e, incluso, en la dirección de correo institucional se ha venido utilizando de manera informal dicha denominación; todo lo anterior, sin implicar reestructuración organizativa, ni cambios en la atención del estudiantado, ni en los procesos de formación profesional o curricular, dado que las funciones y dinámicas académicas permanecerán idénticas.
14. En el plano administrativo, el Departamento de Educación Secundaria cuenta con una persona secretaria a tiempo completo y medio tiempo para la persona que ejerce la coordinación. Esta asignación es semejante a la de otras instancias de la Escuela de Formación Docente: el Departamento de Docencia Universitaria dispone de una persona secretaria a tiempo completo y medio tiempo para la dirección, mientras que las secciones de Educación Preescolar y Educación Primaria cuentan con una persona secretaria a tiempo completo y un cuarto de tiempo para la coordinación respectiva. La oficialización del cambio de nombre no requiere recursos adicionales. La Escuela de Formación Docente no prevé la necesidad de nuevas plazas docentes o administrativas, ni de equipo o infraestructura. En consecuencia, la dinámica organizativa y funcional del departamento permanecerá sin modificaciones, se limitará a la gestión al ajuste nominal solicitado.
15. La Comisión de Docencia y Posgrado constató que la nueva denominación no altera la estructura organizativa vigente, ni modifica las funciones o la dependencia jerárquica del departamento. Asimismo, verificó que su implementación no demanda recursos adicionales, lo que asegura el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 del *Reglamento sobre departamentos, secciones y cursos*. Además, la comisión confirmó que la solicitud presentada por la Escuela de Formación Docente se ajusta al procedimiento previsto en dicho artículo, al haber sido aprobada en Asamblea de Escuela y posteriormente avalada por el Consejo de Área de Ciencias Sociales, cumpliendo así con los requisitos reglamentarios establecidos.
16. La Comisión de Docencia y Posgrado estimó que el cambio de nombre permite adecuar la denominación oficial a la naturaleza real de las carreras que integran el departamento, todas ellas orientadas a la enseñanza en educación media o secundaria. De este modo, se valoró que la denominación de Departamento de Educación Secundaria refleja con mayor claridad el objeto de estudio, fortalece la pertinencia disciplinar e integra de forma más precisa los contenidos propios de la formación profesional en dicho nivel educativo, lo cual se alinea con las necesidades del sistema educativo costarricense.
17. La Comisión de Docencia y Posgrado consideró que el ajuste nominal no implica modificaciones en la asignación presupuestaria ni en la dotación de personal o infraestructura. En consecuencia, concluyó que se trata de una gestión con nulo impacto financiero que contribuye a mejorar la coherencia académica y administrativa del departamento sin generar nuevas cargas institucionales.
18. Luego del análisis de la normativa aplicable, de la solicitud presentada por la Escuela de Formación Docente y de la información adicional requerida por la Comisión de Docencia y Posgrado, dicha comisión considera pertinente el cambio del nombre oficial del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum por Departamento de Educación Secundaria, en concordancia con la potestad conferida en el artículo 2 del *Reglamento sobre departamentos, secciones y cursos*.

ACUERDA

Aprobar el cambio de nombre del Departamento de Experiencia Profesional y Currículum, de la Escuela de Formación Docente, para que, en adelante, sea denominado como Departamento de Educación Secundaria.

ACUERDO FIRME.**ARTÍCULO 7**

El M. Sc. Hugo Amores Vargas, la Srta. Isela Cristina Chacón Navarro, la Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas, el Sr. Fernán Orlich Rojas, el Dr. Keilor Osvaldo Rojas Jiménez, el Ph. D. Sergio Salazar Villanea, la M. Sc. Esperanza Tasies Castro y la Dra. Ilka Treminio Sánchez presentan la Propuesta de Miembros CU-20-2025 referente a la prohibición de la venta de las botellas de plástico de un solo uso en la Universidad de Costa Rica.

EL DR. KEILOR ROJAS JIMÉNEZ refiere a los miembros del Consejo Universitario que la Universidad está llamada a ser luz para la sociedad, tanto en lo que dice como en lo que hace, y esta es una oportunidad para que la Universidad sea luz en lo que hace, particularmente, en los temas de conciencia ambiental. Dentro de los problemas de conciencia ambiental —como por todos es sabido—, la contaminación por plástico, microplásticos y nanoplásticos es algo que a la humanidad se le salió de las manos, y todos estamos llamados a hacer algo. Anteriormente, al menos, se ha emitido reglamentación en el tema de plásticos de un solo uso (pajillas, cubiertos, bolsas); sin embargo, el gran problema está, sobre todo, en las botellas de plástico.

Recuerda que, anteriormente, él ha comentado que quienes producen refrescos o aguas no venden eso, sino que venden una botella que tiene algo, hay una responsabilidad personal de quienes la consumimos, hay responsabilidad social de las empresas (que están lucrando a partir de la contaminación, porque simplemente las venden y ya no es su responsabilidad), y también hay una responsabilidad de toda la sociedad y del Gobierno en cómo atender y regular esto. Lo que se propone es que la Universidad de Costa Rica plantee la prohibición de venta de botellas de plástico, que es, dentro de todos los plásticos, la que mayores problemas genera en virtud de su volumen. Las botellas de plástico son las que más están contaminando, además de que prevalecen en la tierra por cientos de años.

Con esta propuesta, no se van a llevar a la quiebra a las empresas que venden botellas plásticas, pero sí enviarán una señal a la comunidad y a la sociedad de lo que deberían aspirar en pro de la armonía con el ambiente.

Dicho lo anterior, expone el dictamen, que, a la letra, dice:

CONSIDERANDO QUE:

1. La contaminación por plásticos y microplásticos representa una de las amenazas ambientales más graves y persistentes de nuestro tiempo. Cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico en el planeta, de las cuales una gran parte termina en el medio ambiente, afectando océanos, suelos, aire y la salud humana. Los microplásticos, fragmentos de menos de 5 mm, se generan tanto por la degradación de objetos plásticos como por productos de uso cotidiano, y han sido detectados en el agua potable, alimentos, aire e incluso en órganos humanos. Su acumulación en ecosistemas como los marinos provoca asfixia, problemas de comportamiento en la fauna, e ingreso a la cadena alimentaria humana. Además de los daños físicos, estas partículas actúan como vectores de sustancias químicas tóxicas, como pesticidas, metales pesados y retardantes de llama, que pueden provocar alteraciones genéticas, problemas respiratorios y enfermedades neurodegenerativas¹⁰.

¹⁰ Noticias ONU. (2025, 5 de junio). Cada persona consume más de 50.000 partículas de plástico al año. Naciones Unidas. <https://news.un.org/>

EL DR. KEILOR ROJAS JIMÉNEZ destaca un punto que no incluyó en este dictamen, el cual se trata del hecho de que hay diferentes estudios que estiman que cada semana los seres humanos están consumiendo aproximadamente 5 gramos de microplásticos, el equivalente a una tarjeta de plástico (de las que se utilizan para pagar), esto es lo que estamos consumiendo, gran parte de este consumo de microplástico se desecha, pero gran parte se mantiene en el organismo. Continúa con la lectura.

2. A pesar de los esfuerzos por promover el reciclaje y la economía circular, la producción mundial de plásticos a nivel mundial sigue aumentando, con proyecciones que indican que podría duplicarse para el 2050, con lo cual se alcanzarían los 800 millones de toneladas anuales. Además, las tasas de reciclaje permanecen estancadas, lo que agrava el problema. Este panorama evidencia que el problema de la contaminación por plásticos no se limita al volumen de residuos y ubicación en literalmente todo el planeta, sino también a la composición química de los plásticos, que complica su reciclaje y amplifica sus impactos en la salud y en el medio ambiente¹¹.
3. En el marco de este problema ambiental, las botellas plásticas de un solo uso, como las utilizadas para bebidas y agua, representan un problema ambiental crítico debido a su altísima producción y corta vida útil. Aunque se utilizan por unos minutos, pueden tardar siglos en degradarse, lo que genera que se liberen microplásticos que contaminan océanos, ríos y suelos. Las características de este material facilitan que se dispersen fácilmente en el ambiente, de manera que se convierte en uno de los residuos más comunes en playas y ecosistemas marinos, lo cual ha sido ampliamente documentado por diversos estudios realizados por la Universidad de Costa Rica¹².

EL DR. KEILOR ROJAS JIMÉNEZ ilustra que, si quieren ver esta situación, pueden ir a Puntarenas, ya que gran parte de la playa está cubierta de microplásticos. Continúa con la lectura.

4. Las botellas plásticas también liberan compuestos químicos peligrosos. Están hechas principalmente de politereftalato de etileno (PET), que puede contener o liberar sustancias como ftalatos y bisfenol A (BPA), especialmente cuando se exponen al calor o se reutilizan. Estos químicos son disruptores endocrinos que pueden afectar el sistema hormonal humano, provocar problemas reproductivos y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. En conjunto, las botellas plásticas de un solo uso no solo simbolizan la cultura del consumo desechable, sino que también agravan la crisis ambiental y sanitaria. Por tanto, es urgente tomar medidas para la reducción de su uso y el fomento de alternativas sostenibles¹³.

es/story/2025/06/1539146.

Arias-Andres, M., Rojas-Jimenez, K. y Grossart, H-P. (2019). Collateral effects of microplastic pollution on aquatic microorganisms: An ecological perspective. *Trends in Analytical Chemistry*, 112, 234-240. <https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.11.041>

Arias-Andres, M. y, Rojas-Jimenez, K. (2022). Ecological and Public Health Effects of Microplastics Pollution. En: M. Z. Hashmi (Ed.) *Microplastic Pollution. Emerging Contaminants and Associated Treatment Technologies* (pp. 439-444). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89220-3_19

- 11 Dokl, M., Capot, A., Krajnc, D., Van Fan, Y., Vujanovi, A., Aviso, K. B., Tan, R. R., Kravanja, Z. y Cucek, L. (2024). Global projections of plastic use, end-of-life fate and potencial changes in consumption, reduction, recycling and replacement with bioplastics to 2050. *Sustainable Production and Consumption*, 51, 498-518. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2024.09.025>

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (s. f.). *Plásticos*. OECD. <https://www.oecd.org/en/topics/plastics.html>

Núñez Chacón, M. (2019, 19 de febrero). Urge mayor gestión de residuos plásticos en Costa Rica. *Semanario Universidad*. Recuperado de <https://semanariouniversidad.com/universitarias/urge-mayor-gestion-de-residuos-plasticos-en-costa-rica/>

- 12 Bermúdez-Guzmán, L., Alpizar-Villalobos, C., Gatgens-García, J., Jiménez-Huezo, G., Rodríguez-Arias, M., Molina, H., Villalobos, J., Paniagua, S. A., Vega-Baudrit, J. R., Rojas-Jimenez, K. (2020). Microplastic ingestion by a herring *Opisthonema* sp. in the Pacific coast of Costa Rica. *Regional Studies in Marine Science*, 38, 101367. <https://doi.org/10.1016/j.rsma.2020.101367>

Rojas-Jimenez, K., Villalobos-Rojas, F., Gatgens-García, J., Rodríguez-Arias, M., Hernández-Montero, N. y Wehrmann, I.S. (2022). Presence of microplastics in six bivalve species (Mollusca, Bivalvia) commercially exploited at the Pacific coast of Costa Rica, Central America. *Marine Pollution Bulletin*, 183, 114040. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114040>

Montiel-Mora, J. R., Gómez-Ramírez, E. H. y Sibaja-Cordero, J. A. (2025). An analysis of human impact on sandy coasts of the Costa Rican Pacific. *Marine Pollution Bulletin*, 213, 117656. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2025.117656>

- 13 Arias-Andres, M., Rojas-Jimenez, K. y Grossart, H-P. (2019). Collateral effects of microplastic pollution on aquatic microorganisms: An ecological perspective. *Trends in Analytical Chemistry*, 112, 234-240. <https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.11.041>
- Arias-Andres, M. y, Rojas-Jimenez, K. (2022). Ecological and Public Health Effects of Microplastics Pollution. En: M. Z. Hashmi (Ed.) *Microplastic Pollution. Emerging Contaminants and Associated Treatment Technologies* (pp. 439-444). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89220-3_19

Rojas-Jimenez, K., Villalobos-Rojas, F., Gatgens-García, J., Rodríguez-Arias, M., Hernández-Montero, N. y Wehrmann, I.S. (2022). Presence of microplastics in six bivalve species (Mollusca, Bivalvia) commercially exploited at the Pacific coast of Costa Rica, Central America. *Marine Pollution Bulletin*, 183, 114040. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114040>

5. La *Constitución Política de la República Costa Rica*, en su artículo 50, establece que (...) *Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado* (...).
6. La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente aprobó la resolución UNEP/EA.5/Res.14 titulada “Poner fin a la contaminación plástica: hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante” en marzo de 2022. Esta resolución aborda todo el ciclo de vida de los plásticos, desde su producción y diseño hasta su eliminación, e incluye planes de acción nacionales y estrategias para prevenir, reducir y eliminar la contaminación plástica. Costa Rica presidió el Comité Pleno que estableció este mandato de acuerdo internacional¹⁴.
7. Como parte de la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ley n.º 9981 de 2021, se adquirieron una serie de compromisos ambientales como la recomendación legal 159 (*Recommendation of the Council concerning the Re-Use and Recycling of Beverage Containers*), sobre la reutilización y el reciclaje de envases para bebidas, así como adoptar medidas para sustituir envases de bebidas y otros plásticos de un solo uso en instituciones públicas¹⁵.
8. La preocupación por la contaminación plástica ha aumentado significativamente, por lo que se ha convertido en una prioridad para la creación de políticas y normativas. Aunque este problema existe desde hace décadas, en la actualidad se reconoce su presencia en todos los ecosistemas, de manera que es urgente tomar medidas. Por eso, tanto la investigación como la política han intensificado sus esfuerzos para entender y enfrentar esta situación. El país cuenta con un marco normativo robusto en temas relacionados con prevenir y mitigar la contaminación por plástico. Como parte de esas normas están: *Ley de Gestión Integral de Residuos* (Ley n.º 8839), *Ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente* (Ley n.º 9786), *Reglamento a la Ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente n.º 9786, del 26 de noviembre de 2019* (Decreto Ejecutivo n.º 43985-S), *Reglamento para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial* (Decreto Ejecutivo n.º 38272-S) y *Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional en el Sector Público de Costa Rica* (Decreto Ejecutivo n.º 36499-S-MINAET). Adicionalmente, desde 2017, Costa Rica cuenta con la Estrategia nacional para sustituir el consumo de plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables 2017-2021. A pesar de lo anterior, los problemas de contaminación se mantienen.
9. La Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior y cultura, autónoma constitucionalmente y democrática. Su accionar se guía por el compromiso con la protección del medio ambiente, conforme lo establece el *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*, en el artículo 4, inciso f), y en el artículo 5, inciso h):

ARTÍCULO 4.- Son principios orientadores del quehacer de la Universidad: (...)

f) Compromiso con el medio ambiente: Fomentar el mejoramiento de la relación del ser humano con el ambiente y el conocimiento, el respeto, la conservación y el uso sostenible de los recursos ambientales, así como una mejor calidad del ambiente.

ARTÍCULO 5.- Para el cumplimiento de los fines y los principios orientadores del quehacer de la Universidad de Costa Rica, se establecen los siguientes propósitos:

(...)

h) Estudiar los problemas de la comunidad y participar en proyectos académicos para eliminar las causas que producen la ignorancia y la miseria, promover un régimen social justo, el bienestar de la sociedad y el desarrollo integral del ser humano, en armonía con el ambiente.
10. La promoción y el desarrollo de políticas relacionadas con la protección ambiental que promuevan la sostenibilidad de todos los procesos que se llevan a cabo, tanto a escala institucional como nacional, son parte de las iniciativas

- 14 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2022, 7 de marzo). *Resolución 5/14: Poner fin a la contaminación por plásticos: hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante*. Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, quinta sesión, Nairobi. <https://digitallibrary.un.org/record/3999257?ln=en&v=pdf>
- Presidencia de la República de Costa Rica. (2022, marzo 2). *Costa Rica presidió Comité del Pleno de cumbre sobre medio ambiente que logró mandato para acuerdo internacional histórico contra contaminación de plásticos*. <https://presidencia.gobiernocarlosalvarado.cr/comunicados/2022/03/costa-rica-presidio-comite-del-pleno-de-cumbre-sobre-medio-ambiente-que-logro-mandato-para-acuerdo-internacional-historico-contra-contaminacion-de-plasticos/>
- 15 Brown, A. y Börkey, P. (2024). Plastics recycled content requirements. *Environment Working Paper*, 236, 3-49. <https://one.oecd.org/document/ENV/WKP%282024%296/en/pdf>

que la Universidad ha definido como prioritarias. Muestra de eso es la política institucional 10.1¹⁶, que establece que la Universidad de Costa Rica: *Fortalecerá la cultura institucional en defensa del ambiente y su sustentabilidad*.

En línea con lo anterior, la citada política tiene como uno de sus objetivos fortalecer la dimensión ambiental en las actividades del quehacer universitario, para generar conciencia y transformación en la comunidad universitaria y la sociedad.

11. Desde enero de 2018, la Vicerrectoría de Administración, por medio de la Circular-1-2018, emitió la directriz para eliminar la adquisición y el uso de los plásticos derivados de petróleo en todas las actividades propias del quehacer universitario, específicamente aquellos de un solo uso (pajillas, removedores, bolsas de empaque, vajilla desechable, contenedores de alimentos, envases de batidos y plástico adhesivo para alimentos). Además, se recomendó la sustitución de esos artículos por materiales alternativos, renovables, compostables o reusables.
12. La Universidad de Costa Rica ha mantenido históricamente un compromiso con la sostenibilidad y los derechos humanos, a fin de alinear su quehacer académico, de investigación y acción social con metas de desarrollo sostenible, como lo demuestra su adhesión voluntaria a múltiples metas de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Particularmente, el objetivo 12 busca garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, lo que implica hacer más y de mejor manera con menos recursos, desvincular el crecimiento económico de la degradación ambiental, y gestionar responsablemente los residuos y desechos para las generaciones futuras. Con el fin de lograrlo, se promueven la eficiencia en el uso de los recursos, la reducción del desperdicio y la adopción de prácticas sostenibles¹⁷.
13. En la edición 2025 del *QS World University Rankings: Sustainability*¹⁸, la Universidad de Costa Rica ocupa la posición número 643 a nivel global. Este resultado reviste especial relevancia, ya que la Universidad de Costa Rica se consolida como la única institución de educación superior costarricense incluida en dicho ranking, lo que evidencia su compromiso institucional con los principios de sostenibilidad ambiental. Asimismo, su presencia en esta clasificación posiciona a la Institución entre el reducido grupo de universidades centroamericanas que han logrado ese reconocimiento internacional en materia de sostenibilidad, lo cual destaca su liderazgo regional en la promoción de prácticas responsables y sostenibles dentro del ámbito académico.
14. La Universidad de Costa Rica, como institución comprometida con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social, debe reflejar en su quehacer diario los valores ambientales y sociales que forman parte de su identidad. En este contexto, el objetivo de esta propuesta es establecer la prohibición de la venta de botellas plásticas de un solo uso, especialmente aquellas utilizadas para bebidas y agua, en todas las sedes, fincas y estaciones experimentales. Además, promover la instalación de dispensadores de agua para facilitar el acceso al agua potable a la comunidad universitaria y a las personas que visitan el campus universitario. Esta medida se alinea con lo dispuesto en el *Programa de Gestión Ambiental Institucional 2025-2029*, el cual establece como una de sus metas la implementación de mobiliario urbano, como fuentes de agua para el llenado de botellas de agua potable (Unidad de Gestión Ambiental, 2024, p. 55)¹⁹.
15. Para efectos de esta propuesta se define botella plástica como un recipiente fabricado con plástico, diseñado para contener líquidos y que se utiliza una sola vez antes de ser desechada. Comprende la botella de plástico, las etiquetas, las tapas, y cualquier otro elemento accesorio, adherido o complementario.
16. Por último, una prohibición de la venta de botellas de refrescos en la Universidad de Costa Rica podría generar beneficios colaterales importantes para la salud de la comunidad universitaria. Al reducir el acceso a bebidas azucaradas, se disminuiría el consumo excesivo de azúcar, lo que contribuiría a prevenir enfermedades como obesidad y diabetes tipo 2. Además, se fomentaría el consumo de agua y bebidas naturales, con lo que se mejoraría los hábitos alimentarios. Esta medida también podría impactar positivamente al reforzar el compromiso institucional con la promoción de entornos saludables y sostenibles.

16 Universidad de Costa Rica. (2020). *Políticas institucionales 2021-2025*. Consejo Universitario. https://www.cu.ucr.ac.cr/normativa/politicas_institucionales_2021-2025.pdf

17 Organización de las Naciones Unidas. (s. f.). *Consumo y producción sostenibles*. Naciones Unidas: Objetivos de Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/>

18 QS Quacquarelli Symonds. (2024, 10 de diciembre). *QS Sustainability University Rankings 2025*. Top Universities. <https://www.topuniversities.com/sustainability-rankings>

19 Unidad de Gestión Ambiental, Vicerrectoría de Administración. (2024). *Programa de Gestión Ambiental Institucional PGAI 2025-2029*. Universidad de Costa Rica. Recuperado el 10 de octubre de 2025, de <https://galardonambiental.ucr.ac.cr/es/categoria-pgai>

ACUERDA

1. Reafirmar el compromiso de la Universidad de Costa Rica con la protección del medio ambiente, mediante la promoción activa de la sustentabilidad en el quehacer universitario como parte integral de sus principios orientadores y su responsabilidad con las generaciones presentes y futuras.
2. Solicitar a la Administración:
 - a) Emitir, en un plazo de seis meses, las directrices correspondientes para prohibir la venta de botellas de plástico de un solo uso, particularmente aquellas utilizadas para bebidas y agua, dentro de todas las sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica, lo cual incluye sodas, cafeterías, máquinas expendedoras y eventos institucionales.
 - b) Instalar dispensadores de agua en diversos puntos estratégicos de todas las sedes, recintos, fincas y estaciones experimentales de la Universidad de Costa Rica, con el fin de facilitar el acceso al agua potable a la comunidad universitaria y a las personas que visitan el campus universitario. Esta medida se ejecutará paulatinamente, según las condiciones presupuestarias de la Institución.

EL DR. KEILOR ROJAS JIMÉNEZ finaliza con la lectura de la Propuesta de Miembros CU-20-2025. Agradece a la Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas, a la Dra. Ilka Treminio Sánchez, a la M. Sc. Esperanza Tasies Castro, al Sr. Fernán Orlich Rojas, a la Srta. Isela Chacón Navarro, al Ph. D. Sergio Salazar Villanea y al Mag. Hugo Amores Vargas, quienes suscriben esta propuesta (junto con él). También, brinda su agradecimiento al Lic. David Barquero Castro, asesor e investigador, por su contribución en la elaboración del presente dictamen. Da las gracias.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS da las gracias al Dr. Keilor Rojas Jiménez. Destaca que esta es una propuesta necesaria que, definitivamente, va a ayudar no solo al entorno sino en especial a las personas funcionarias y al estudiantado, en términos generales. Manifiesta lo anterior en virtud de que está más que comprobado que el uso de estas bebidas resulta insalubre para nuestra vida. Resalta que ya se empezaron a colocar los dispensadores especiales para llenar las botellas de agua. Desde la Administración hubo un cambio, respecto del cual el Dr. Keilor Rojas Jiménez puede referirse.

EL DR. KEILOR ROJAS JIMÉNEZ agrega que, en efecto, en esta línea, deben reconocer que ya la Administración ha comenzado con esfuerzos para establecer dispensadores de agua en varios lugares de los campus. También, se ha hecho un esfuerzo para comprar botellas de vidrio, a fin de sustituir las de plástico. Reconoce que esto implica todo un proceso. Espera que se pueda lograr crear conciencia y, también, ejemplificar con nuestras propias acciones este cambio de paradigma en la sociedad.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS comenta que el ser humano se acostumbra a la comodidad, porque todos empezaron con un “pichel” y un “vasito” y, de un momento a otro, se han visto abrumados y cómodamente se escogen opciones desechables. Muchas familias podrían pensar que, después de sacar la basura, el resto no es su responsabilidad, pero aclara que esto no es así, ya que la basura sigue siendo nuestra responsabilidad mientras esté en el caño de cualquier casa. Cede la palabra al Lic. William Méndez Garita.

EL LIC. WILLIAM MÉNDEZ GARITA, dado a que es un visitante recurrente de la provincia de Puntarenas, desea precisar un aspecto: el problema de la contaminación de nuestras playas y nuestros océanos no se focaliza solamente en un lugar específico; de hecho, Puntarenas ha llevado a cabo un gran esfuerzo a lo largo de varias décadas por recuperar sus playas (acción que realizan de manera frecuente). También, remarca que existen organizaciones nacionales de voluntariado que van a las playas para limpiarlas, pero es lamentable que, por más esfuerzo que las comunidades locales y costeras lleven a cabo, una y otra vez, las áreas se vuelven a ensuciar, y buena parte de esa suciedad de plásticos (de todos los tamaños y especies que se pueden encontrar) provienen de distintos lugares del país por sus ríos. Además, las personas ciudadanas

los dejan ahí sin ninguna responsabilidad y esto se observa más en días feriados, Semana Santa y fin de año. Estos desechos provienen también de las mareas de los océanos.

En este sentido, reitera que hay un gran trabajo de sensibilización de toda la población sobre un punto que, como manifestaba la Municipalidad de San José, lo que cada persona lanza a un caño de San José termina en nuestras costas, en nuestras playas, y todas las personas se ven afectadas.

Manifiesta al Dr. Keilor Rojas Jiménez que esta propuesta conlleva una gran tarea para toda la comunidad universitaria, pero son estas acciones de 1+1+1 las que van produciendo en el corto, mediano y largo plazo esa transformación de la sociedad.

Reconoce que como él (el Lic. William Méndez Garita) ha sido muy crítico del doble discurso ambiental (se hacen acciones buenas, pero también otras muy malas), la idea es reducir esa distancia de este doble discurso ambiental y que, realmente, Costa Rica se conduzca en una sola dirección. Agradece por la propuesta, considera que todas las personas miembros se sentirán muy complacidas de votarla.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS remarca que esto también supone que tomen conciencia de lo que se compra y cómo se compra: nuestros productos, nuestras necesidades (desde comprar vegetales hasta otra serie de bienes e insumos).

Al no haber más solicitudes para el uso de la palabra, somete a votación la propuesta de acuerdo, y se obtiene el siguiente resultado:

VOTAN A FAVOR: M. Sc. Jáírol Núñez Moya, Dr. Eduardo Calderón Obaldía, Dra. Ilka Treminio Sánchez, Sr. Fernán Orlich Rojas, Mag. Hugo Amores Vargas, Lic. William Méndez Garita, Srta. Isela Chacón Navarro, Ph. D. Sergio Salazar Villanea, Dr. Keilor Rojas Jiménez y Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas.

TOTAL: Diez votos.

EN CONTRA: Ninguno.

Por lo tanto, el Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

- 1. La contaminación por plásticos y microplásticos representa una de las amenazas ambientales más graves y persistentes de nuestro tiempo. Cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico en el planeta, de las cuales una gran parte termina en el medio ambiente, afectando océanos, suelos, aire y la salud humana. Los microplásticos, fragmentos de menos de 5 mm, se generan tanto por la degradación de objetos plásticos como por productos de uso cotidiano, y han sido detectados en el agua potable, alimentos, aire e incluso en órganos humanos. Su acumulación en ecosistemas como los marinos provoca asfixia, problemas de comportamiento en la fauna, e ingreso a la cadena alimentaria humana. Además de los daños físicos, estas partículas actúan como vectores de sustancias químicas tóxicas, como pesticidas, metales pesados y retardantes de llama, que pueden provocar alteraciones genéticas, problemas respiratorios y enfermedades neurodegenerativas²⁰.**

20 Noticias ONU. (2025, 5 de junio). Cada persona consume más de 50.000 partículas de plástico al año. Naciones Unidas. <https://news.un.org/es/story/2025/06/1539146>.

Arias-Andres, M., Rojas-Jimenez, K. y Grossart, H-P. (2019). Collateral effects of microplastic pollution on aquatic microorganisms: An ecological perspective. *Trends in Analytical Chemistry*, 112, 234-240. <https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.11.041>

Arias-Andres, M. y, Rojas-Jimenez, K. (2022). Ecological and Public Health Effects of Microplastics Pollution. En: M. Z. Hashmi (Ed.) *Microplastic Pollution. Emerging Contaminants and Associated Treatment Technologies* (pp. 439-444). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89220-3_19

2. A pesar de los esfuerzos por promover el reciclaje y la economía circular, la producción mundial de plásticos a nivel mundial sigue aumentando, con proyecciones que indican que podría duplicarse para el 2050, con lo cual se alcanzarían los 800 millones de toneladas anuales. Además, las tasas de reciclaje permanecen estancadas, lo que agrava el problema. Este panorama evidencia que el problema de la contaminación por plásticos no se limita al volumen de residuos y ubicación en literalmente todo el planeta, sino también a la composición química de los plásticos, que complica su reciclaje y amplifica sus impactos en la salud y en el medio ambiente²¹.
3. En el marco de este problema ambiental, las botellas plásticas de un solo uso, como las utilizadas para bebidas y agua, representan un problema ambiental crítico debido a su altísima producción y corta vida útil. Aunque se utilizan por unos minutos, pueden tardar siglos en degradarse, lo que genera que se liberen microplásticos que contaminan océanos, ríos y suelos. Las características de este material facilitan que se dispersen fácilmente en el ambiente, de manera que se convierte en uno de los residuos más comunes en playas y ecosistemas marinos, lo cual ha sido ampliamente documentado por diversos estudios realizados por la Universidad de Costa Rica²².
4. Las botellas plásticas también liberan compuestos químicos peligrosos. Están hechas principalmente de politereftalato de etileno (PET), que puede contener o liberar sustancias como ftalatos y bisfenol A (BPA), especialmente cuando se exponen al calor o se reutilizan. Estos químicos son disruptores endocrinos que pueden afectar el sistema hormonal humano, provocar problemas reproductivos y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. En conjunto, las botellas plásticas de un solo uso no solo simbolizan la cultura del consumo desechable, sino que también agravan la crisis ambiental y sanitaria. Por tanto, es urgente tomar medidas para la reducción de su uso y el fomento de alternativas sostenibles²³.
5. La *Constitución Política de la República Costa Rica*, en su artículo 50, establece que (...) *Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado* (...).
6. La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente aprobó la resolución UNEP/EA.5/Res.14 titulada “Poner fin a la contaminación plástica: hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante” en marzo de 2022. Esta resolución aborda todo el ciclo de vida de los plásticos, desde su producción y diseño hasta su eliminación, e incluye planes de acción nacionales

- 21 Dokl, M., Capot, A., Krajnc, D., Van Fan, Y., Vujanovi, A., Aviso, K. B., Tan, R. R., Kravanja, Z. y Cucek, L. (2024). Global projections of plastic use, end-of-life fate and potential changes in consumption, reduction, recycling and replacement with bioplastics to 2050. *Sustainable Production and Consumption*, 51, 498-518. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2024.09.025>
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (s. f.). *Plásticos*. OECD. <https://www.oecd.org/en/topics/plastics.html>
Núñez Chacón, M. (2019, 19 de febrero). Urge mayor gestión de residuos plásticos en Costa Rica. *Semanario Universidad*. Recuperado de <https://semanariouniversidad.com/universitarias/urge-mayor-gestion-de-residuos-plasticos-en-costa-rica/>
- 22 Bermúdez-Guzmán, L., Alpizar-Villalobos, C., Gatgens-García, J., Jiménez-Huezo, G., Rodríguez-Arias, M., Molina, H., Villalobos, J., Paniagua, S. A., Vega-Baudrit, J. R., Rojas-Jimenez, K. (2020). Microplastic ingestion by a herring *Opisthonema* sp. in the Pacific coast of Costa Rica. *Regional Studies in Marine Science*, 38, 101367. <https://doi.org/10.1016/j.rsma.2020.101367>
Rojas-Jimenez, K., Villalobos-Rojas, F., Gatgens-García, J., Rodríguez-Arias, M., Hernández-Montero, N. y Wehrtmann, I.S. (2022). Presence of microplastics in six bivalve species (Mollusca, Bivalvia) commercially exploited at the Pacific coast of Costa Rica, Central America. *Marine Pollution Bulletin*, 183, 114040. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114040>
Montiel-Mora, J. R., Gómez-Ramírez, E. H. y Sibaja-Cordero, J. A. (2025). An analysis of human impact on sandy coasts of the Costa Rican Pacific. *Marine Pollution Bulletin*, 213, 117656. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2025.117656>
- 23 Arias-Andres, M., Rojas-Jimenez, K. y Grossart, H-P. (2019). Collateral effects of microplastic pollution on aquatic microorganisms: An ecological perspective. *Trends in Analytical Chemistry*, 112, 234-240. <https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.11.041>
Arias-Andres, M. y, Rojas-Jimenez, K. (2022). Ecological and Public Health Effects of Microplastics Pollution. En: M. Z. Hashmi (Ed.) *Microplastic Pollution. Emerging Contaminants and Associated Treatment Technologies* (pp. 439-444). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89220-3_19
Rojas-Jimenez, K., Villalobos-Rojas, F., Gatgens-García, J., Rodríguez-Arias, M., Hernández-Montero, N. y Wehrtmann, I.S. (2022). Presence of microplastics in six bivalve species (Mollusca, Bivalvia) commercially exploited at the Pacific coast of Costa Rica, Central America. *Marine Pollution Bulletin*, 183, 114040. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114040>

y estrategias para prevenir, reducir y eliminar la contaminación plástica. Costa Rica presidió el Comité Pleno que estableció este mandato de acuerdo internacional²⁴.

7. Como parte de la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ley n.º 9981 de 2021, se adquirieron una serie de compromisos ambientales como la recomendación legal 159 (*Recommendation of the Council concerning the Re-Use and Recycling of Beverage Containers*), sobre la reutilización y el reciclaje de envases para bebidas, así como adoptar medidas para sustituir envases de bebidas y otros plásticos de un solo uso en instituciones públicas²⁵.
8. La preocupación por la contaminación plástica ha aumentado significativamente, por lo que se ha convertido en una prioridad para la creación de políticas y normativas. Aunque este problema existe desde hace décadas, en la actualidad se reconoce su presencia en todos los ecosistemas, de manera que es urgente tomar medidas. Por eso, tanto la investigación como la política han intensificado sus esfuerzos para entender y enfrentar esta situación. El país cuenta con un marco normativo robusto en temas relacionados con prevenir y mitigar la contaminación por plástico. Como parte de esas normas están: *Ley de Gestión Integral de Residuos* (Ley n.º 8839), *Ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente* (Ley n.º 9786), *Reglamento a la Ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente n.º 9786, del 26 de noviembre de 2019* (Decreto Ejecutivo n.º 43985-S), *Reglamento para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial* (Decreto Ejecutivo n.º 38272-S) y *Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional en el Sector Público de Costa Rica* (Decreto Ejecutivo n.º 36499-S-MINAET). Adicionalmente, desde 2017, Costa Rica cuenta con la Estrategia nacional para sustituir el consumo de plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables 2017-2021. A pesar de lo anterior, los problemas de contaminación se mantienen.
9. La Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior y cultura, autónoma constitucionalmente y democrática. Su accionar se guía por el compromiso con la protección del medio ambiente, conforme lo establece el *Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica*, en el artículo 4, inciso f), y en el artículo 5, inciso h):

ARTÍCULO 4.- Son principios orientadores del quehacer de la Universidad: (...)

f) Compromiso con el medio ambiente: Fomentar el mejoramiento de la relación del ser humano con el ambiente y el conocimiento, el respeto, la conservación y el uso sostenible de los recursos ambientales, así como una mejor calidad del ambiente.

ARTÍCULO 5.- Para el cumplimiento de los fines y los principios orientadores del quehacer de la Universidad de Costa Rica, se establecen los siguientes propósitos:

(...)

h) Estudiar los problemas de la comunidad y participar en proyectos académicos para eliminar las causas que producen la ignorancia y la miseria, promover un régimen social justo, el bienestar de la sociedad y el desarrollo integral del ser humano, en armonía con el ambiente.

24 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2022, 7 de marzo). *Resolución 5/14: Poner fin a la contaminación por plásticos: hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante*. Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, quinta sesión, Nairobi. <https://digitallibrary.un.org/record/3999257?ln=en&v=pdf>

Presidencia de la República de Costa Rica. (2022, marzo 2). *Costa Rica presidió Comité del Pleno de cumbre sobre medio ambiente que logró mandato para acuerdo internacional histórico contra contaminación de plásticos*. <https://presidencia.gobiernocarlosalvarado.cr/comunicados/2022/03/costa-rica-presidio-comite-del-pleno-de-cumbre-sobre-medio-ambiente-que-logro-mandato-para-acuerdo-internacional-historico-contra-contaminacion-de-plasticos/>

25 Brown, A. y Börkey, P. (2024). Plastics recycled content requirements. *Environment Working Paper*, 236, 3-49. <https://one.oecd.org/document/ENV/WKP%282024%296/en/pdf>

10. La promoción y el desarrollo de políticas relacionadas con la protección ambiental que promuevan la sostenibilidad de todos los procesos que se llevan a cabo, tanto a escala institucional como nacional, son parte de las iniciativas que la Universidad ha definido como prioritarias. Muestra de eso es la política institucional 10.1²⁶, que establece que la Universidad de Costa Rica: *Fortalecerá la cultura institucional en defensa del ambiente y su sustentabilidad*.

En línea con lo anterior, la citada política tiene como uno de sus objetivos fortalecer la dimensión ambiental en las actividades del quehacer universitario, para generar conciencia y transformación en la comunidad universitaria y la sociedad.

11. Desde enero de 2018, la Vicerrectoría de Administración, por medio de la Circular-1-2018, emitió la directriz para eliminar la adquisición y el uso de los plásticos derivados de petróleo en todas las actividades propias del quehacer universitario, específicamente aquellos de un solo uso (pajillas, removedores, bolsas de empaque, vajilla desechable, contenedores de alimentos, envases de batidos y plástico adhesivo para alimentos). Además, se recomendó la sustitución de esos artículos por materiales alternativos, renovables, compostables o reusables.
12. La Universidad de Costa Rica ha mantenido históricamente un compromiso con la sostenibilidad y los derechos humanos, a fin de alinear su quehacer académico, de investigación y acción social con metas de desarrollo sostenible, como lo demuestra su adhesión voluntaria a múltiples metas de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Particularmente, el objetivo 12 busca garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, lo que implica hacer más y de mejor manera con menos recursos, desvincular el crecimiento económico de la degradación ambiental, y gestionar responsablemente los residuos y desechos para las generaciones futuras. Con el fin de lograrlo, se promueven la eficiencia en el uso de los recursos, la reducción del desperdicio y la adopción de prácticas sostenibles²⁷.
13. En la edición 2025 del *QS World University Rankings: Sustainability*²⁸, la Universidad de Costa Rica ocupa la posición número 643 a nivel global. Este resultado reviste especial relevancia, ya que la Universidad de Costa Rica se consolida como la única institución de educación superior costarricense incluida en dicho ranking, lo que evidencia su compromiso institucional con los principios de sostenibilidad ambiental. Asimismo, su presencia en esta clasificación posiciona a la Institución entre el reducido grupo de universidades centroamericanas que han logrado ese reconocimiento internacional en materia de sostenibilidad, lo cual destaca su liderazgo regional en la promoción de prácticas responsables y sostenibles dentro del ámbito académico.
14. La Universidad de Costa Rica, como institución comprometida con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social, debe reflejar en su quehacer diario los valores ambientales y sociales que forman parte de su identidad. En este contexto, el objetivo de esta propuesta es establecer la prohibición de la venta de botellas plásticas de un solo uso, especialmente aquellas utilizadas para bebidas y agua, en todas las sedes, fincas y estaciones experimentales. Además, promover la instalación de dispensadores de agua para facilitar el acceso al agua potable a la comunidad universitaria y a las personas que visitan el campus universitario. Esta medida se alinea con lo dispuesto en el *Programa de Gestión Ambiental Institucional 2025-2029*, el cual establece como una

26 Universidad de Costa Rica. (2020). *Políticas institucionales 2021-2025*. Consejo Universitario. https://www.cu.ucr.ac.cr/normativa/politicas_institucionales_2021-2025.pdf

27 Organización de las Naciones Unidas. (s. f.). *Consumo y producción sostenibles*. Naciones Unidas: Objetivos de Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/>

28 QS Quacquarelli Symonds. (2024, 10 de diciembre). *QS Sustainability University Rankings 2025*. Top Universities. <https://www.topuniversities.com/sustainability-rankings>

de sus metas la implementación de mobiliario urbano, como fuentes de agua para el llenado de botellas de agua potable (Unidad de Gestión Ambiental, 2024, p. 55)²⁹.

15. Para efectos de esta propuesta se define botella plástica como un recipiente fabricado con plástico, diseñado para contener líquidos y que se utiliza una sola vez antes de ser desechada. Comprende la botella de plástico, las etiquetas, las tapas, y cualquier otro elemento accesorio, adherido o complementario.
16. Por último, una prohibición de la venta de botellas de refrescos en la Universidad de Costa Rica podría generar beneficios colaterales importantes para la salud de la comunidad universitaria. Al reducir el acceso a bebidas azucaradas, se disminuiría el consumo excesivo de azúcar, lo que contribuiría a prevenir enfermedades como obesidad y diabetes tipo 2. Además, se fomentaría el consumo de agua y bebidas naturales, con lo que se mejoraría los hábitos alimentarios. Esta medida también podría impactar positivamente al reforzar el compromiso institucional con la promoción de entornos saludables y sostenibles.

ACUERDA

1. Reafirmar el compromiso de la Universidad de Costa Rica con la protección del medio ambiente, mediante la promoción activa de la sustentabilidad en el quehacer universitario como parte integral de sus principios orientadores y su responsabilidad con las generaciones presentes y futuras.
2. Solicitar a la Administración:
 - a) Emitir, en un plazo de seis meses, las directrices correspondientes para prohibir la venta de botellas de plástico de un solo uso, particularmente aquellas utilizadas para bebidas y agua, dentro de todas las sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica, lo cual incluye sodas, cafeterías, máquinas expendedoras y eventos institucionales.
 - b) Instalar dispensadores de agua en diversos puntos estratégicos de todas las sedes, recintos, fincas y estaciones experimentales de la Universidad de Costa Rica, con el fin de facilitar el acceso al agua potable a la comunidad universitaria y a las personas que visitan el campus universitario. Esta medida se ejecutará paulatinamente, según las condiciones presupuestarias de la Institución.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 8

La Comisión de Coordinadores de Comisiones Permanentes presenta el Dictamen CCCP-7-2025 en torno a revisar y actualizar las disposiciones de los títulos II y III del *Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica* de acuerdo con lo establecido en la *Ley marco de empleo público*.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS expone el dictamen, que, a la letra, dice:

1. El Consejo Universitario en la sesión n.º 6736, artículo 10, del 21 de setiembre de 2023, acordó:

Elaborar un pase a la Comisión de Coordinadores de Comisiones Permanentes (CCCP) para que revise y actualice las disposiciones de los títulos II y III del Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica de acuerdo con lo establecido en la Ley marco de empleo público.

29 Unidad de Gestión Ambiental, Vicerrectoría de Administración. (2024). *Programa de Gestión Ambiental Institucional PGAI 2025–2029*. Universidad de Costa Rica. Recuperado el 10 de octubre de 2025, de <https://galardonambiental.ucr.ac.cr/es/categoria-pgai>

2. La Dirección del Consejo Universitario trasladó el caso a la Comisión de Coordinadores de Comisiones Permanentes para el respectivo análisis y dictamen (Pase CU-87-2023, del 29 de setiembre de 2023).
3. El Consejo Universitario en la sesión n.º 6906, artículo 9, del 10 de junio de 2025, acordó publicar en consulta la modificación de los artículos 12 y 24 del *Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica*.

ANÁLISIS

Propósito del caso

El asunto tiene como propósito analizar los títulos II y III del *Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica* y determinar la pertinencia de incluir modificaciones de acuerdo con lo establecido en la *Ley Marco de Empleo Público*.

Marco de referencia

En el 2018 se aprobó la *Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas* (Ley n.º 9635). El objetivo de esta ley fue la reducción del déficit fiscal y la mejora del gasto público por medio de regulaciones referentes a: dedicación exclusiva, prohibición, cesantía, anualidades, límites totales de las remuneraciones, carrera profesional, incentivos, suspensiones temporales de remuneraciones salariales, entre otras.

Posteriormente, en el 2022, se aprobó la *Ley Marco de Empleo Público*, Ley n.º 10.159³⁰. De conformidad con su artículo 1, esta ley tiene como propósito:

Regular las relaciones estatutarias, de empleo público y de empleo mixto, entre la Administración Pública y las personas servidoras públicas, con la finalidad de asegurar la eficiencia y eficacia en la prestación de los bienes y servicios públicos, así como la protección de los derechos subjetivos en el ejercicio de la función pública en el estado social y democrático de derecho, de conformidad con el imperativo constitucional de un único régimen de empleo público que sea coherente, equitativo, transparente y moderno.

Establecer, para igual trabajo, idénticas condiciones de eficiencia, puesto, jornada y condiciones, igual salario, que les procure bienestar y existencia digna a las personas servidoras públicas.

Esta ley estableció un monto único (salario global) para las personas servidoras públicas, lo cual eliminó otros rubros contenidos y agregados al salario base. Al respecto, el artículo 2 de dicha ley establece en las definiciones:

v) Salario global: se refiere a la remuneración o monto único que percibirá una persona servidora pública por la prestación de sus servicios, de conformidad con los postulados establecidos en la presente ley [énfasis añadido]

Por otra parte, el Consejo Universitario en la sesión n.º 6443, artículo 13, del 19 de noviembre de 2020, aprobó el *Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica*, el cual dispone la relación de empleo público de las autoridades de la Dirección Superior de la Universidad, bajo el entendido de que las autoridades de Dirección Superior son quienes dirigen la continuidad del servicio de la Administración universitaria.

Al respecto, el artículo 1 de dicho reglamento establece:

El presente reglamento es de naturaleza estatutaria y regula la especial relación de empleo público de las autoridades de la Dirección Superior de la Universidad de Costa Rica que participan de la gestión pública universitaria bajo los principios del Derecho Público. Las autoridades de Dirección Superior serán quienes conduzcan y dirijan la continuidad del servicio de la administración universitaria.

De igual forma, participarán de la gestión pública universitaria y quedarán cubiertas por este reglamento aquellas jefaturas que, en razón de su competencia y función, ejerzan potestades de asesoramiento jurídico institucional y fiscalización, así como las jefaturas de oficinas administrativas incluidas en el presente reglamento.

De igual manera, el artículo 2 del mismo reglamento establece: *Se consideran autoridades de la Dirección Superior las personas que dirigen la Rectoría, las vicerrectorías y las personas miembros del Consejo Universitario.*

30 Aprobada el 8 de marzo de 2022. Fue publicada en el Alcance Digital n.º 50 a *La Gaceta* n.º 46, del 9 de marzo de 2022. Sin embargo, entró en vigencia el 10 de marzo de 2023.

Es importante señalar que las personas cubiertas por este reglamento no son partícipes de los beneficios y otras disposiciones incluidas en convenciones colectivas. Sobre este tema, la Procuraduría General de la República ha mencionado que (...) *quienes ocupen cargos gerenciales o de fiscalización superior no les es aplicable la regulación contenida en una eventual Convención Colectiva, precisamente porque este tipo de funcionarios sí participa de la gestión pública de la Administración* (Pronunciamiento C-044-1999). Lo anterior se debe a que, según la Procuraduría:

(...) son quienes detentan directamente o influyen de modo determinante en las decisiones que la Administración tome en la negociación con sus empleados (...) la situación de hecho de esta categoría de funcionarios autoriza un trato jurídico distinto del resto de los empleados a quienes la convención es aplicable (Dictamen n.º C-029-2004).

Finalmente, en la sesión n.º 6768, artículo 5, del 14 de diciembre de 2023, el Consejo Universitario aprobó el *Reglamento del régimen salarial académico de la Universidad de Costa Rica*³¹, el cual regula (...) *la remuneración salarial del personal académico y los puestos de elección de autoridades universitarias de la Universidad de Costa Rica* (...). El artículo 2 de este reglamento, en relación con el salario del personal académico, dispone que el salario se determinará como un porcentaje tomando como referencia el salario de la decana o del decano de facultad. Este nuevo régimen define el salario como un solo monto sin que contenga otros rubros salariales.

Consulta a la comunidad universitaria

El Consejo Universitario en la sesión n.º 6906, artículo 9, del 10 de junio de 2025, analizó el Dictamen CCCP-3-2025, del 14 de mayo de 2025. Luego de la discusión, el Órgano Colegiado acordó publicar en consulta la modificación de los artículos 12 y 24 del *Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica*. El periodo de consulta a la comunidad universitaria abarcó del 18 de junio al 31 de julio de 2025. Finalizado el periodo señalado, se recibió una observación general por parte de la Srta. Andrea Natalia Lara Álvarez, estudiante de la Escuela de Arquitectura. Al respecto, se indicó:

Además de regular los sobresueldos se debe regular la capacidad de una persona de tener más de un trabajo y no afectar la calidad de su oficio en la universidad. Los estudiantes deberían evaluar si el llevar un trabajo adicional afecta el trabajo docente.

A continuación, se presenta la propuesta publicada en consulta³².

Texto vigente	Propuesta de modificación
<p>ARTÍCULO 12. Dedicación, plena, exclusiva y prohibición</p> <p>El concepto de dedicación plena o exclusiva se reconocerá de conformidad con las condiciones y el pago regulado en la reglamentación universitaria respectiva.</p> <p>El sobresueldo por concepto de prohibición se pagará únicamente a aquellos cargos de fiscalización cuando exista una norma de rango legal que así lo indique.</p>	<p>ARTÍCULO 12. Dedicación, plena, exclusiva y prohibición</p> <p>El concepto de dedicación plena o exclusiva se reconocerá de conformidad con las condiciones y el pago regulado en la reglamentación universitaria respectiva.</p> <p>El <u>rubro sobresueldo</u> por concepto de prohibición se pagará únicamente a aquellos cargos de fiscalización cuando exista una norma de rango legal que así lo indique.</p>

31 Publicado en el *Alcance a La Gaceta Universitaria* n.º 02-2024, del 3 de enero de 2024.
32 *Alcance a La Gaceta Universitaria* n.º 45-2025, del 18 de junio de 2025.

<p>ARTÍCULO 24. Anualidades</p> <p>El pago por anualidades es una retribución que reconoce la permanencia y la experiencia en la función, obtenida por los años de servicio a la Universidad de Costa Rica u otras entidades estatales. El porcentaje a reconocer por concepto de este rubro, así como la fórmula de cálculo serán de conformidad con la normativa que aplique.</p> <p>Para el reconocimiento de anualidades a personas provenientes de otras entidades estatales, la Universidad reconocerá el porcentaje y tiempo que se defina en la normativa respectiva.</p>	<p>ARTÍCULO 24. Anualidades</p> <p>El pago por anualidades es una retribución que reconoce la permanencia y la experiencia en la función, obtenida por los años de servicio a la Universidad de Costa Rica u otras entidades estatales. El monto porcentaje a reconocer por concepto de este rubro, así como la fórmula de cálculo serán de conformidad con la normativa que aplique.</p> <p>Para el reconocimiento de anualidades a personas provenientes de otras entidades estatales, la Universidad lo reconocerá el porcentaje y tiempo que se según se defina en la normativa respectiva.</p>
--	---

Análisis de la comisión

La Comisión de Coordinadores de Comisiones Permanentes (CCCP) analizó el *Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica* especialmente los títulos II y III, el *Reglamento del régimen salarial académico de la Universidad de Costa Rica*, las leyes de la República atinentes al tema en análisis tales como *Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas*³³ (Ley n.º 9635) y *Ley Marco de Empleo Público* (Ley n.º 10.159), y la observación general recibida durante el periodo de consulta.

Luego del análisis, la CCCP estimó conveniente proceder con la aprobación de los artículos 12 y 24 del *Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica*. A continuación, se detalla el análisis y reflexiones que lo motivan:

En virtud de la entrada en vigencia de la *Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas* en diciembre de 2019, el Consejo Universitario en la sesión n.º 6343, artículo 2, del 22 de enero de 2020, acordó³⁴:

2. *Recomendar a la Administración que, a partir de la estimación presupuestaria salarial que se realiza de acuerdo con el modelo universitario, analice la posibilidad de que la ejecución presupuestaria responda a lo establecido en la Ley n.º 9635 y el Reglamento del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; esto, para que con la diferencia presupuestaria entre ambos modelos de remuneración salarial se genere una reserva en caso de un eventual fallo negativo en contra de la Universidad. Lo anterior, considerando los derechos adquiridos de las personas funcionarias y la Convención Colectiva actualmente vigente.*

Además, en la sesión n.º 6427, artículo 1A, del 28 de setiembre de 2020, en la cual se discutió el Plan Presupuesto Institucional 2021, se indicó que los conceptos incluidos en las partidas de “Remuneraciones” se aplicarían conforme a lo establecido en la Ley n.º 9635.

A partir de lo anterior, la Universidad de Costa Rica inició la homologación, de manera precautoria y hasta que se resolvieran las acciones legales interpuestas referentes al sistema remunerativo de la Institución.

Sobre este tema en estudio, el artículo 50 de la Ley n.º 9635 define regulaciones específicas sobre ciertos rubros o montos de incentivos, tales como la anualidad. Al respecto, establece: *A partir de la entrada en vigencia de esta ley, el incentivo por anualidad de los funcionarios públicos cubiertos por este título será un monto nominal fijo para cada escala salarial, monto que permanecerá invariable* [énfasis añadido].

³³ Esta ley fue aprobada el 3 de diciembre de 2018, y publicada en el diario oficial La Gaceta n.º 225, del 4 de diciembre de 2018. Entró en vigencia el 1.º de julio de 2019.

³⁴ Véase la Propuesta de Dirección CU-5-2020.

Producto de la aplicación y homologación de dicha ley, se estableció un límite a las remuneraciones en componentes salariales como: anualidad, dedicación exclusiva y prohibición, así como se nominalizaron estos componentes y se ajustó el valor de acuerdo con lo dispuesto en la Ley n.º 9635.

En esta misma línea, la *Ley Marco de Empleo Público*, Ley n.º 10.159, estableció restricciones a rubros salariales al definir un monto único (salario global) para las personas servidoras públicas, con lo cual se eliminaron otros complementos contenidos en el salario base.

Producto de los cambios incluidos en las leyes antes mencionadas y la aprobación del nuevo régimen salarial académico de la Universidad de Costa Rica, se presenta la necesidad de revisar y actualizar aquellas normas que lo requieran, de manera que se realicen las concordancias correspondientes con lo establecido en el nuevo reglamento. Por lo anterior, en la sesión n.º 6736, artículo 10, del 21 de setiembre de 2023, mediante el Dictamen CCCP-6-2023, se encargó a la CCCP revisar el *Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica* y efectuar las respectivas concordancias.

Cabe tener presente que desde el 2020 el Consejo Universitario acordó, por un lado, la homologación de las disposiciones salariales para que se ajusten a la Ley n.º 9635, y por otro, solicitó a la Administración presentar al Consejo Universitario, para el análisis y aprobación, (...) *un nuevo modelo de estructura salarial, justo, competitivo y equitativo, para las nuevas personas funcionarias que ingresen a laborar en la Institución*³⁵.

Los títulos II y III del *Reglamento que regula la prestación del servicio de las personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica* contienen rubros relativos a materia salarial que se modificaron en cuanto a su aplicación institucional mediante el *Reglamento del régimen salarial académico de la Universidad de Costa Rica*. Los temas regulados en estos títulos³⁶ modificados de conformidad con las leyes mencionadas y ajustados a estas con la aprobación del nuevo régimen salarial académico. Por lo anterior, se estima pertinente la modificación de los artículos 12 y 24 del *Reglamento que regula la prestación del servicio de las personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica*, de manera que se armonicen ambas normas en estas materias.

Una vez realizado el análisis de lo dispuesto en dichos títulos y en el *Reglamento del régimen salarial académico de la Universidad de Costa Rica*, la CCCP estimó pertinente aprobar las modificaciones de forma a los artículos 12 y 24 tal como se publicaron en consulta, dado que no se recibieron observaciones de fondo durante el periodo de consulta y, además para dar mayor claridad al texto normativo. Los cambios incorporados son los siguientes:

Artículo 12, dedicación, plena, exclusiva y prohibición: modificar la palabra “sobresueldo” por “rubro” para evitar que este término sea interpretado como un plus, y más bien, remita al reconocimiento de una característica del puesto.

Artículo 24, anualidades: eliminar “porcentaje y tiempo” y agregar “monto” pues todos estos componentes se han nominalizado. Además, es necesario indicar que para quienes ingresan o se trasladan al nuevo régimen salarial académico no se les reconoce este componente.

PROPUESTA DE ACUERDO

La Comisión de Coordinadores de Comisiones Permanentes presenta al plenario la siguiente propuesta de acuerdo:

CONSIDERANDO QUE:

1. El Consejo Universitario en la sesión n.º 6736, artículo 10, del 21 de setiembre de 2023, acordó:

Elaborar un pase a la Comisión de Coordinadores de Comisiones Permanentes (CCCP) para que revise y actualice las disposiciones de los títulos II y III del Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica de acuerdo con lo establecido en la Ley marco de empleo público.

2. La Dirección del Consejo Universitario trasladó el caso a la Comisión de Coordinadores de Comisiones Permanentes para el respectivo análisis y dictamen (Pase CU-87-2023, del 29 de setiembre de 2023).

³⁵ Véase el acuerdo 1-b) de la sesión n.º 6343, artículo 2, del 22 de enero de 2020.

³⁶ Véase el anexo 1 de este dictamen.

3. El asunto tiene como propósito analizar los títulos II y III del *Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica* e incluir las modificaciones pertinentes de acuerdo con lo establecido en la *Ley Marco de Empleo Público*³⁷.
4. El Consejo Universitario, en la sesión n.º 6906, artículo 9, del 10 de junio de 2025, acordó publicar en consulta la modificación de los artículos 12 y 24 del *Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica*. La propuesta se publicó en el *Alcance a La Gaceta Universitaria* n.º 45-2025, del 18 de junio de 2025. El periodo de consulta venció el 31 de julio de 2025. Finalizado este plazo, se recibió una observación general por parte de la comunidad universitaria.
5. La *Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas*³⁸ (Ley n.º 9635), aprobada el 3 de diciembre de 2018, tiene como objetivo reducir el déficit fiscal y mejorar el gasto público por medio de regulaciones referentes a: dedicación exclusiva, prohibición, cesantía, anualidades, límites totales de las remuneraciones, carrera profesional, incentivos, suspensiones temporales de remuneraciones salariales, entre otras.
6. La *Ley Marco de Empleo Público*, Ley n.º 10.159³⁹, estableció un único régimen de empleo público con igualdad de condiciones y régimen salarial, lo cual eliminó otros rubros contenidos y agregados al salario base. En el artículo 1 de esta ley se establece como su propósito:

Regular las relaciones estatutarias, de empleo público y de empleo mixto, entre la Administración Pública y las personas servidoras públicas, con la finalidad de asegurar la eficiencia y eficacia en la prestación de los bienes y servicios públicos, así como la protección de los derechos subjetivos en el ejercicio de la función pública en el estado social y democrático de derecho, de conformidad con el imperativo constitucional de un único régimen de empleo público que sea coherente, equitativo, transparente y moderno.

Establecer, para igual trabajo, idénticas condiciones de eficiencia, puesto, jornada y condiciones, igual salario, que les procure bienestar y existencia digna a las personas servidoras públicas.
7. La Procuraduría General de la República ha mencionado que a (...) *quienes ocupen cargos gerenciales o de fiscalización superior no les es aplicable la regulación contenida en una eventual Convención Colectiva, precisamente porque este tipo de funcionarios sí participa de la gestión pública de la Administración* (Pronunciamiento C-044-1999). Lo anterior se debe a que, según la Procuraduría:

(...) son quienes detentan directamente o influyen de modo determinante en las decisiones que la Administración tome en la negociación con sus empleados (...) la situación de hecho de esta categoría de funcionarios autoriza un trato jurídico distinto del resto de los empleados a quienes la convención es aplicable (Dictamen n.º C-029-2004).
8. El Consejo Universitario en la sesión n.º 6443, artículo 13, del 19 de noviembre de 2020, aprobó el *Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica*, que rige la relación de empleo público de las autoridades de la Dirección Superior de la Universidad, bajo el entendido de que las autoridades de Dirección Superior son quienes dirigen la continuidad del servicio de la Administración universitaria⁴⁰.
9. El Consejo Universitario en la sesión n.º 6343, artículo 2, del 22 de enero de 2020, acordó⁴¹ homologar de manera precautoria los rubros salariales, de conformidad con la Ley n.º 9635, hasta tanto se resolvieran las acciones legales interpuestas referentes al sistema remunerativo de la Institución. También, en la sesión n.º 6427, artículo 1A, del 28 de setiembre de 2020, este Órgano Colegiado definió que los conceptos incluidos en las partidas de “remuneraciones” se aplicarían conforme a lo establecido en dicha ley.
10. La aplicación y homologación de rubros salariales con la *Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas*, Ley n.º 9635, estableció un límite a las remuneraciones en componentes como: anualidad, dedicación exclusiva y prohibición, así como se nominalizaron estos componentes y se ajustó el valor de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

37 Pase CU-87-2023.

38 Esta ley fue aprobada el 3 de diciembre de 2018, y publicada en el diario oficial *La Gaceta* n.º 225, del 4 de diciembre de 2018. Entró en vigencia el 1.º de julio de 2019.

39 Aprobada el 8 de marzo de 2022. Fue publicada en el Alcance Digital n.º 50 a *La Gaceta* n.º 46, del 9 de marzo de 2022. Sin embargo, entró en vigencia el 10 de marzo de 2023.

40 Véase el artículo 1 del *Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica*.

41 Véase la Propuesta de Dirección CU-5-2020.

11. La *Ley Marco de Empleo Público*, Ley n.º 10.159, estableció restricciones a rubros salariales y definió un monto único (salario global) para las personas servidoras públicas, con lo cual se eliminaron otros complementos contenidos en el salario base.
12. En la sesión n.º 6768, artículo 5, del 14 de diciembre de 2023, el Consejo Universitario aprobó el *Reglamento del régimen salarial académico de la Universidad de Costa Rica*⁴², el cual regula la (...) remuneración salarial del personal académico y los puestos de elección de autoridades universitarias de la Universidad de Costa Rica (...). El artículo 2 de este reglamento, en relación con el salario del personal académico, dispone que el salario se determinará como un porcentaje tomando como referencia el salario de la decana o del decano de facultad. Este nuevo régimen define el salario como un monto sin que contenga otros rubros salariales.
13. Los cambios incluidos en las Leyes n.ºs 9.635 y 10.159, y la aprobación del nuevo régimen salarial académico dieron como resultado la necesidad de revisar y actualizar aquellas normas que lo requirieran para realizar las concordancias correspondientes con lo establecido en el nuevo *Reglamento del régimen salarial académico de la Universidad de Costa Rica*⁴³.
14. Los títulos II y III del *Reglamento que regula la prestación del servicio de las personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica* contiene rubros relativos a materia salarial que se modificaron en cuanto a su aplicación institucional mediante el *Reglamento del régimen salarial académico de la Universidad de Costa Rica*.
15. Realizado el análisis de las Leyes n.ºs 9.635 y 10.159, del contenido de los títulos II y III del *Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica*, de lo dispuesto en el *Reglamento del régimen salarial académico de la Universidad de Costa Rica*, y de la observación recibida, la Comisión de Coordinadores de Comisiones Permanentes estima pertinente aprobar las modificaciones de forma a los artículos 12 y 24, tal como se publicaron en consulta; dado que no se recibieron observaciones de fondo durante ese periodo; asimismo, para establecer las respectivas concordancias respecto al *Reglamento del régimen salarial académico de la Universidad de Costa Rica*, y dar mayor claridad al texto normativo.

ACUERDA

Aprobar la modificación de los artículos 12 y 24 del *Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica*, tal como aparece a continuación:

ARTÍCULO 12. Dedicación, plena, exclusiva y prohibición

El concepto de dedicación plena o exclusiva se reconocerá de conformidad con las condiciones y el pago regulado en la reglamentación universitaria respectiva.

El rubro de prohibición se pagará únicamente a aquellos cargos de fiscalización cuando exista una norma de rango legal que así lo indique.

ARTÍCULO 24. Anualidades

El pago por anualidades es una retribución que reconoce la permanencia y la experiencia en la función, obtenida por los años de servicio a la Universidad de Costa Rica u otras entidades estatales. El monto a reconocer por concepto de este rubro, así como la fórmula de cálculo, serán de conformidad con la normativa que aplique.

Para el reconocimiento de anualidades a personas provenientes de otras entidades estatales, la Universidad procederá según se defina en la normativa respectiva.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS finaliza la lectura del dictamen. Remarca que el documento está firmado por las personas coordinadoras de las comisiones permanentes, bajo la asesoría del Lic. Gerardo Fonseca Sanabria, coordinador de la Unidad de Estudios del Consejo Universitario. Al no haber solicitudes para el uso de la palabra, somete a votación la propuesta de acuerdo, y se obtiene el siguiente resultado:

⁴² Publicado en el *Alcance a La Gaceta Universitaria* n.º 02-2024, del 03 de enero de 2024.

⁴³ Aprobado en la sesión n.º 6768, artículo 5, del 14 de diciembre de 2023.

VOTAN A FAVOR: M. Sc. Jáírol Núñez Moya, Dr. Eduardo Calderón Obaldía, Dra. Ilka Treminio Sánchez, Sr. Fernán Orlich Rojas, Mag. Hugo Amores Vargas, Lic. William Méndez Garita, Srta. Isela Chacón Navarro, Ph. D. Sergio Salazar Villanea, Dr. Keilor Rojas Jiménez y Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas.

TOTAL: Diez votos.

EN CONTRA: Ninguno.

Por lo tanto, el Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. El Consejo Universitario en la sesión n.º 6736, artículo 10, del 21 de setiembre de 2023, acordó:

Elaborar un pase a la Comisión de Coordinadores de Comisiones Permanentes (CCCP) para que revise y actualice las disposiciones de los títulos II y III del Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica de acuerdo con lo establecido en la Ley marco de empleo público.

2. La Dirección del Consejo Universitario trasladó el caso a la Comisión de Coordinadores de Comisiones Permanentes para el respectivo análisis y dictamen (Pase CU-87-2023, del 29 de setiembre de 2023).

3. El asunto tiene como propósito analizar los títulos II y III del *Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica* e incluir las modificaciones pertinentes de acuerdo con lo establecido en la *Ley Marco de Empleo Público*⁴⁴.

4. El Consejo Universitario, en la sesión n.º 6906, artículo 9, del 10 de junio de 2025, acordó publicar en consulta la modificación de los artículos 12 y 24 del *Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica*. La propuesta se publicó en el *Alcance a La Gaceta Universitaria* n.º 45-2025, del 18 de junio de 2025. El periodo de consulta venció el 31 de julio de 2025. Finalizado este plazo, se recibió una observación general por parte de la comunidad universitaria.

5. La *Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas*⁴⁵ (Ley n.º 9635), aprobada el 3 de diciembre de 2018, tiene como objetivo reducir el déficit fiscal y mejorar el gasto público por medio de regulaciones referentes a: dedicación exclusiva, prohibición, cesantía, anualidades, límites totales de las remuneraciones, carrera profesional, incentivos, suspensiones temporales de remuneraciones salariales, entre otras.

6. La *Ley Marco de Empleo Público*, Ley n.º 10.159⁴⁶, estableció un único régimen de empleo público con igualdad de condiciones y régimen salarial, lo cual eliminó otros rubros contenidos y agregados al salario base. En el artículo 1 de esta ley se establece como su propósito:

Regular las relaciones estatutarias, de empleo público y de empleo mixto, entre la Administración Pública y las personas servidoras públicas, con la finalidad de asegurar la eficiencia y eficacia en la prestación de los bienes y servicios públicos, así como la protección de los derechos subjetivos en el ejercicio de la función pública en el estado social y democrático de derecho, de conformidad con el imperativo constitucional de un único régimen de empleo público que sea coherente, equitativo, transparente y moderno.

⁴⁴ Pase CU-87-2023.

⁴⁵ Esta ley fue aprobada el 3 de diciembre de 2018, y publicada en el diario oficial *La Gaceta* n.º 225, del 4 de diciembre de 2018. Entró en vigencia el 1.º de julio de 2019.

⁴⁶ Aprobada el 8 de marzo de 2022. Fue publicada en el Alcance Digital n.º 50 a *La Gaceta* n.º 46, del 9 de marzo de 2022. Sin embargo, entró en vigencia el 10 de marzo de 2023.

Establecer, para igual trabajo, idénticas condiciones de eficiencia, puesto, jornada y condiciones, igual salario, que les procure bienestar y existencia digna a las personas servidoras públicas.

7. La Procuraduría General de la República ha mencionado que a (...) *quienes ocupen cargos gerenciales o de fiscalización superior no les es aplicable la regulación contenida en una eventual Convención Colectiva, precisamente porque este tipo de funcionarios sí participa de la gestión pública de la Administración* (Pronunciamiento C-044-1999). Lo anterior se debe a que, según la Procuraduría:

(...) son quienes detentan directamente o influyen de modo determinante en las decisiones que la Administración tome en la negociación con sus empleados (...) la situación de hecho de esta categoría de funcionarios autoriza un trato jurídico distinto del resto de los empleados a quienes la convención es aplicable (Dictamen n.º C-029-2004).
8. El Consejo Universitario, en la sesión n.º 6443, artículo 13, del 19 de noviembre de 2020, aprobó el *Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica*, que rige la relación de empleo público de las autoridades de la Dirección Superior de la Universidad, bajo el entendido de que las autoridades de Dirección Superior son quienes dirigen la continuidad del servicio de la Administración universitaria⁴⁷.
9. El Consejo Universitario en la sesión n.º 6343, artículo 2, del 22 de enero de 2020, acordó⁴⁸ homologar de manera precautoria los rubros salariales, de conformidad con la Ley n.º 9635, hasta tanto se resolvieran las acciones legales interpuestas referentes al sistema remunerativo de la Institución. También, en la sesión n.º 6427, artículo 1A, del 28 de setiembre de 2020, este Órgano Colegiado definió que los conceptos incluidos en las partidas de “remuneraciones” se aplicarían conforme a lo establecido en dicha ley.
10. La aplicación y homologación de rubros salariales con la *Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas*, Ley n.º 9635, estableció un límite a las remuneraciones en componentes como: anualidad, dedicación exclusiva y prohibición, así como se nominalizaron estos componentes y se ajustó el valor de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
11. La *Ley Marco de Empleo Público*, Ley n.º 10.159, estableció restricciones a rubros salariales y definió un monto único (salario global) para las personas servidoras públicas, con lo cual se eliminaron otros complementos contenidos en el salario base.
12. En la sesión n.º 6768, artículo 5, del 14 de diciembre de 2023, el Consejo Universitario aprobó el *Reglamento del régimen salarial académico de la Universidad de Costa Rica*⁴⁹, el cual regula la (...) *remuneración salarial del personal académico y los puestos de elección de autoridades universitarias de la Universidad de Costa Rica* (...). El artículo 2 de este reglamento, en relación con el salario del personal académico, dispone que el salario se determinará como un porcentaje tomando como referencia el salario de la decana o del decano de facultad. Este nuevo régimen define el salario como un monto sin que contenga otros rubros salariales.
13. Los cambios incluidos en las Leyes n.ºs 9.635 y 10.159, y la aprobación del nuevo régimen salarial académico dieron como resultado la necesidad de revisar y actualizar aquellas normas que lo requirieran para realizar las concordancias correspondientes con lo establecido en el nuevo *Reglamento del régimen salarial académico de la Universidad de Costa Rica*⁵⁰.

⁴⁷ Véase el artículo 1 del *Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica*.

⁴⁸ Véase la Propuesta de Dirección CU-5-2020.

⁴⁹ Publicado en el *Alcance a La Gaceta Universitaria* n.º 02-2024, del 03 de enero de 2024.

⁵⁰ Aprobado en la sesión n.º 6768, artículo 5, del 14 de diciembre de 2023.

14. Los títulos II y III del *Reglamento que regula la prestación del servicio de las personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica* contienen rubros relativos a materia salarial que se modificaron en cuanto a su aplicación institucional mediante el *Reglamento del régimen salarial académico de la Universidad de Costa Rica*.
15. Realizado el análisis de las Leyes n.ºs 9.635 y 10.159, del contenido de los títulos II y III del *Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica*, de lo dispuesto en el *Reglamento del régimen salarial académico de la Universidad de Costa Rica*, y de la observación recibida, la Comisión de Coordinadores de Comisiones Permanentes estima pertinente aprobar las modificaciones de forma a los artículos 12 y 24, tal como se publicaron en consulta; dado que no se recibieron observaciones de fondo durante ese periodo; asimismo, para establecer las respectivas concordancias respecto al *Reglamento del régimen salarial académico de la Universidad de Costa Rica*, y dar mayor claridad al texto normativo.

ACUERDA

Aprobar la modificación de los artículos 12 y 24 del *Reglamento que regula la prestación del servicio de personas funcionarias de la Administración Superior de la Universidad de Costa Rica*, tal como aparece a continuación:

ARTÍCULO 12. Dedicación, plena, exclusiva y prohibición

El concepto de dedicación plena o exclusiva se reconocerá de conformidad con las condiciones y el pago regulado en la reglamentación universitaria respectiva.

El rubro de prohibición se pagará únicamente a aquellos cargos de fiscalización cuando exista una norma de rango legal que así lo indique.

ARTÍCULO 24. Anualidades

El pago por anualidades es una retribución que reconoce la permanencia y la experiencia en la función, obtenida por los años de servicio a la Universidad de Costa Rica u otras entidades estatales. El monto a reconocer por concepto de este rubro, así como la fórmula de cálculo, serán de conformidad con la normativa que aplique.

Para el reconocimiento de anualidades a personas provenientes de otras entidades estatales, la Universidad procederá según se defina en la normativa respectiva.

ACUERDO FIRME.

LA PH. D. ANA PATRICIA FUMERO VARGAS finaliza la presente sesión. Agradece a las personas que siguieron la transmisión, por su tiempo y comentarios señalados en las redes del CU. Desea un buen día.

A las once horas y quince minutos, se levanta la sesión.

Ph. D. Ana Patricia Fumero Vargas
Directora
Consejo Universitario

Transcripción: Suhelen Fernández McTaggart, Unidad de Actas

Diagramación: Shirley Campos Mesén, Unidad de Actas

Coordinación: Carmen Segura Rodríguez, Unidad de Actas

Revisión filológica: Daniela Ureña Sequeira, Asesoría Filológica

NOTAS:

1. *Todos los documentos de esta acta se encuentran en los archivos del Centro de Información y Servicios Técnicos, (CIST), del Consejo Universitario, donde pueden ser consultados.*
2. *El acta oficial actualizada está disponible en <http://cu.ucr.ac.cr>*

